

NOVIEMBRE 29 Y 30 DE 1934

62ª REUNION — 4ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDENCIA DE LOS DOCTORES ANTENOR R. FERREIRA y ROBERTO J. NOBLE

MINISTRO PRESENTE: de Hacienda, doctor Federico Pinedo; DIPUTADOS PRESENTES: Agüero Santos, Ahumada Luis Alberto, Alonso Alfredo J., Amadeo y Videla Daniel, Ameri Rogelio L., Amodeo Aurelio F., Andreis Fernando de, Aráoz Ernesto M., Arce José, Arnoldi Adolfo, Arrieta Herminio, Basualdo Honorio, Benegas Tiburcio, Bermúdez Manuel A., Besasso Manuel V., Biancofiore Rafael, Bogliolo Rómulo, Bonazzola Carlos F., Briuolo Miguel, Bruchou Eduardo, Buira Demetrio, Buitrago Pedro, Bunge Augusto, Bustillo José M., Buyán Marcelino, Cáceres Lorenzo, Cafferata Juan F., Candia Cornelio, Cárcano Miguel Angel, Carreras Ernesto L. de las, Castiñeiras Alejandro, Castro Felipe, Coca Joaquín, Contte José A., Cordero Octavio, Coromina Segura Rodolfo, Couriel Carlos D., Dávila Miguel V., Degano Alfredo P., Della Latta Jerónimo, De Miguel Benito, Dickmann Adolfo, Dickmann Enrique, Escalera Facundo, Escobar Adrián C., Fernández Damián, Ferreira Antenor R., Ganza Marcelino, Garela Gorostiza Raúl, Ghioldi Américo, Giménez Angel M., Godfrid Juan, Godoy Raúl, Gómez Rincón Abel, González Benjamín S., González Guerrico Manuel, González Masada Manuel, González Valentín, Graffigna Santiago, Grisolia Luis, Groppo Pedro, Guglielmoli Aquiles M., Iribarne Alberto, Iriondo Urbano de, Jarrel Enrique C., Korn Guillermo, Lamesa Juan B., López Héctor S., Mancini Rafael, Martínez José Heriberto, Mattos Luis María, Molina Serapio, Moret Carlos (h.), Morrough Bernard Juan P., Mouchet Enrique, Movsichoff Bernardo, Noble Julio A., Noble Roberto J., Oddone Jacinto, Padilla Tiburcio, Palacín Manuel, Palacín Pedro, Palacio Benjamín, Palmeiro José, Parodi Misael J., Pena José Luis, Pérez Leirós Francisco, Pfeleger José E., Pintos Angel, Pita Carlos A., Pressacco Juan P., Pueyrredon Carlos A., Quiroga Félix, Radfo Pedro, Ramiconi Luis, Ramírez Manuel (h.), Repetto Agustín, Repetto Nicolás, Rodríguez Alfredo, Rozas José E., Ruggieri Silvio L., Ruiz Oscar, Salas José Raquel, Salcedo Saturnino, Santillán Enrique, Sellarés Avelino, Simón Padrós Juan, Solari Felipe C., Solari Juan Antonio, Solís Rogelio J., Speroni Daniel O., Spinetto Alfredo L., Taboada Mora Cipriano, Uriburu Francisco, Vega Abraham de la, Viechi Adolfo A., Vidal Baigorri José, Videla Dorna Daniel, Videla Rodolfo G., Vionnet Rodolfo L., Wado Eugenio, Zerda Justiniano de la; AUSENTES, CON LICENCIA: Aguirrezabala Miguel A., Aráoz Eudoro D., Aráoz José Ignacio, Becerra Eugenio A. (h.), Bosano Ansaldo Daniel, Calderón Osvaldo M., Espil Alberto, Franco Manuel A., Garayalde José María, Herrera Bruno J., Iuda Rufino, Lima Vicente Solano, Magris Amleto, Marcó Cipriano F., Monesca Eduardo, Ocampo Enrique, Parera Gregorio, Rojas Marcos E., Saravia José M.; CON AVISO: Costa Méndez Nicenor, Pomponio Vicente B., Zarazaga Marcel J.; SIN AVISO: Acosta Guillermo, Carreras José, Carús Agustín J., Crito Miguel, Lencinas Rafael Néstor, Manacorda Carlos, Ruiz Guinazú Jacinto, Schoo Lastra Dionisio, Vallejo Luis A., Vignart Uberto F.

## SUMARIO

- 1.—Manifestaciones en minoría.
- 2.—Acta.
- 3.—Asuntos entrados:

- I.—Comunicaciones oficiales.
- II.—Peticiones particulares.

- 4.—Acuérdase licencia para faltar a sesiones a los señores diputados Inda, Aráoz (José L.) y Espil.

- 5.—Continúa la consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en los proyectos de ley sobre unificación de impuestos internos, prórroga y distribución del impuesto a los réditos y del impuesto a las ventas.

- 6.—Orden de la labor de la Honorable Cámara.

- 7.—Indicación del señor diputado Oddone para que se inserten en el Diario de Sesiones las bases referentes al sistema de votaciones mecánicas.

- 8.—Continúa la consideración del asunto a que se refiere el número 5.

- 9.—Se pasa a cuarto intermedio.

- 10.—Continúa la consideración del asunto a que se refiere el número 5.

—En Buenos Aires, a veintinueve de Noviembre de 1934, siendo la hora 17 y 28:

1

## MANIFESTACIONES EN MINORIA

**Sr. Martínez.** — ¿Cuántos diputados hay en la casa, señor presidente?

**Sr. Presidente (Ferreira).** — En la casa hay 80 señores diputados.

**Sr. Martínez.** — Hago indicación de que se siga llamando hasta obtener quórum.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente (Ferreira).** — Como hay asentimiento, así se hará.

—A la hora 17 y 50:

**Sr. Palacio.** — Pido la palabra.

Habiendo número en la casa y debiendo venir, por otra parte, los señores diputados que han asistido a la Convención Constituyente de la provincia de Buenos Aires, con el propósito de que no se malogre la sesión, propongo que se siga llamando hasta obtener quórum.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente (Ferreira).** — Como hay asentimiento, así se hará.

**Sr. Rodríguez.** — Tenía entendido, señor presidente, que habíamos pasado a cuarto intermedio.

**Sr. Presidente (Ferreira).** — No, señor diputado. La sesión de ayer se levantó, por falta de número.

—Se continúa llamando para formar quórum.

—A la hora 18 y 25:

2

## ACTA

**Sr. Presidente (Ferreira).** — Queda abierta la sesión con asistencia de 80 señores diputados.

Se va a dar lectura del acta de la sesión anterior.

—Por indicación del señor diputado Amadeo y Videla se suprime la lectura del acta y se da por aprobada.

—Ocupa su banca en el recinto, el señor ministro de Hacienda, doctor Federico Pinedo.

3

## ASUNTOS ENTRADOS

**Sr. Presidente (Ferreira).** — Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

I

## Comunicaciones oficiales

El intendente municipal de Sarmiento (San Juan), formula denuncias relacionadas con el funcionamiento del régimen municipal de la localidad. (*A la Comisión de Negocios Constitucionales*).

—La Municipalidad de Quitilipi (Chaco), solicita la sanción del proyecto de ley creando el tercer juzgado letrado en ese territorio. (*A la Comisión de Justicia*).

—El Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, invita a la Honorable Cámara al acto de clausura de la Convención Constituyente. (*Al archivo*).

II

## Peticiones particulares

La Sociedad Cooperativa de Luz y Fuerza de San Martín (Buenos Aires), solicita la exención de los derechos de aduana a los materiales eléctricos que se introduzcan del extranjero con destino a esa cooperativa. (*A la Comisión de Presupuesto y Hacienda*).

—La Asociación de Propietarios de Bienes Raíces solicita el rechazo del proyecto de ley de unificación de impuestos a las herencias. (*A la Comisión de Presupuesto y Hacienda*).

—La Convención de la Unión Cívica Radical Lencinista de Mendoza, solicita la sanción del proyecto de ley de vinos del Poder Ejecutivo. (*A sus antecedentes*).

—Vecinos de los territorios de Río Negro y Neuquén, formulan observaciones al proyecto de ley de unificación de impuestos. (A sus antecedentes).

—La Sociedad Anónima de Petróleo «Diadema Argentina», formula observaciones al proyecto de ley de impuesto a las ventas. (A sus antecedentes).

#### SOLICITUD DE SUBSIDIO:

Asociación Colonia de Niños Débiles Escuela y Patronato.

—A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

4

#### LICENCIAS

1

Mar del Plata, 28 de Noviembre de 1934.

*Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados.*

Solicito permiso para faltar a las sesiones de la presente semana.

Salúdalo atentamente.

*Rufino Inda.*

—Sin observación, se vota y acuerda, con goce de dieta, la licencia solicitada.

2

Villa Quinteros (Tucumán), 29 de Noviembre de 1934.

*Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.*

Obligaciones políticas me obligan a solicitar licencia para faltar hasta el 18 de Diciembre.

Salúdalo atentamente.

*José I. Aráoz.*

—Sin observación, se vota y acuerda, con goce de dieta, la licencia solicitada.

3

Mercedes (Buenos Aires), 29 de Noviembre de 1934.

*Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados.*

Por razones de salud, solicito permiso para faltar a dos sesiones.

Salúdalo atentamente.

*Alberto Espil.*

—Sin observación, se vota y acuerda, con goce de dieta, la licencia solicitada.

5

#### UNIFICACION DE IMPUESTOS INTERNOS

**Sr. Presidente (Ferreira).** — Continúa la consideración del despacho sobre unificación de impuestos internos.

**Sr. Simón Padrós.** — Pido la palabra.

Cuando en la sesión de ayer, después de la medulosa exposición del miembro informante, señor presidente de la comisión, doctor José Heriberto Martínez, hizo uso de la palabra el señor diputado Ghioldi en nombre de la representación socialista, brindé mi ánimo a prestarle la más absoluta atención. Sus antecedentes de hombre estudioso, nos permitía esperar un informe técnico, amplio, documental, de la unificación de impuestos internos; pero no puedo ocultar que, después del desarrollo de su tesis, quedó mi ánimo embargado con una profunda sorpresa y también con algo de pesar. Sorpresa, porque en realidad no hemos escuchado el análisis de la ley, y hemos sí, percibido el ataque pertinaz a la industria azucarera. Se ha desviado de lo fundamental; ha dejado el tronco para ir a las ramas. Sorprende que un espíritu sutil como el suyo, que ha presenciado la laboriosa gestión de la ley en la comisión, no haya captado el clima con que los representantes de

las provincias han colaborado con un esfuerzo sostenido, con lealtad absoluta, al despacho de la ley de unificación.

También con pesar, señor presidente, porque en realidad su ataque a la industria azucarera ha sido de nuevo un golpear en el corazón de vastas zonas norteñas, dedicadas con entusiasmo infinito al desarrollo de una magna acción, cual es la de hacer paz y patria en el Norte argentino.

Yo necesito, ya que se ha desviado el análisis de la ley de unificación hacia el ataque renovado a la industria azucarera, decir algunas palabras para que los señores diputados socialistas interpreten alguna vez el sentir que nos embarga cuando nos vemos tan injustamente atacados.

La grandeza del país es bien sabido que nació en la pampa. Esta incommensurable llanura que se extiende desde el Aconquija hasta las aguas del Plata, resultaba chica para el esfuerzo argentino. Y así como hubo hombres, bravos soldados que la engrandecieron en la conquista del desierto hacia el Sur, también fué útil la obra de hombres que con un esfuerzo tesonero lo engrandecieron hacia el Norte.

La pluma ágil del doctor Uriburu decía un día que en esa grande y alegre ciudad donde hay tantas estatuas sin pedestal, hay pedestales sin estatuas, refiriéndose como a una de ellas a la inolvidable figura del general Roca, el dominador del desierto. Hay hombres en esta Cámara que de jóvenes han de haber oído contar el esfuerzo tesonero y sostenido de aquella conquista, han de haber oído cómo en los fortines, limítrofes, en cada amanecer, las agudas notas de un viejo clarín saludaban la aurora, mientras se alzaba al tope el lienzo azul y blanco, batiendo sus pliegues como alas deseosas de volar más allá del infinito desierto. Pero hay otros hombres que cuando seamos viejos podremos también contar a nuestros hijos lo que ha representado la conquista de la selva norteña, de incommensurable magnitud.

con viejos quebrachales, y grandes laureles, abatidos por el hacha del leñador, para que los cráteres que abría a la tierra el desgarramiento de sus viejas raíces brindaran el germinar de la esplendorosa semilla, cuando la caricia del arado lograba convertir la vieja selva en verde cañaveral. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*).

Este es el esfuerzo que la industria azucarera representa en el Norte argentino, esfuerzo que si no ha dado, como los del Sur, soldados al ejército ha dado argentinos a la patria. (*¡Muy bien!*).

Debo ahora decir que en el curso de los debates en la Comisión de Presupuesto y también en la información del señor diputado Ghioldi, se incurre sistemáticamente en la repetición de un concepto erróneo. Se quiere dividir a las provincias argentinas en productoras y consumidoras, olvidando que no hay tal. Hay una absoluta hermandad en las provincias argentinas. Todas son productoras: las unas de productos agrícolas ganaderos, las otras de productos industriales, y todas, y cada una de ellas, son consumidoras de los productos respectivos.

No podemos olvidar que viven de la industria azucarera, del esfuerzo norteño en forma directa o indirecta, no menos de 3.000.000 de habitantes y que esos 3.000.000 representan el consumo de 300.000 toneladas de carne y de cerca de 500.000 toneladas de trigo.

No es prudente ni hábil querer dividir en esta hora económica y fiscal en la que nace tan importante ley a la Nación, a las provincias, en consumidoras y productoras. Por consiguiente, pido que esta definición quede borrada del pensamiento de la ley.

Bastaría recordar y quiero hacerlo como un homenaje al que dietó hace 23 años la ley orgánica de amparo al azúcar, al doctor Saavedra Lamas, y como recuerdo a ese esfuerzo que consolidó la acción del Norte, permítaseme leer un párrafo del discurso que pronunció en Septiembre de 1921: «Se prueba que la protección al azúcar es no sólo la protección a una industria, es la protección a una vasta región



geográfica de la República, que tiene en ella su mejor producción; que el azúcar sustenta el régimen fiscal de varias provincias, que es para un grupo de Estados argentinos el aliciente pasado y presente de su actividad económica, que ha sido una industria benemérita, que arrancó de su pobreza a toda la región del Norte, que es el fruto más noble del histórico esfuerzo de sus hijos, que por ella se construyeron las grandes líneas férreas, se alimentaron las poblaciones indígenas, se sustentaron las agregaciones adventicias y se conservó la cultura de aquellos centros seccionales de gobierno que exige hasta el equilibrio político de la Nación».

Estas tan acertadas palabras y estos inteligentes conceptos no se apartan de mi ánimo cada vez que el debate azucarero vuelve al de la Cámara.

Se ha invocado y se ha dicho en la comisión y en el recinto, que los impuestos con que las provincias han gravado sus productos responden a un avance constitucional. Yo tengo por la Constitución argentina un infinito respeto. Basta pensar que es la esencia de nuestra tradición y que en ella condensaron su experiencia y hasta su sabiduría nuestros mayores, para que sea para mí, la Constitución, el libro al cual los argentinos debemos el máximo respeto. Pero yo quiero la Constitución interpretándola en su espíritu, no como el creyente a la Biblia ni como el musulmán al Corán, como el libro que encierra el dogma, en donde la fe pone freno al análisis. Yo estudio la Constitución, no limitándome a aprenderla de memoria, sino a captar su amplio y profundo significado, y es así como he contemplado el artículo 67, inciso 16 de la Constitución, que da como a una de las directivas centrales de ese capítulo «la de promover la industria», agregando: «la introducción y establecimiento de nuevas industrias».

Hemos cumplido en el Norte, señor presidente, un precepto constitucional y si se han aplicado impuestos, ha sido en uso de esa facultad concurrente, que algún otro señor legislador podrá am-

pliar con mayor tecnicismo y mayor documentación especializada, que la que yo podría presentar.

El señor diputado Ghioldi en el curso de su exposición, y entrando ya en materia, dijo, si mal no recuerdo, — y siento venir al debate sin haber tenido en mis manos el Diario de Sesiones de ayer, que no ha sido todavía distribuido a los señores diputados — dijo que la comisión había operado en frío al consumidor.

**Sr. Ghioldi.** — Más o menos ese fué el concepto.

**Sr. Simón Padrós.** — No, señor diputado. Grandes masas de la población argentina se encontrarán aliviadas por la unificación de los impuestos internos. La superposición de gravámenes provinciales, en algunos Estados provinciales, creando esa guerra impositiva de frontera interprovincial, hace que hoy la ley de unificación de los impuestos internos sea recibida como una liberación para el comercio, para el consumidor y para el productor.

Pero no siempre el concepto de la defensa del consumidor veo que surge como directiva fundamental en la política socialista. No hace tantos meses en el Concejo Deliberante de la Capital Federal se debatía un importante asunto: la provisión de carne para el consumo de la Capital Federal. En la sesión del Concejo, de fecha 9 de Diciembre de 1932, encuentro estos párrafos del señor concejal Ghio: «Voy a sostener que la municipalidad va a llegar a terminar con la competencia desleal que se está haciendo al Matadero Frigorífico Municipal por empresas frigoríficas. Eso lo hemos de sostener en el informe de la comisión investigadora, porque nosotros, obligados a dar al personal del Matadero y Frigorífico Municipal una retribución humana, es decir, el salario mínimo, estamos superados a la «competencia desleal» de las empresas frigoríficas, que pagan salarios miserables, salarios de hambre.»

Yo comparto, señores diputados, la necesidad de sostener orgánicamente una explotación, aunque más no fuera con esa finalidad fundamental: la de

mejorar el standard de los obreros, que en ella trabajan y que cuando existe una competencia desleal hay que derrotarla; pero ese principio, ese concepto no puede ni debe ser exclusivo para el Matadero Municipal. El criterio socialista es demasiado amplio y, diré, suficientemente puro, para pretender restringirlo al pequeño problema del Matadero Municipal.

Y en el informe presentado el 10 de Octubre de 1933, firmado por los señores concejales Ghio, Poreel, Romero y Vago, se agregaba: «De ahí que su costo elevado y la exigua cantidad de animales que en el Matadero Municipal se faenan, planteen hasta hoy una cuestión sin respuesta: es la que se refiere a las amortizaciones del capital invertido y al pago de sus intereses.»

Reconozcamos, señores diputados, que es un lenguaje bien capitalista; reconozcamos que si lo emplearan algún día los industriales vinicultores o los industriales azucareros, quizá se levantara una explosión de protesta en la representación socialista.

Nosotros pretendemos que sea también amparada la industria contra la competencia desleal del salario inferior, del salario inhumano. Por eso, cuando tengo en mi banca la documentación oficial, cursada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con comunicaciones telegráficas de los señores cónsules y representantes diplomáticos en los diversos países productores de azúcar del mundo — documentación que ofrezco a los señores diputados y que puede también imprimirse en el Diario de Sesiones — y encuentro que en el Brasil se pagan 5.000 reis en los Estados del Norte y 3.000 reis en los Estados del Sur, salario que al cambio de 27,10 representa en moneda argentina 1,35 de jornal para los Estados del Norte y 0,81 para los Estados del Sur; cuando veo que en el Perú se paga 1,60 soles, que al cambio de 90 representa 1,44 pesos argentinos; cuando en Cuba, por el decreto del presidente Grau, en Enero de 1934 se pagaba 0,80 centavos de dólar americano, que equivalen a 3 pesos de nuestra

moneda; cuando en Filipinas, en Manila, se pagan 0,80 centavos de dólar filipino, que equivalen a 1,86; cuando en Java, en Singapur por ocho horas de trabajo se pagan 0,30 centavos de florín, que a 283 representan 0,85 centavos de pesos moneda legal; cuando en Praga, en Checoslovaquia — en ese país a que hacía referencia el señor diputado Ghioldi, que nos mandaba azúcar que puede cotizarse en el Puerto de Buenos Aires a menos de 2 pesos — se paga por un trabajo de sol a sol, un jornal, sin comida, — como dice el informe diplomático, 18 coronas, que al cambio libre de 17,50 representan 3,16 pesos argentinos; cuando veo todos esos salarios, yo me pregunto, señores diputados, si no hay ahí una razón para la defensa azucarera, para el amparo por el que ha venido clamando durante años y años, la industria del Norte.

Si el malogrado diputado doctor Justo, cuya ausencia de este recinto no se cansan de lamentar amigos y adversarios, pudiera presenciar los debates azucareros en un período en el que el encarecimiento de los costos y de los fletes, de los jornales y de materia prima es evidente para la industria azucarera, en un período en que se ha producido el encarecimiento de la caña y del salario, que en buena hora ha llegado pero que no es posible que salga exclusivamente del capital si se sujeta a continua pérdida, quizá hubiéramos escuchado palabras menos desalentadoras para la industria.

En el año 1926 el ex diputado doctor Justo, en un viaje realizado a Tucumán, dijo, textualmente, en una conferencia lo siguiente: «En todas partes me he informado de la situación de los trabajadores y no podría decir que considero a los obreros del azúcar en una situación inferior a los de la producción argentina en general. En cuanto a la habitación, veo la de los trabajadores de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires principalmente, y encuentro que estas casitas que rodean a los ingenios formando una especie de pueblito son en muchos casos superiores a la habitación media del tra-

bajador en Buenos Aires, que generalmente es una pieza de conventillo donde vive toda la familia.»

Y seguía diciendo en esa interesante exposición: «En la provincia de Tucumán, que es mucho más culta, que es superior a las provincias septentrionales en muchos sentidos, la situación de trabajo está determinada por acción de la ley; he notado con gran satisfacción que en Tucumán rige la jornada de ocho horas.»

**Sr. Ghioldi.** — ¿Podría el señor diputado indicarnos dónde se ha publicado?

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Señor diputado: parece que el señor diputado Ghioldi desea enterarse de cómo se ha procurado esa información el señor diputado por Tucumán y que, en reciprocidad, dirá cómo se procuró él la que trajo ayer.

**Sr. Ghioldi.** — No preguntaba eso: es una interpretación capciosa del señor ministro, que cree haber descubierto lo que yo pensaba.

Lo que preguntaba es dónde se ha publicado eso.

**Sr. Simón Padrós.** — Le voy a decir: en el diario «El Orden» de Tucumán — pues que la conferencia era en Tucumán — del día 19 de Junio de 1926, que ofrezco al señor diputado.

**Sr. Ghioldi.** — Le agradezco, pero sólo quería saber con exactitud la fecha...

**Sr. Simón Padrós.** — Todas mis citas, señor diputado, son siempre de una absoluta veracidad.

**Sr. Ghioldi.** — No dudo de la veracidad, porque conozco de memoria ese magnífico discurso.

**Sr. Simón Padrós.** — El señor diputado Ghioldi, en su exposición — y esto avanzando ya en la réplica al mismo — dijo algo más serio; dijo que el sindicato Norte-Oeste es el que había, en realidad, obtenido el usufructo, el beneficio de la ley.

**Sr. Ghioldi.** — Respetando la ley de propiedad literaria, recuerdo al señor diputado que esa frase no es mía, sino del señor ministro de Hacienda.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Es exacto.

**Sr. Simón Padrós.** — Pero comparte totalmente su impresión.

**Sr. Ghioldi.** — Efectivamente.

**Sr. Simón Padrós.** — Lo sorprendente es que los señores diputados, que tienen el trato común de los hombres en una labor parlamentaria y que tienen una experiencia acentuada, no alcanzan a interpretar cuándo hay una colaboración leal, cuándo los hombres hablan como pensando en voz alta, sin el reato siquiera de saberse frente a un adversario político.

No ha habido tal sindicato, señor diputado; y pueden haber presenciado, desde el señor ministro hasta los colegas de comisión, que las representaciones que tienen una vinculación industrial en las provincias del Norte se han abrazado a la ley de unificación, diría, como el creyente a Cristo: es, en principio, una salvación, es la unidad económica, es la tranquilidad fiscal. Entonces, no podíamos jamás plantear dificultades a la ley; pero no podíamos tampoco traicionar los intereses fiscales de nuestras provincias. Si queríamos la ley por interés económico, en cambio, por responsabilidad representativa, teníamos que hacer la ley de tal modo que cuando llegara a las Cámaras de nuestras respectivas provincias no se encontrara entorpecida por razón de que su mecanismo y las limitaciones impuestas a las provincias hicieran imposible acogerse a la ley. Y si bien la lógica dice que de dos males no hay que elegir ninguno, la lógica práctica, la efectiva, indica que de dos males hay que elegir el menor. Y esta es la situación en que se hubieran encontrado las provincias productoras de artículos gravados con impuestos provinciales, de haber salido la ley en la forma presentada en el mensaje del Poder Ejecutivo.

Hemos hecho, pues, una colaboración leal, hemos presentado las dificultades que el proyecto tenía para nuestras respectivas provincias, y nos hacíamos la ilusión, desvirtuadas ayer por el discurso del señor diputado Ghioldi,

de que habíamos logrado convencer a los señores diputados socialistas de la conveniencia y necesidad de modificar el despacho, precisamente para darle vía libre en las legislaturas provinciales.

El señor diputado Ghioldi me repitió ayer en el recinto que yo era industrial. Quizás lo hizo sin intención objetiva. Quizás no. Pero si así fuera, yo le diría al señor diputado Ghioldi que no he ocultado jamás mi posición de industrial, como no la han ocultado el ganadero o el agricultor que vienen a la Cámara, precisamente, para colaborar con mayor eficacia en los problemas que entienden. En mi primera presentación en este recinto, cuando el señor ministro Pinedo ocupaba una banca de colega, dije más o menos lo siguiente: No habrá ácido capaz de roer el temple del metal en que mi alma se acoraza. Hice mi profesión de fe industrial y en ella me mantengo, porque entiendo que no es incompatible con la lícita y digna defensa de los intereses económicos de aquella provincia que me ha delegado a la Cámara precisamente sin excluir esa significación. Por consiguiente, en el momento en que una ley de unificación de impuestos internos va a tener una trascendencia tan enorme en la vida económica y fiscal de esas provincias, ¿cómo voy a frenar el impulso de una colaboración decidida, continua, permanente, hasta conseguir un despacho de comisión que haga la ley viable!

Pero si hubiera habido provecho en esa ley, si como dice el señor diputado Ghioldi, era un triunfo oligárquico, ¿por qué no analizamos la ley? Vamos a ver dónde está ese triunfo oligárquico. El triunfo se mide, y se aprecia por sus resultados, y se informa por la magnitud de sus cifras; yo necesito citar algunas, no por afición a los números que me empiezan ya a causar con los años; pero en este instante los números son mi defensa y a ellos voy. Triunfo oligárquico, señor diputado Ghioldi, cuando nos encontramos con semejante desarrollo de cuadro en los 20 años de la ley. Vamos a hacer des-

filar en forma sintética las provincias argentinas, desde el año 1835 al 54; y observamos lo siguiente: La recaudación promedia en los 5 años de 1929 a 1933 en la provincia de Buenos Aires que fué de 11.500.000, pasa a 32.161.000 la provincia de Santa Fe, de 7.436.000 pasa a 14.000.000; la provincia de Córdoba, de 6.091.000 pasa a 11.400.000; la provincia de Entre Ríos, de 2.317.000 pasa a 6.620.000; Tucumán, entre impuestos a la producción y consumo, de 7.628.000 pasa a 8.039.000; Salta, de 1.657.000, pasa a 2.343.000; Santiago del Estero, de 730.000 pasa a 4.073.000; Mendoza, de 17.240.000, pasa a 12.651.000; Jujuy, de 2.236.000 pasa a 2.046.000; Corrientes, de 429.000, pasa a 5.401.000; San Luis, de 416.000 pasa a 1.810.000; San Juan, de 7.746.000 pasa a 5.631.000; La Rioja, de 118.000 pasa a 1.241.000; Catamarca, de 111.000 pasa a 1.526.000.

Estas cifras que había que citar así en forma concreta no tienen el exacto valor sino con el índice comparativo que es el que resalta la posición definitiva de las provincias en virtud de la unificación de impuestos. De ahí el cuadro que preparé en donde está el desarrollo año por año de la renta que va a recibir cada provincia comparada con el promedio de su recaudación por consumo y producción total de 1929 a 1933. Buenos Aires pasa de 1 a 2,78, quiere decir que casi triplica. Santa Fe pasa a 1,88, casi duplica; Córdoba pasa a 1,88, casi duplica; Entre Ríos a 2,86, casi triplica; Tucumán pasa a 1,05. El triunfo oligarca del sindicato mantiene por dichos impuestos para Tucumán el índice de 1,05; Salta, 1,41; Santiago del Estero, 5,57; Mendoza, 0,73; Jujuy, 0,91; Corrientes, 12,58; San Luis, 4,35; San Juan, 0,73; La Rioja, 10,48; Catamarca, que bate el record, 14,10.

Estableciendo el orden en índices, resulta que las provincias en orden de beneficio son las siguientes: 1º, Catamarca; 2º, Corrientes; 3º, La Rioja. Y siguen en 4º lugar Santiago del Estero; 5º San Luis; 6º, Entre Ríos; 7º, Buenos Aires; 8º, Córdoba; 9º, Santa Fe; 10º,

Salta; 11°. Tucumán; 12°. Jujuy; 13°. Mendoza; 14°. San Juan. Qué casualidad: Las cinco provincias del sindicato oligarca ocupan los cinco últimos lugares del índice de retribuciones en virtud de la ley de unificación.

**Sr. Dickmann (A.).** — ¿Me permite el señor diputado?... Sé que no lo molesto.

**Sr. Simón Padrós.** — Nunca.

**Sr. Dickmann (A.).** — Reconozco la colaboración eficaísima del señor diputado en el seno de la comisión; pero me voy a permitir colaborar en este momento con él para completar su información. El señor diputado ha olvidado que debido a su propuesta se ha establecido en el artículo 8° lo siguiente:

Las provincias afectadas por la disminución dispuesta en el artículo anterior tendrán derecho a que la Nación tome a su cargo hasta su extinción, deuda provincial actualmente existente, consolidada o que se consolide antes de tres años, por un importe nominal cuyo servicio de interés y amortización equivalga a las entidades que las provincias dejarán de percibir cada año en relación al inmediato anterior, por aplicación del artículo precedente.

Quiere decir que se ha resarcido la pérdida a esas provincias. Seguramente por un olvido no lo ha dicho el señor diputado.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — No es así.

**Sr. Simón Padrós.** — Si hubiera esperado breves minutos se hubiera ahorrado la lectura un poco fatigosa y una referencia inútil, porque precisamente iba a entrar a ese tema.

**Sr. Dickmann (A.).** — Temía que se hubiera olvidado.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Al señor diputado le convendría que se olvidara.

**Sr. Simón Padrós.** — Iba a decir que esa compensación en el servicio de la deuda, y que equivale para Tu-

cumán a una economía de más o menos 286.000 pesos en cada uno de los primeros 4 años y de 115.000 en los siguientes hasta endosar su deuda total, aproximadamente hacia 1950, no es sino la exacta equivalencia de lo que la Nación le va a quitar, y como he comparado las cifras relativas al último año en que ya no existe compensación, porque las provincias van perdiendo 5 % por año durante 4 años y 2 % por año durante los últimos 16 años, precisamente en este sentido tenía que destacar el error con que el señor diputado Ghioldi dijo ayer que en virtud de esa nueva redacción, que le iba mermando 2 % por año a partir del cuarto, en vez del 5 % que decía el mensaje del Poder Ejecutivo, surgía una ventaja que avaluó en la cifra de 29.000.000, pero no hay tal. Esa lentitud en el decrecimiento ha sido una concesión bondadosa del señor ministro; ha sido así como una anestesia para extraer, no diré sin dolor, pero con menos dolor, la quita del 5 % que primero había establecido. Se hace la quita más lenta, pero se hace definitiva.

**Sr. Ghioldi.** — Eso no quiere decir que la cifra que yo haya dado esté mal.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Las cifras están bien, pero el concepto del señor diputado por Tucumán, también es exacto.

**Sr. Ghioldi.** — No son incompatibles los dos conceptos. El habla de un concepto y yo de otro.

**Sr. Simón Padrós.** — La quita, aunque sea más lenta, existe. Es en ese sentido que rectificaba al señor diputado. Pero el caso más importante en donde el señor diputado Ghioldi tuvo un especial y amable ensañamiento (*risas*) fué en el de Tucumán, donde magnificó la situación en forma tal que me veo obligado a replicar para que no quede en la Honorable Cámara y en los que puedan seguir el debate sobre la unificación, la impresión que habría

quedado, dada la forma en que fué presentado el asunto.

Ante todo debo decir, que el primer informe remitido por el Poder Ejecutivo, traducido en números y que tengo a la vista, fijaba a Tucumán en su artículo 7º, una recaudación en 1933, computando las letras de los 2 centavos gravadas por la ley de 1933 y seguramente por error ascendía a pesos 6.317.000.

**Sr. Ghioldi.** — ¿A qué informe se refiere?

**Sr. Simón Padrós.** — Al que vino del Poder Ejecutivo.

**Sr. Ghioldi.** — Yo tengo aquí el comparativo.

**Sr. Simón Padrós.** — No es ése. El primer informe, de traducción de números publicado a mimeógrafo que tengo a la vista y que ofrezco al señor diputado, asignaba para Tucumán...

**Sr. Ghioldi.** — Los miembros de la comisión tienen...

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Los dos tienen razón. El proyecto enviado por el gobierno a la Cámara consigna la cifra del señor diputado Ghioldi.

**Sr. Dickmann (A.).** — Los demás eran trabajos preparatorios de la sub comisión.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — El trabajo preparatorio de ese proyecto que se varió el día antes de mandarlo, en virtud de unos datos que llegaron de Tucumán, consignaba las cantidades que indica el señor diputado Simón Padrós.

**Sr. Dickmann (A.).** — Fueron trabajos internos de la comisión.

**Sr. Simón Padrós.** — Los diputados que hemos tenido la ansiedad de esta ley, nos hemos acercado al ministerio para pedir que nos tradujera en cifras el alcance del proyecto, y ese pedido, diría particular, formulado por algunos diputados de la comisión, fué evacuado con una impresión a mimeógrafo, en donde figuraba por producción, un promedio de 6.317.000. En lugar de

esta cifra viene ahora en el despacho la de 5.714.000, pero el mensaje del Poder Ejecutivo vino con sólo 4.651.000 pesos.

Quiere decir, que la impresión en que estaba la representación tucumana al conocer el proyecto del Poder Ejecutivo, reflejada en ese informe previo, era de 6.317.000. Pero se ha atacado en forma tan virulenta la cuestión de las letras, que es necesario aclarar debidamente.

Tucumán ha venido manteniendo un régimen de producción sujeto a la amputación derivada de su necesidad económica exigida por la ley de limitación. Tucumán ha estado precisamente en estos últimos cinco años, de 1928 a 1933, sujeta a la amputación, no sólo para reducir la producción en equilibrio con el consumo, sino también para ir eliminando paulatinamente los stocks.

De modo, entonces, que se han tomado como base de percepción únicamente cosechas amputadas. Pero cuando se trata de legislar para 20 años, cuando Tucumán había cristalizado su régimen impositivo en virtud de un impuesto consolidado por 33 años; cuando Tucumán iba a recuperar a partir de 1935-36 su cifra normal de fabricación, para satisfacer la parte proporcional de consumo interno, viene la ley de unificación. Y, ¿en qué situación quedaba, comparando el mensaje con 4.651.000 con la situación actual y definitiva de Tucumán? Su cifra normal, dentro del consumo nacional de 360.000 toneladas y admitiendo que sea de 260 a 270.000 toneladas, con los 2 centavos de impuesto consolidado por hectárea, implica una percepción de 5.200.000 pesos. Una cosecha de 3.000.000 de toneladas de caña a 26 ½ centavos por tonelada de impuesto, da 795.000. Por percepción de impuesto provincial de alcohol en los últimos 10 años, las cifras han oscilado de 300 a 700.000 y suponiendo que fueran sólo 400.000, llegaríamos a un total perma-

nente, orgánico para el futuro inmediato, a partir del año 1935 y con toda seguridad de 1936, de no menos de 6.400.000 pesos.

Esta es la realidad. No son fantasías ni cálculos. Esta es una verdad controlable con las cifras que acabo de exponer.

¿Cómo era posible pretender que Tucumán pudiera acogerse a una ley que le hubiera dado, en vez de los 5.714.000 pesos que figura en el despacho de la comisión, todavía una diferencia en menos de 692.000 pesos, porque en definitiva esta es la diferencia que se discute, ya que si algo había indiscutible es que había que tomar para Tucumán y para el año 1933, por lo menos  $\frac{1}{2}$  centavo, pagado en efectivo a cuenta, mientras resolviera en definitiva la Legislatura de Tucumán, sancionar con fuerza de ley el decreto de la intervención?

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, doctor Roberto J. Noble.

Pero hay otra argumentación. El decreto de la intervención al oficializar con su autoridad el convenio suscripto con la industria, establece en su articulado que es ad referendum de las Cámaras legislativas. De manera que si hubiera arbitrariedad en tomar, como decía, los 2 centavos, también la habría en tomar sólo  $\frac{1}{2}$  centavo; y sobre todo está la razón numérica, visible y tangible, que hubiera imposibilitado a Tucumán con una percepción que ha venido siendo efectiva en 1925, de pesos 5.740.000; en 1926, de 6.241.000 y en 1927, de 5.720.000 pesos, encararla para el futuro con sólo 4.651.000, si bien en 1933 sólo recaudó 5.616.000, incluido el impuesto de  $\frac{1}{2}$  centavo.

Como argumento final, quiero decir al señor ministro y a la Honorable Cámara que no se ha tomado en cuenta para el cómputo del promedio básico del impuesto al consumo ni a la produc-

ción, la proporción que puede haber en la gruesa partida que año tras año, en los cinco últimos años ha venido percibiendo Tucumán por concepto de impuestos atrasados, que ha variado desde 646.000 pesos como mínimo a 1.166.000. No ha sido computada ninguna de esas cifras, porque no ha sido posible establecer qué proporción había de impuesto a la producción y de impuesto al consumo, que tengo entendido fueron mínimos, y como fué aceptada la proposición de incorporar el monto de los 2 centavos suscriptos en letras, no me pareció discreto que insistiera todavía en tomar la parte proporcional que hubiera de impuestos atrasados. En esta forma y teniendo además Tucumán una percepción anual de pesos más o menos 730.000 de la Nación, en concepto de su participación en los impuestos a créditos y ventas, confío que se acogerá a la ley de unificación.

Dejo así documentada la posición relativa a Tucumán.

El señor diputado Ghioldi desviándose de la ley de unificación entró al ataque a la ley reguladora y debo decir sobre ello pocas palabras.

La ley reguladora nació en Tucumán como imperativo de una situación que se estaba volviendo ya dramática. Fué auspiciada, y sancionada por todos los grupos políticos que integraban las Cámaras. Fué igualmente solicitada íntegramente por las fuerzas vivas, gremiales, industriales, y cañeros. De manera que esa ley que nació bajo el aplauso general para resolver la gran magnitud del problema que encaraba, tuvo estas consecuencias: ha resuelto para Tucumán la tranquilidad social; ha ordenado el mercado; ha estabilizado el precio; ha equilibrado la producción al consumo; va eliminando los stocks. En una palabra, definió una situación que, de no haber sido contemplada y resuelta, el Norte, se hubiera visto en la necesidad de golpear ahora las puertas del Congreso, como tantas

otras industrias que no han podido resolver sus problemas en virtud de acuerdos, de convenios, o de leyes provinciales, para que fuese una ley nacional la que viniese a dar la solución orgánica de esta situación.

Pero yo debo decir que esta acusación a la forma en que ha solucionado sus graves problemas, es injusta, señor diputado Ghioldi. Tucumán ha vivido su problema azucarero silenciosamente, ya desde los días en que la degeneración de su vieja cepa eriolla se agotó en su vida y en el año 1916 se perdió rápidamente el viejo cañaveral elaborando ese año sólo 84.000 toneladas. La industria azucarera debió afrontar la renovación integral de sus cañaverales, 120.000 hectáreas, más o menos, que son 6.000.000 de surcos que, a 4 pesos de costo cada surco, significan 24.000.000 de pesos. Y esa pérdida total del plantel, Tucumán la sufrió tan silenciosamente, sin que el país se apercibiera de la angustia que nos agobiaba; tan silenciosamente como el pariente pobre y digno que se repliega en su dolor para no llamar a la puerta del pariente poderoso. Después, cuando ya rehabilitada la fuerza productiva de la industria con la nueva semilla de Java, llevada a Tucumán en hora grata por la previsión de su estación experimental, y pudo revivir el viejo plantel, vinieron los grandes problemas y los resolvió con su acción local, con su puro esfuerzo, y en este sentido hemos tenido el aplauso de la opinión, de gran parte de la opinión. Tengo en mi banca, y no voy a leer para no prolongar mi exposición, artículos de fondo publicado en «La Nación» en 15 de Marzo y 8 de Agosto de 1932, en el que se aplaude la acción reguladora que se derivaba de esa ley, y del convenio azucarero.

Pero en realidad, señores diputados ¿qué hemos hecho con la ley reguladora que tres gobiernos distintos han mantenido y qué tres intervenciones distintas han respetado, con pequeñas modificaciones? Pido a los señores di-

putados que quieran interpretar el sentido con que expreso estas palabras.

No voy a medir el alcance constitucional de ciertas disposiciones que la ley involucra. Si hay algún avance, la Suprema Corte del país como autoridad soberana sabrá pronunciarse al respecto. Lo que sí puedo decir es que esta ley nació como un clamor de la industria, como una necesidad de los cañeros, como una exigencia de la provincia. El plan internacional Chadbourne resuelto con posterioridad a ella, pareciera que no hubiera hecho sino incorporarla, porque ha perseguido los mismos conceptos: limitar las cosechas, eliminar los stocks, ordenar el mercado, valorizar el producto.

Pero hay un antecedente que apoya la posición en que podemos estar los tucumanos al haber resuelto por medio de una legislación el problema de la industria azucarera. Con fecha 16 de Marzo de 1933, es decir el año pasado, el presidente Roosevelt mandó al Congreso de Estados Unidos la ley que era el más formidable ariete de guerra, puesto para la paz en manos de un gobierno. Entregaba una verdadera dictadura económica al Ministerio de Agricultura. Establecía en su artículo 2º, reducir la producción de 9 productos básicos para eliminar el exceso y aumentar los precios en los años 1933 a 1935 inclusive. Regular la distribución de los productos en el mercado, e imponía gravámenes al industrial para mejorar los precios de la materia prima, con un aumento en el precio equivalente al gravamen llamado impuesto de manufactura.

Y cuando poco después esa ley quedaba sancionada, decía textualmente Roosevelt: «La parte más importante de la legislación es el proyecto de fiscalización industrial, destinado a asegurar un beneficio razonable, a garantizar salarios que permitan vivir a los obreros.» Y agregaba: «La ley de fiscalización industrial suspende los efectos de las leyes contra los trust en Norte América.»



El señor diputado por la Capital hizo otra referencia al artículo 26 del despacho. No habíamos dado a ese artículo la trascendencia que luego se le dió en el recinto, y no voy a silenciar el asombro con que he oído el ataque a ese artículo, pues cuando en la Comisión de Presupuesto fué incorporado al despacho, a pedido de la representación mendocina, se hizo no sólo sin debate, sino con la manifestación expresa hecha por un miembro del sector socialista, más o menos en estos términos: si las provincias pueden resolver sus problemas, ¿para qué quitarles la posibilidad de hacerlo? Repito que no hemos dado al artículo 26 la trascendencia, ni le hemos atribuido la magnitud a que se ha hecho referencia ayer.

En el artículo 26 se establece, simplemente, la posibilidad de seguir aplicando impuestos sin carácter fiscal para regular dentro de los límites que las respectivas constituciones de provincia permitan.

Es evidente que la mejor solución, la solución orgánica y de fondo, sería una ley nacional; es innegable que la solución ideal para resolver los problemas económicos vinculados a productos no elaborados exclusivamente por una sola provincia, será mediante una ley nacional, y yo me sentiría feliz si antes de terminar mi paso por esta Cámara pudiera contribuir a la sanción de una ley nacional de regulación azucarera.

Pero interinamente no se creyó inconveniente aceptar el pedido de los señores diputados mendocinos y permitir que esas regulaciones pudieran ser efectuadas por las provincias.

Podría modificarse debidamente el artículo, y hasta establecer paralelamente, como se ha hecho con el despacho de la ley de vinos, que desde el día en que una ley nacional regule la economía de una industria, las provincias no podrán aplicar la facultad del artículo 26.

El señor diputado de la Vega, en la Comisión de Presupuesto, al discutirse en la ley de vinos este artículo

en su parte pertinente, dijo bien que las facultades concurrentes y constitucionales no pueden ser dadas ni quitadas. Las que existan seguirán existiendo. Y si el artículo 26 fuera suprimido del despacho, no les quepa duda, señores diputados, que las provincias encontrarían la manera de regular la economía de su industria, si no con impuestos, con otras formas o sistemas, porque cuando una necesidad se vuelve imperativa se encuentra la manera de satisfacerla. No nos preocupa, pues, mayormente el artículo 26, pues por otra parte no desconocemos que esas facultades son también armas de doble filo.

El señor diputado Ghioldi hizo también una referencia en el sentido de que la parte técnica de la industria es una rémora para el progreso de la misma. Creo que fué más o menos eso lo que significó.

En otra oportunidad, ante una manifestación semejante, tuve que hacer una cita de alta autoridad. Cuando el conflicto cañero industrial se llevó al terreno presidencial, el presidente doctor Alvear emitió su conocido laudo, que para Tucumán constituye la constitución, diré económica, en la relación gremial-cañera-industrial. En ese laudo hay un párrafo que dice: «Es notorio que desde el punto de vista técnico, tanto en el proceso fabril como en los métodos de cultivo y selección de especies de caña, se ha llegado en el país a un grado de perfeccionamiento que es motivo de justificado orgullo para los factores dirigentes de la industria.» No desconozco ni niego que hay ingenios que no tienen sus instalaciones marcando el ritmo del progreso seguido por otros, pero, en ese caso, peor para ellos.

El señor diputado Ghioldi hizo otra referencia que nuevamente lamenta no poder concretar en su letra y en su espíritu por la falta del Diario de Sesiones. Entendí que dijo, que algunos industriales encontraron más utilidad en usar la ley que en explotar su ingenio. No está bien, señor diputado, ha-

cer esa manifestación en el recinto; no deben hacerse juicios temerarios ni ligeros con la autoridad que representa el nombre del señor diputado Ghioldi en esta Cámara. Yo he interpretado esa manifestación, ya que no concreta caso ni cargo, como un simple desliz, al pasar, de su discurso, como una mirada de soslayo cuando se abarca un panorama de conjunto.

En el curso de su exposición el señor diputado Ghioldi expuso con claridad dos conceptos: el de que la ordenación del mercado forcejeaba la Constitución y que el precio de carestía, como él lo llamaba, afectaba al monto del consumo. No crea, señor diputado. Cuando una medida es útil en todo el amplio alcance que persigue, no debe ser atacada. Las diferencias de precio que pudieran hacerse en la venta del azúcar sin afectar la estabilidad de la industria, serían tan insignificantes, con los limitados márgenes que el precio actual permite, dado el elevado costo de producción, que no compensarían con la mayor venta problemática el sacrificio a que se sujetaría la industria por la disminución en el precio.

Dijo el señor diputado que había tenido el asesoramiento de un técnico industrial.

**Sr. Ghioldi.** — No sé si es exactamente un técnico, pero es un hombre vinculado a la industria.

**Sr. Simón Padrós.** — Me complace que tenga el asesoramiento de factores conocedores de la industria, pero siento que un espíritu tan observador y tan analítico como el suyo no haya buscado con la misma inquietud la colaboración de otros factores técnicos.

**Sr. Ghioldi.** — Le consta al señor diputado que he tomado como polo opuesto a aquella información la del propio señor diputado, a quien le he requerido informes que utilicé.

**Sr. Simón Padrós.** — No, señor diputado; me requirió solamente infor-

mes estadísticos, y creo que se los di con toda amplitud; pero no requirió en ningún momento el análisis completo de las cuestiones que luego ha traído al debate, porque, si así hubiera hecho, si hubiera recabado otras opiniones para sujetar el control de su espíritu crítico al panorama complejo que la industria encierra, tal vez se habría evitado algunas de las apreciaciones lanzadas en el recinto. El señor diputado hizo otras que recogeré en forma rápida, porque debo terminar; el señor ministro tiene que hacer uso de la palabra, y me siento violentado por el tiempo que he demorado su exposición.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — No se violenta, señor diputado.

**Sr. Simón Padrós.** — Pero necesito desvirtuar algunas manifestaciones del del señor diputado, relativas a las cifras de los derechos aduaneros y respecto a los precios de venta.

El señor diputado Ghioldi manifestó que en nuestro país había uno de los derechos aduaneros más altos del mundo.

**Sr. Ghioldi.** — No dije de los más altos.

**Sr. Simón Padrós.** — Pero dijo que es éste uno de los países que tiene los más altos derechos. Voy a leer en forma rápida, comprometiendo la veracidad de la información, los derechos aduaneros que regían en Enero en los siguientes países: Estados Unidos, 8,65 centavos oro por kilo; Perú, 12,90; Brasil, 74,30; Francia, 31,34; Inglaterra, 8,39; Alemania, 17,71; Austria, 8,67; Italia, 20,34; Portugal, 21,52; España, 11,34; Bélgica, 10,42; Checoslovaquia, 24,20; Polonia, 28,08; Noruega, 13,76; Irlanda, 10,78. Estos datos se refieren a centavos oro por kilo de azúcar refinada.

En cuanto a los precios, también el señor diputado informó que nuestros precios eran de los más elevados y no resisto a la necesidad de citar los siguientes para Abril de este año, según la planilla adjunta:

**Precios que paga el consumidor por cada kilogramo de azúcar refinado en los distintos países. — Información consular**

(Cables recibidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores en los días 12 y 13 de Abril de 1934)

PAISES	Precios por kg. en las distintas monedas	Al cambio del día 18 de Abril	Precios por kg. en \$ m. n.
Montevideo . . . . .	30 centavos oro uruguayo	193,83	0,581
Río de Janeiro . . . . .	1,400 reis . . . . .	285,05	0,399
Londres . . . . .	6,06 peniques	17,10	0,428
Madrid . . . . .	1,70 pesetas . . . . .	45,43	0,772
Roma . . . . .	6,50 liras . . . . .	28,32	1,84
París . . . . .	4,55 francos . . . . .	21,91	0,996
Praga . . . . .	6 coronas con 20 heller .	13,82	0,856
Berlín . . . . .	6,78 marcos . . . . .	131,01	1,021
Bruselas . . . . .	2,80 francos . . . . .	77,64	0,59
Amsterdam . . . . .	0,60 florines . . . . .	224,98	1,349
Varsovia . . . . .	1,40 zlotys . . . . .	63,04	0,882

Buenos Aires, 18 de Abril de 1934.

**Sr. Dickmann (E.).** — ¿De dónde son esos datos?

**Sr. Simón Padrós.** — Tengo en mi carpeta — y pido se inserte en el Diario de Sesiones — copia de los informes telegráficos de la representación diplomática y consular, transmitidos al señor ministro de Relaciones Exteriores, doctor Saavedra Lamas.

—Asentimiento. (1)

**Sr. Presidente (Noble R. J.).** — Habiendo asentimiento, así se hará.

**Sr. Dickmann (E.).** — Es una fuente completamente incierta e insegura.

**Sr. Simón Padrós.** — Es una fuente oficial. Si a esto el señor diputado le llama fuente incierta...

**Sr. Dickmann (E.).** — Incierta e insegura. La diplomacia sirve para todo, menos para informar sobre precios.

**Sr. Simón Padrós.** — Puede hacer la Cámara telegramas a las respectivas capitales pidiendo esos informes. Comprenderá el señor diputado que cuando un representante diplomático manda una información al señor ministro de Relaciones Exteriores, resulta infantil pretender que es una información insegura.

Le voy a dar el dato de Rusia. Con-

fieso que este dato no procede de agente diplomático en aquel país, pues en Rusia no tenemos representación.

**Sr. Dickmann (E.).** — Lamento mucho que no tenga el dato.

**Sr. Simón Padrós.** — Sí, lo tengo, pero suministrado por la Legación Argentina en Alemania, el año pasado. Al 20 de Mayo de 1933, las raciones a los trabajadores se vendían a 2,50 rublos, el kilo, o sea 3,92 pesos papel. El precio del comercio era de 13 rublos por kilo, equivalente a 21,06 reichsmark, igual a 20 pesos papel por kilo. El 26 de Enero de 1931, en la Cámara de los Comunes el secretario del Parlamento manifestaba que en el mercado libre el azúcar refinada se vendía en Rusia a un equivalente de 1,26 pesos el kilo. Esto, no en la Rusia imperial del Aguila Blanca, sino en la Rusia del plumaje negro con el sistema comunista.

Para terminar, quiero hacer una manifestación de carácter numérico. Creo recordar que el señor diputado Ghioldi significó que el concurso del Banco de la Nación a la industria azucarera implicaba 44.000.000 de pesos.

**Sr. Ghioldi.** — Son datos oficiales dados por el Banco de la Nación.

**Sr. Simón Padrós.** — Así lo he interpretado.

(1) Véase pág. 374.

No tengo los datos de última hora porque ayer el debate se cerró a medianoche y no he podido materialmente actualizarlos; pero me preocupé de extraerlos cuando el pedido de informes formulado el año pasado por el señor diputado Repetto, y en la memoria del Banco encontré que en «descontos» el Banco de la Nación había anticipado a agricultores, industriales, hacendados, comerciantes y otros gremios, \$ 838.000.000, de los cuales 106 a industriales o sea el 12,64 %. Los anticipos en cuenta corriente fueron de \$ 214.000.000, de los cuales 30 a los industriales, o sea el 14,35 %. En aquella fecha la cifra total de crédito a la industria azucarera era de \$ 38.000.000. Sospecho que la diferencia de 6.000.000 de pesos, con relación al año actual, se debe a préstamos hechos por el Banco de la Nación, no a industriales y agricultores, sino a los préstamos con warrants sobre azúcar, que seguramente no están computados en la cifra del año anterior.

**Sr. Ghioldi.** — Sería interesante que el ministro de Hacienda diera datos si los tiene a mano.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — No los tengo a mano.

**Sr. Simón Padrós.** — Quiero terminar diciendo que esta cifra de \$ 38.000.000 de aquel año representa el 27,58 % del total del préstamo brindado por el Banco de la Nación a los industriales del país y representa el 3,60 % de los pesos 1.052.000.000 brindados a préstamos gremiales por el Banco de la Nación, y sólo el 2,24 % de préstamos totales otorgados en redescuentos y adelantos sobre los \$ 1.687.000.000 por el Banco de la Nación.

**Sr. Dickmann (E.).** — Habría que saber si hay otros bancos que han prestado a la industria azucarera y redescotado en el Banco de la Nación y a qué suma asciende eso.

**Sr. Simón Padrós.** — Entiendo que lo redescotado es papel de primera liquidez.

**Sr. Dickmann (E.).** — No estoy muy seguro.

**Sr. Simón Padrós.** — En todo caso va con la firma y responsabilidad del Banco que redescuenta.

**Sr. Presidente (Noble R. J.).** — La Presidencia invita al señor diputado por Tucumán se dirija a ella para evitar diálogos que dilaten el debate.

**Sr. Dickmann (E.).** — Son preguntas e interrupciones que interesan al debate.

**Sr. Presidente (Noble R. J.).** — La Presidencia las tolera siempre que no perturben el debate.

**Sr. Simón Padrós.** — Termino ya, señor presidente. He hecho una información objetiva tratando de destruir los puntos de vista expuestos por el señor diputado Ghioldi; he expresado mis argumentos con lealtad y declaro firmemente, que si como tucumano entiendo haber cumplido con mi deber ante la ley de unificación de impuestos internos, no he dejado de ser un solo instante diputado argentino.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*).

## 6

## ORDEN DE LA LABOR

**Sr. Corominas Segura.** — Pido la palabra para una moción de orden.

Hago indicación de que la Cámara continúe sesionando hasta terminar la discusión en general de esta ley, sin perjuicio de pasar a un cuarto intermedio por una hora, a las 21.

**Sr. Presidente (Noble R. J.).** — Se va a votar la proposición formulada por el señor diputado.

— Resulta afirmativa.

## 7

## INDICACION

**Sr. Oddone.** — Pido la palabra.

Deseo hacer un breve paréntesis al importante asunto en discusión para formular una solicitud a la Cámara.

La comisión que la Cámara ha designado para estudiar la forma de implantar un sistema de votación mecá-

nica en este recinto, ha elaborado las bases correspondientes y necesita publicarlas en el Diario de Sesiones. Como ello no se puede hacer sin la autorización de la Cámara, la solicito.

—Asentimiento. (1)

**Sr. Presidente** (Noble R. J.). — Como hay asentimiento, así se hará.

8

### UNIFICACION DE LOS IMPUESTOS INTERNOS

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Pido la palabra.

Supongo que la Cámara percibe que estamos tratando una ley de gran trascendencia que, de ser aprobada, como lo espero, y si cuenta con la adhesión de las provincias, marcará una época en el desenvolvimiento del derecho fiscal argentino. Es posible, entonces, que con frecuencia en el transcurso de los años se vuelva la vista hacia este debate buscando cuál fué la inspiración de la reforma y cuál fué el alcance de la transformación impositiva que quiere hoy realizarse. Esto me preocuparía bastante seriamente si tuviera un amor propio desmedido, porque no ha de ser esta exposición una de las que más haya cuidado, y ello se debe a que el gobierno creía haber dicho lo necesario en los fundamentos escritos con que acompañó el proyecto.

La tarea para el gobierno era bastante sencilla, porque se trata de una materia aclarada por exposiciones de primer orden, emanadas de autoridades reconocidas en la cátedra, en el Parlamento, en los tribunales. Hay fallos substanciosos que aclaran con precisión cuál es la actividad impositiva de la Nación y de las provincias, y en cuanto a lo que corresponde hacer, son varios los proyectos que tratan esta ma-

teria, como lo ha expresado con toda precisión, el señor miembro informante, diputado Martínez.

Pero ni de esos antecedentes, ni de la circunstancia de existir pendiente de la resolución del Congreso un proyecto del señor senador por Buenos Aires, doctor Sánchez Sorondo y del diputado por Buenos Aires, doctor Escobar puede inferirse algo que ayer se ha dicho y nos ha llenado de asombro. Proyectos emanados de hombres de todos los partidos, iniciativas emergentes de gobiernos, del Parlamento, de congresos gremiales, que han pedido esta reforma, todos hemos creído que ella podría consultar los intereses más generales, y, sin embargo, ayer se nos ha mostrado cómo la máquina que movía todo esto no era sino la presión política, todos los días más grande, de nuestros amigos del Partido Demócrata Nacional. No es el despertar de la conciencia argentina — decía el señor diputado Ghioldi — no es el triunfo de la razón, no es el convencimiento de la justicia lo que ha movido esta reforma. Es el triunfo de las fuerzas oligárquicas representadas en este recinto. Y para demostrar que él estaba libre de la presión de esos elementos proponía simplemente y lo ha indicado como solución, el rechazo de este proyecto.

Resultaría, entonces, que la reforma impositiva sólo podría hacerse cuando no existiera presión oligárquica.

Todo lo bueno que se ha hecho, proviene de fuente oligárquica y no sería sino una presunción de bondad, una prueba de eficacia, decir que esta iniciativa es fruto de la oligarquía. Si puede ser tenido por oligarqua por antecedentes de familia o por vinculaciones políticas con los hombres de la derecha, evidentemente no puede atribuirse ese carácter por su alcance social, a mis iniciativas.

Hablar claro tiene grandes ventajas, pero tiene también inconvenientes notorios.

El señor diputado Ghioldi es, evidentemente, uno de los parlamentarios más claros que han pasado por este recinto; sus exposiciones son nítidas, su len-

(1) Véase pág. 382.

guaje es preciso. Y por eso, si muestra con claridad las ideas y da la medida de la razón que se tiene para determinadas actitudes, pone también de manifiesto la debilidad de las razones cuando no se las tiene. Y lo que ayer nos dijo el señor diputado ha sido una prueba acabada de que no hay motivo para oponerse a la reforma. Si confiada la representación de la izquierda al más prominente de sus hombres, sólo ha podido decirse lo que ayer hemos oído, eso significa que estamos tratando una ley inobjetable.

El señor diputado por la Capital apenas ha podido hacer observaciones incidentales, cuando no tangenciales, al asunto en debate. Se ocupó de esos aspectos políticos en que parece que tiene ahora algún interés, no obstante el desprecio olímpico que antes existía por la política criolla; se ha examinado con minuciosidad que llega hasta la exageración, aspectos de detalle, como el del azúcar, y parece, por lo que ayer oímos, que la oposición socialista debería limitarse a impugnar un artículo, si es que tiene el alcance que ellos le atribuyen, y a solicitar la ampliación, la modificación o la aclaración de algunas otras cláusulas accesorias.

Esperando que en la discusión en particular ha de hacerse el examen más profundizado de esas cuestiones de detalle, hoy quiero decir, para tranquilizar a la Cámara, y sobre todo a mis amigos del grupo socialista, algunas palabras sobre este aspecto del azúcar.

Declaro que esta ley no modifica en un ápice la ley Saavedra Lamas. Es sabido que en virtud de ella y de su reglamentación por el Gobierno Provisional, a lo que algunos han atribuido, a mi modo de ver, con razón, el carácter de un decreto-ley, sólo posible por la absorción de poderes por parte del Gobierno Provisional; en virtud de esas disposiciones, el azúcar está sometida a este régimen: el precio en la aduana, más el impuesto fijo de la ley Saavedra Lamas, más el impuesto movable resultado de ese decreto del general Uriburu, forman 41 centavos.

Las variaciones que se produzcan en los ítems que forman ese total, no alteran el total mismo, y con esta ley o sin ella, todo eso sigue rigiendo mientras el Honorable Congreso no resuelva que se haga otra cosa. El proyecto que se discute, insisto, no introduce ninguna transformación en el sistema impositivo o en el sistema general del azúcar; y serían necesarias medidas de otro orden, que bien puede el Congreso adoptar, si quiere, para resolver otra cosa. El Congreso puede, si desea, subir el «plafón» establecido hasta hoy del precio del azúcar y puede también bajarlo. Puede considerar que para ese «plafón» el impuesto es bajo, y en ese caso elevarlo, o puede hacer lo contrario hasta el límite de su abrogación. Nada de eso tendrá que ver con la materia de esta ley, ni a nada de eso se opone esta ley.

Creo que la explicación es amplia, contundente y definitiva como para justificar el pedido que haré de que no se detenga más la Honorable Cámara en la consideración del aspecto azucarero y que sigamos con la unificación de impuestos, dejando para el momento oportuno las consideraciones que sugiera todavía la situación del azúcar.

No busca este despacho una modificación de nuestro sistema tributario, teniendo en cuenta la fuente de donde emanan los recursos nacionales. Por eso parece que las consideraciones generales hechas sobre nuestro sistema impositivo están fuera de lugar. Con la unificación, el gobierno no se propone modificar ese sistema. Parte de la base de que existen los impuestos internos nacionales y provinciales y quiere poner en ello un poco de orden, impidiendo la doble, la triple, la múltiple imposición y queriendo, también, poner un límite a la guerra económica que se inicia entre las provincias y que llegaría a caracteres trágicos si no fuera detenida a tiempo.

El señor diputado por la Capital expresó ayer que consideraba un aspecto simpático de nuestro sistema impositivo el de los impuestos internos.

Es satisfactorio haberlo oído, porque por el carácter de impuestos indirectos que frecuentemente se les atribuye, — empleando una terminología tan imprecisa en nuestro idioma como en otros, tan vacilante en la República Argentina como en Estados Unidos — se sostiene con fundado motivo que pesa sobre los consumos populares y, por lo tanto, crea a estos tributos una mala fama.

El señor diputado por la Capital se ha encargado de disipar el mal entendido, recordando que la materia gravada por los impuestos internos nacionales, por regla general soporta tributos, puesto que son consumos no indispensables, y apenas hace una excepción en cuanto a los seguros, en lo que lo acompaña calurosamente. Pero los impuestos que se unifican no son todos de ese orden. Existen impuestos provinciales similares a los impuestos nacionales, hasta el punto de parecer copiados de éstos, pero existen impuestos provinciales sobre materias indispensables como el mismo azúcar, y es de desear que eso no crezca.

Sin la unificación, la precaria situación financiera de los Estados federados los llevaría indefectiblemente a hacer crecer esa clase de tributos, y prescindiendo de esa consideración meramente fiscal, los designios de política económica que ya se atribuye por nuestras provincias a su sistema impositivo, harán que crezcan los impuestos sobre materias de uso indispensable, lo que es un motivo más para desear la unificación. Si está cercano o lejano el día en que pueda prescindirse, por el mejoramiento en la percepción de los otros recursos, de los tributos sobre los consumos populares, es evidente que ello no se lo va a poder conseguir, sino cuando los impuestos estén unificados. Abrogar de nuestro sistema fiscal un impuesto dado, será muy fácil por resolución de este cuerpo; pero pretender que tenga igual facilidad la derogación de los tributos si ellos dependen de quince cuerpos legislativos, es evidentemente infundado. Motivo hay, pues, para mirar con buenos ojos si se

quiere que sea otra la materia imponible, este proyecto de unificación, como el señor diputado Ghioldi lo ha declarado cumplidamente, expresando que el propósito de la unificación satisface sus aspiraciones.

Lástima es que el pequeño detalle que se ha visto en el azúcar y en algunas otras disposiciones insignificantes, que luego examinaremos, conduzca a un fuerte grupo de la Cámara a no apoyar con su voto una iniciativa que traduce, estoy seguro, el sentir y la voluntad de la unanimidad del pueblo argentino.

Los fines de esta ley son claros y perceptibles a simple vista. Se busca la unificación de los gravámenes en todo el país, esperando que con ello se satisfaga, no sólo un ideal de justicia, sino que se establezcan condiciones similares para el desarrollo de industrias en las diversas partes de la República. Se centraliza la percepción, evitando los costos ingentes de la percepción de tributos iguales por la Nación o por las provincias en el mismo territorio. Se procura el reparto del producido de esos impuestos en forma que satisface las aspiraciones más ambiciosas de los Estados federales; se crea la unidad económica nacional, echada de menos por la proliferación de barreras que aparecían antes en una forma clandestina, vergonzante, y que hoy surgen a la luz del día, sin escrúpulos ni vergüenza, como la manifestación categórica de la voluntad provincial de valerse del impuesto para servir los intereses de sus industrias, para fomentar el expendio de sus propios productos y para dificultar la llegada de los que les hacen concurrenceia.

La unificación económica de la República, señores diputados, es cada día más una condición imprescindible del progreso argentino; lo será cada día más, pues si hay algo seguro en este mundo es que el progreso de la técnica y el desarrollo de la producción en grande, exigen mercados por lo menos de la esfera nacional. Si se ha dicho de Estados Unidos, desde la vieja Europa, que el progreso de esa gran

federación con respecto a las naciones del viejo continente se debía a la magnitud de su unidad económica, que permitía desarrollar en el país industrias de las dimensiones necesarias para que la producción fuese barata, hoy nosotros, en la República Argentina, que da los primeros pasos en su desenvolvimiento industrial, podemos comprender sin dificultad, las consecuencias que traerán para nosotros, no como en Europa la división por barreras internacionales, sino la división por innumerables barreras provinciales que reducen la unidad económica para cada industria a límites minúsculos, en que con una semana de trabajo se *satisface el consumo de un año.*

Esta ley, señores diputados, que contemplará la unificación económica del país, es una ley de unión nacional. A los ochenta años de existencia organizada, se siente la necesidad de resolver problemas que no previeron, que no pudieron ver que se plantearían, los organizadores de la Nación. La reforma va a hacerse por acuerdo libre entre el Estado federal y las provincias, y las soluciones que parecían inverosímiles, las dificultades crecientes que todos los días sentíamos, los obstáculos cada vez mayores, resultantes de la lucha entre la Nación y las provincias disputándose el campo de su actividad impositiva, podrán ser resueltos en forma que corte el nudo gordiano, que impida toda discusión sobre su constitucionalidad, de modo que no quepa discusión sobre su alcance y su validez. Con ello, señores diputados, quedará aclarado un grueso aspecto de la actividad fiscal de la Nación y de las provincias, que hace tres años se consideraba necesario resolver por vía constitucional. Recuerden los señores diputados que el gobierno del general Uriburu indicó, entre las medidas necesarias a efectuar por medio de una reforma constitucional, la delimitación de las actividades impositivas de la Nación y de las provincias.

Cuando discutimos el presupuesto último, tuve ocasión de decir que alguna otra iniciativa del gobierno del general

Uriburu se había realizado por sí sola: era aquella destinada a impedir que el Congreso pudiera fijar mayores gastos que los indicados por el poder administrador. Sin necesidad de la reforma constitucional, eso se ha cumplido y sin necesidad de la reforma constitucional podrá establecerse con precisión, en virtud de esta ley, cuáles son los impuestos nacionales y cuáles son los impuestos provinciales y quedará perfectamente delineado el campo común, el campo en que los límites hoy se confunden y en el cual el reparto habrá puesto fin a los conflictos.

Decir que esta reforma se hace sin enmienda de la Constitución, no es sino, decir que se hace sobre sus bases. Se desarrollan sus preceptos, se cumplen sus disposiciones, se convierte en realidad lo que fuera propósito de sus iniciadores.

El señor diputado Martínez hizo ayer una exposición exacta de antecedentes, cuando dijo que en virtud de ellos no era posible oponer a esta ley los principios resultantes de nuestro federalismo. Y es lógico que así sea, cuando el propósito de unidad viene de lo más profundo de la historia argentina y se le ha dado forma por los que le dieron forma a nuestro federalismo. Recordaba el señor diputado Martínez el Pacto Federal del año 1831, manifestación incipiente y balbuciente del deseo de un pueblo inorgánico, a tener unidad, a borrar diferencias, a abatir las murallas que lo separaban. Alguna vez yo he hecho la comparación entre ese texto y los artículos de la Federación norteamericana que precedieron a la Constitución actual de Estados Unidos en lo que se refiere al poder de la Federación en materia de comercio y en materia de impuestos, y he recordado que una y otra reservaron a los poderes locales facultades suficientes para anular los propósitos que perseguían: apenas se concedió un mero y vago derecho de los habitantes de un Estado a entrar y salir del territorio de los otros, una garantía débil de que los habitantes de las demás provincias no serían gravados en forma mayor que los de la pro-



pia, pero dejando incólume el derecho de las provincias a trabar el comercio exterior, de donde se derivaron, allí como aquí, las mismas consecuencias.

No es raro que lo expresen los autores argentinos con los mismos términos empleados en Estados Unidos, porque los hombres que sufrían acá las consecuencias de la dislocación conocían perfectamente la historia de Estados Unidos. Y si se recordaran palabras de aquellos hombres para fundar la decisión que hoy queremos tomar para unificar el país argentino en materia tributaria, verificaríamos que los términos caben perfectamente, que cada palabra estaría hoy en su lugar, que podemos ir a buscarlas en las resoluciones de todos los cuerpos representativos de la vieja Argentina y en los tratados que pusieron fin a nuestras disenciones civiles.

El Tratado de San Nicolás fué citado ayer por el señor diputado por la provincia de Córdoba, y yo recordaba — y hoy confirmé la cita — el mensaje en que López lo enviaba a la Legislatura de Buenos Aires. Las gabelas provinciales «han sido la causa principal de nuestra pobreza, de nuestro atraso, de nuestra disolución política», decía el patricio, como dijeron casi en términos análogos los hombres que antes de dictarse la Constitución norteamericana veían el derrumbe de la Federación y la posibilidad de que cada Estado tomara su propio camino por no entenderse en materia económica.

En el propio Congreso Constituyente, es el diputado Zapata el que dice absolutamente lo mismo que el doctor López. El general Mitre, cuando discutía la reforma constitucional —, en medio de aquella asamblea formada por partidarios activos y adversarios silenciosos, pues es sabido que la minoría opositora guardó una actitud digna declarando que toda reforma sería votada en contra, para llegar cuanto antes a la unión nacional —, la minoría de Ugarte, de Frías, de Pérez —; en esa convención mostró que palpaba la necesidad de la unión nacional y quería resolverlas por medio de la uni-

dad económica. Y se pueden citar palabras del general Mitre, que parecen hechas para esta reunión. «No participo — decía — de las ideas de los materialistas que creen que la base de todo gobierno político son los intereses económicos. Pero, como la comisión lo ha dicho en su informe, es uno de los medios más eficaces para interesar a los individuos y las sociedades, interesándolos en la quietud y la felicidad común». Y en seguida dice: «La mano poderosa de Carlos V y de Napoleón no ha podido dar forma regular ni reconstruir al imperio germánico, pero una simple liga económica de aduanas, el Zollverein, lo ha conseguido, y ella es hoy el centro de los destinos alemanes, mientras que se han roto los vínculos de la unión política que no consultaban los intereses de los pueblos.»

Yo recuerdo, de mis años de joven estudiante en Alemania, una cuantas estrofas cuyo origen no puedo precisar. He consultado a quienes podían estar interiorizados de las cosas de aquel país y no han podido contestarme; pero las recuerdo porque son una nueva manifestación de la necesidad de abatir vallas económicas si se quiere llegar a la unión. Refiriéndose al Zollverein, decían esas estrofas:

Denn er hat ein Band gebunden  
Um das deutsche Vaterland  
Und die Herzen hat verbunden  
Mehr als unser Bund dies' Band.

«El ha atado una cinta alrededor de la patria alemana y los corazones se han unido más por esa cinta que por nuestra alianza.»

Nosotros esperamos, señores diputados, que en el camino de la unificación esto ha de producir, evidentemente, la consecuencia de un acercamiento nacional, de una amalgama de los intereses provinciales en el interés nacional, aunque sea a costa de algunos sacrificios, los necesarios e indispensables para llegar a la unión, medida sin egoísmos y con amplitud, como cuadra a una asamblea que trata intereses argentinos entre el Estado federal y sus provincias y

no entre el Estado federal y Estados extranjeros. Esos sacrificios son necesarios para que este proyecto se convierta en ley y no quede en proyecto efímero como lo fueron algunas iniciativas que nuestros amigos de la izquierda han considerado menos objetables que la que se ha traído al seno de la Cámara.

He dicho alguna vez, haciendo la crítica de la actitud de ciertos diputados, que no podemos sentarnos aquí, como en una asamblea de ministros plenipotenciarios; que no se trata de delegados de las provincias, sino de representantes de la Nación, y que se incurre en abuso de la investidura al ejercitar el mandato de la provincia en la defensa exclusiva de sus intereses; pero también, señores diputados, concibo como absolutamente desprovista de razón la actitud de aquellos que se niegan a la consagración de un principio justo y progresivo porque beneficia demasiado a las provincias. No tendremos sino que felicitarnos de que los Estados federados salgan cuanto antes de la situación actual; y si para ello el reparto adquiere en algún momento el carácter de subvención federal, no hagamos de ello mayor cuestión, si estamos constitucionalmente autorizados para darlas, si políticamente, en el más amplio sentido de la palabra, es lógico que así lo hagamos y si económicamente no perturba, si por su cuantía no hace en las finanzas nacionales una brecha demasiado grande.

**Sr. Dickmann (A.).** — Seguramente el señor ministro mantendrá ese criterio con toda amplitud...

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Efectivamente.

**Sr. Dickmann (A.).** — Ya lo vamos a ver.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Para llegar a la unión nacional el sistema de unificación elegido es bueno. Tengo la pretensión de que es bueno y la jactancia de que es ingenioso, y la prueba objetiva la tengo en el hecho de que es la primera vez que un proyecto de este orden llega a esta Cámara con probabilidades de ser sancionado. No hay

en él nada misterioso, como son los guarismos contenidos en iniciativas que le han precedido y que en una manera muy simple pero absolutamente arbitraria disponían que la Nación recibiría el 53 % y las provincias el 47 por ciento, o la Nación el 61 % y las provincias el 39. ¿Por qué? Nunca ha habido una palabra explicativa de semejantes guarismos.

En cambio, en este proyecto todo es lógico, coordinado y puede explicarse. Supongo que los señores diputados ya lo habrán percibido. Se parte del principio de la recaudación actual, porque si no se garantiza a las provincias lo que ellas recaudan, es inútil ofrecerles la unificación. No hay un solo Estado que pueda admitir un sistema que no le asegure la percepción de los tributos con que contaba para poder desenvolverse. Pero, en seguida, se dice, sin ambages ni disimulo, que el sistema de la tributación actual es totalmente arbitrario, que es imposible tomarlo por base y que el argumento más convincente es la situación de la opulenta provincia de Buenos Aires. Si la inmensa Buenos Aires con la tercera parte de la población de la República, con la masa popular más rica del país recauda las cantidades irrisorias que pueden percibirse en sus cuadros fiscales, tiene que deberse ello a defectos de la percepción, a filtraciones en el impuesto que hacen imposible tomar la recaudación como un índice del consumo.

Yo sé que teóricamente es perfecta la resolución que diga: vamos a distribuir los impuestos al consumo en la proporción en que los consumos se hagan, pero como ese índice no existe y como en el futuro existirá menos desde que la unificación presupone la exclusión de los impuestos provinciales, es necesario tomar otro índice menos perfecto pero razonable y viable. Hemos adoptado el índice de la población y lo hemos adoptado con el aplauso de todos, hasta con aceptación del grupo socialista que lo tiene en una de sus proposiciones. Yo sé que el reparto del impuesto al consumo por la población es un subsidio a las provin-

cias pobres, pero no ha habido, afortunadamente, ni en la comisión ni en la reunión de representantes de los gobiernos de provincia, una sola voz de hombres de las provincias ricas que discuta a las provincias menos privilegiadas el derecho a percibir parte de los impuestos internos nacionales en proporción estricta a la población.

¿Cómo pasamos de un impuesto a otro? ¿Cómo se hace la evolución en el reparto para reemplazar el reparto inicial por percepción al reparto definitivo, que se hace de acuerdo a la población? Se hace en esta forma, que yo creo ingeniosa: cada año el 10 % pasa de un sistema a otro. Como eso podría traducirse en un pequeño decrecimiento de las entradas para las provincias de Córdoba, Santa Fe, Salta, se compensa la medida aumentando todos los años en 10 % la cantidad básica a distribuir, lo que, por otra parte, satisface la aspiración de las provincias de ver crecer la suma a repartir para compensar la disminución cuantiosa de los recursos que han tenido en los últimos años.

Yo he dicho en la comisión, defendiendo los intereses fiscales de la Nación, como decía ayer el señor diputado Ghioldi, que aumentada por resolución de los señores diputados que forman parte de la comisión la cifra básica, ya no era tan justo el aumento de 10 % por año. Tengo que repetir el concepto porque es exacto, pero no haré del asunto una cuestión capital porque no creo que esté el país en condición de disputar 3.000.000 de pesos áspidamente a las provincias hasta el extremo de poner en peligro el sistema, si eso no se acepta. A eso le llama «ceder» el señor diputado Ghioldi; dice que grito, pero que después cedo. Estoy esperando que el señor diputado indique la solución que debe adoptarse para imponer al Congreso la solución que uno quiere, si la mayoría no quiere adoptarla. Si lo hiciera me dirían que hoy soy un fascista.

Saben los señores diputados que el reparto en la forma indicada se desarrolla en el término de 10 años, pero

que a partir de 1940 se produce una novedad. Hasta 1939 las provincias tienen cantidades fijas a percibir, cualquiera sea el rendimiento de los tributos internos unificados. La Nación tiene la cantidad variable representada por el saldo entre el conjunto percibido y las sumas entregadas a las provincias. Después de 1939 la situación cambia. Las provincias y la Nación corren en adelante la misma suerte. El término medio de lo que reciben las provincias en los años 1938 y 1939, se compara con el término medio recibido por la Nación en esos años y en adelante ésa es la proporción definitiva de reparto entre Estado federal y Estados federados. Como ven los señores diputados, no es la fijación de un guarismo absoluto y arbitrario, sino la consagración de los hechos que se produzcan en años que no están sometidos a nuestros actos, el que servirá de pauta para un reparto equitativo en el futuro.

No creo que ese aspecto del problema pueda ser conmovido por la proposición socialista de efectuar el reparto por población, supongo que instantáneamente. Advierto, señores diputados, que tengo muy buena voluntad para interpretar las cosas que están mal escritas; que me esfuerzo en desentrañar su sentido, aunque parezcan no tenerlo. Por ejemplo, esta proposición socialista dice: reparto del producido de los impuestos unificados en razón de la población de las provincias, territorios y Capital Federal. Si esto se toma al pie de la letra, quiere decir que a la Nación no le toca nada, o cuando muero le toca la parte de la Capital y territorios nacionales, hipótesis esta última que se desvirtúa porque más adelante habla de dar una participación a la Capital y territorios. No puede querer decir eso. Sé que no quiere decir eso, y no sería de buena fe que me aferrara a una interpretación literal que no condice sin duda con lo que sus autores quieren decir. Deben haber querido decir que ha de hacerse ese reparto desde ya por población. Y afirmo que en esa hipótesis, que es la

mejor en que pueda ponerse uno para interpretar ese texto, la solución no es mejor sino infinitamente peor que el sistema ideado por el Poder Ejecutivo y aceptado por la comisión.

El paso instantáneo al reparto por población significaría dar a las provincias de Corrientes, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja, cantidades siderales de dinero con las cuales no tendrían materialmente nada que hacer. No se concibe que alguna provincia que cobra 90.000 pesos pase a cobrar el año que viene 800.000 pesos. Es inverosímil y no es lógico que a la provincia de Corrientes que hoy tiene 300.000 pesos, le toque el año próximo 5 ó 6 millones de pesos por este tributo. No hay razón para admitir semejante criterio. Evidentemente, el sistema gradual, por etapas, que adoptó el Poder Ejecutivo y la comisión, es mejor.

Parece que no tiene igual solidez, a juicio de los diputados socialistas, la proposición del gobierno, incorporada al despacho, según la cual se daría lo que hoy perciben a las provincias que cobran impuestos sobre la producción — tengo que emplear esa locución para no provocar el justo resentimiento del señor diputado Simón Padrós en cuanto a la denominación de provincias productoras. — Parece que ese reparto no es bien visto y que sería más admisible, a juicio de algunos, la derogación lisa y llana de los impuestos provinciales, con una indemnización por esa supresión: empleando los términos precisos de la resolución socialista: «extinción progresiva en un plazo no mayor de 10 años de las cuotas que se reconocen a las provincias productoras por gravar el consumo nacional».

Afirmo que entre la proposición socialista y la del Poder Ejecutivo y la comisión, no hay diferencias de fondo: lo que nosotros proponemos reducir a 50 % en el término de la ley, los señores diputados proponen reducirlo en el 100 % en el término de 10 años.

Nosotros no estereotipamos un sistema de reparto para toda la vida; no decimos a las provincias que hasta el final de los siglos percibirán las sumas

que el proyecto indica; no llega más allá del 50 % el descenso, porque el término de la ley es limitado. Dejémosles algo a las generaciones futuras y esperemos que el Congreso dentro de 20 años tenga ocasión de resolver con justicia el problema que entonces existirá. Por el momento, decrece lo que se da a las provincias por concepto de impuesto a la producción, con un ritmo de 2 ½ % por año, según el proyecto, en vez del 5 % indicado por el gobierno.

Alguien ha dicho con alguna justicia que la adopción de este sistema importa reconocer entradas fijas a las provincias en proporción a los malos gobiernos que han tenido, y también que las provincias van ahora a felicitarse de haber tenido ciertos gobiernos y que en algunas plazas de ciudades de provincia tendrán que levantarse algunos monumentos. Yo no sé si en eso no hay un poco de exageración. Que le toque a una provincia una suma algo mayor en el reparto, dudo que le compense el grave mal que ciertos gobiernos le han inferido. La acumulación de deudas cuantiosas, que las provincias a que se alude tendrán que solventar con el sacrificio de sus generaciones futuras, no está compensado desgraciadamente por las mínimas cantidades que este proyecto les atribuye más allá que lo que se supone justo. No podrán sino felicitarse las provincias que, aun cuando no les toque hoy en el reparto las sumas que ven atribuir a sus hermanas, se han salvado de los efectos de cierta clase de gobiernos que es de esperar no se repitan.

**Sr. Dickmann (A.).** — Si se refiere a San Juan, se habría salvado antes de la ley.

**Sr. Godoy.** — Pero evidentemente el daño económico que han sufrido esas provincias, como la de San Juan, por los malos gobiernos...

**Sr. Dickmann (A.).** — Parecido a Mendoza, en el aspecto del vino...

**Sr. Godoy.** — ... no le será compensado con el aumento que puedan recibir como ayuda o compensación por impuesto a la producción.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Creo que las provincias que no han sufrido semejantes males y que han gozado de gobiernos más respetuosos y serios, nada tienen que envidiar a las demás. No lo deploro Corrientes, ni se queje Salta.

**Sr. Dickmann (A.).** — ¿Patentes de «grandes» gobiernos está repartiendo el señor ministro?

**Sr. Ministro de Hacienda.** — No tengo empeño en repartir patentes de grandes gobiernos, pero es notorio que en ninguna de las dos provincias se han hecho las cosas que conocemos de otras.

**Sr. Dickmann (A.).** — Yo le preguntaría a algún diputado por Corrientes, si suscribe las palabras del señor ministro.

**Sr. González (B. S.).** — Sí, señor diputado; porque Corrientes en su pobreza sabe vivir con sobriedad, dignidad, altivez y patriotismo.

**Sr. Contte.** — Como ahora no está en discusión la situación política e institucional de la provincia de Corrientes, no deseo introducir en este instante una cuestión ajena al debate.

—Hablan simultáneamente varios señores diputados.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Pero hay desde el punto de vista del presupuesto y de las entradas fiscales, una consideración que no puede dejar de percibirse y es el principio de que lo que se da a las provincias, lo que percibirán, es lo que necesitan para solventar sus presupuestos basados en esas entradas. Las provincias que no están en esa situación, que no han edificado sus presupuestos sobre semejante base, no van a perder nada en el futuro, mientras que sus congéneres ven la línea decreciente futura de sus entradas, que se traduce en los guarismos absolutamente exactos que ha indicado hoy el señor diputado Simón Padrós.

El reparto a las provincias que gravan la producción de sus artículos es necesario. Esto no quiere decir que la Nación considere que los tributos que

han cobrado sean legales y justos. En el mensaje del Poder Ejecutivo se expresa el juicio que le merece la atribución tomada por las provincias, de gravar el consumo nacional. Un poco las ha redimido del cargo mi amigo el señor diputado Ghioldi, que ha expresado ayer, refiriéndose al azúcar, que el impuesto no lo pagaba la población consumidora de la República, sino los industriales de esas provincias, por tener precio fijo el azúcar y por haber llegado a ese precio máximo. En cuanto eso sea exacto, que no lo es, sino en un breve periodo, el impuesto que ha existido en las provincias cambia de carácter: ya no es un tributo indirecto que pesa sobre la población de la República, indebidamente llevado a las arcas provinciales, sino que es un impuesto directo sobre la ganancia de los industriales de las provincias, lo que le da una base de justicia a su cómputo entre las entradas provinciales indiscutibles.

No creo, sin embargo, que esa interpretación sea del todo exacta; me atengo a lo dicho en el mensaje y sostengo que no armoniza con nuestro sistema constitucional y legal la actitud de las provincias de imponer impuestos al consumo nacional, pero debo respetar los hechos. La Suprema Corte de Justicia nacional, juzgando esa materia, ha declarado que tanto los Estados provinciales como la Nación tienen para cobrar los impuestos, atribuciones que invocan. Pronunciada la Corte en ese sentido, creo que las proposiciones tendientes a desconocer la facultad de las provincias, lo que se quiere hacer por ley, es ineficaz.

Hay que armonizar los derechos de la Nación y de las provincias. Y es lo que se hace. Ninguna provincia de las de ese grupo aceptaría el sistema si no se le diera la participación que el Poder Ejecutivo propone y que la mayoría de la Cámara ha aceptado.

No quedaría, entonces, como impugnabile en el proyecto de unificación en esta parte, sino el famoso artículo 26 y el principio de la consolidación.

El principio de la consolidación de los impuestos, sobre el cual ayer hubo cierta discusión dialogada, es demasiado sencillo para no ser comprendido. No es concebible que provincias como las del Norte, que viven de la industria del azúcar, puedan aceptar un régimen de unificación de los impuestos si no saben qué impuesto va a tener el azúcar, por lo menos por un tiempo dado.

El derecho del Congreso a consolidar impuestos es indiscutible; lo hacemos todos los días y sería ilógico que lo negáramos cuando vamos a tratar con las provincias. La Nación puede obligarse frente a potencias extranjeras a gravar determinados artículos, y, ¿no puede hacerlo frente a las provincias? Yo afirmo que importa el ejercicio del derecho, no la renuncia del derecho, la fijación de esos impuestos; que porque se tiene la facultad de imponerlos se puede pactar la obligación de no imponerlos.

Y la consolidación ha sido también un poco justificada por el señor diputado Ghioldi en las consideraciones que hizo sobre el precio del azúcar. Si el azúcar tiene un límite en su precio, ¿qué más lógico para los industriales, para toda la población de las provincias, que decir: «yo necesito saber qué impuesto se va a cobrar», si el precio más el impuesto no puede pasar de los 41 centavos? ¿Cómo conciben los señores diputados que las provincias productoras de azúcar adhieran al sistema sin saber el impuesto que se va a imponer, y en consecuencia el saldo que va a quedar a los productores? Es evidente que eso no es posible y es evidente, entonces, que la consolidación se justifica.

En cuanto al artículo 26, que no vino en el proyecto originario, yo le atribuyo el alcance que creo le ha dado el señor miembro informante de la comisión, diputado Martínez. No les estamos reconociendo a las provincias el derecho a hacer lo que ahora hacen en materia de regulación de la producción. No se lo reconocemos, ni se lo dejamos de reconocer. Ellas lo están ejer-

citando y está en juicio tal facultad. El supremo tribunal dirá quién tiene razón.

Lo que esta ley dice a las provincias es lo siguiente: no invoquen el pretexto de la regulación cuantitativa de la producción para percibir en ningún caso impuestos para las provincias; limiten la producción o dejen de limitarla, ésa es cuestión provincial; pero lo que no es tolerable es que, borrando el sistema tributario provincial, los impuestos a la producción reaparezcan con el pretexto de regulaciones cuantitativas. Si se empeñan en hacerlo, si creen necesario cobrar dinero a título de pena, tienen un motivo para no entusiasmarse: el producido no irá a las áreas provinciales sino a las áreas nacionales.

**Sr. Martínez.** — Lo que dice el señor ministro coincide con lo que he expresado en nombre de la comisión.

**Sr. Dickmann (A.).** — Se trata de una limitación al presunto derecho de las provincias a esa regulación.

**Sr. Martínez.** — No, señor diputado.

**Sr. Dickmann (A.).** — Es lo que ha dicho con razón el señor ministro, porque solamente así tendría sentido esa disposición.

**Sr. Martínez.** — El señor ministro y yo hemos dicho lo siguiente: el Congreso no se pronuncia en forma alguna acerca de si las provincias tienen o no derecho para regular la producción. Es una cuestión que escapa a nuestra jurisdicción y esfera, pues ello debe discutirse ante la Corte Suprema. Pero si mañana nadie le contradice este derecho a las provincias, que no sirva él de pretexto para que las provincias, so color de reducir el monto de la producción, establezcan disfrazadamente un impuesto interno. Si ellas establecen tal impuesto o tal multa, no ingresará a las áreas provinciales, sino que deberá ir al fondo nacional.

**Sr. Dickmann (A.).** — Exactamente lo que he manifestado, pero en menos palabras. Es una limitación a las provincias y una valla a los incentivos de obtener recursos.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Este despacho, señores diputados, es el más seriamente estudiado que he visto. Hace muchos años que he entrado a esta Cámara. He visto cuerpos de muy distinto aspecto y comisiones de composición muy variada; pero no he visto un asunto que se haya estudiado con la meticulosidad, con el acopio de antecedentes e información con que lo ha sido el proyecto de unificación de impuestos. No han sido sólo los señores diputados los que han ido escudriñando hasta el último detalle de este complejo proyecto de ley, sino que también lo han hecho los gobiernos provinciales, los miembros de las legislaturas de las provincias, a tal punto que hoy se podría tomar examen sobre el sistema tributario de las provincias con un resultado totalmente distinto de lo que pasaba hace cinco meses.

Esta es una ley bien estudiada. Si tiene defectos, como los tendrá, son los que pueden corresponder a una perturbación colectiva del entendimiento, pero no pueden deberse a precipitación o a error individual; tendríamos que habernos equivocado muchos.

Es más generoso, como hemos dicho, el proyecto despachado que el proyecto del gobierno; pero lo es en cuanto a las provincias que no tienen impuestos a la producción sino al consumo. Respecto a las provincias que gravan la producción el proyecto disminuye lo propuesto por el Poder Ejecutivo. Por esta ley se daría a las provincias, por sus impuestos al consumo 6.400.000 pesos más que lo propuesto por el Poder Ejecutivo, y se daría a las provincias en razón de reparto por impuesto a la producción, 1.700.000 pesos menos. En resumen: 4.700.000 pesos más.

Pero a esa suma se ha agregado otra de 8.000.000 en el proyecto de reparto del impuesto a los réditos y a las ventas. Yo no sé si el señor diputado Ghioldi dirá que también en eso he cedido.

**Sr. Noble (J. A.).** — No ha cedido. (Risas).

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Por lo pronto no será la opinión de una parte de la oposición. Y por lo demás, debo hacer notar esta circunstancia: de los 8.000.000 de aumento, 3.000.000 corresponden a la Capital Federal, y es a pedido de los diputados socialistas.

**Sr. Dickmann (A.).** — Una vez que se hacía reparto, evidentemente lo justo era que lo hiciera para todos, inclusive para la Capital.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Sí, señor diputado, pero el ministro planteó en la comisión este asunto: No me opongo, dije, a que se dé a la Capital los recursos que se piden, pero sí creo que esa suma debe sacarse del total que haya de distribuirse a las provincias. Y fué precisamente el señor diputado Dickmann quien se opuso.

**Sr. Dickmann (A.).** — Como alude a mi opinión el señor ministro, me ha de permitir que le conteste.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — ¡Cómo no, señor diputado!

**Sr. Dickmann (A.).** — El señor ministro sabe que en el seno de la comisión hemos sostenido que si hay un impuesto que debe ser nacional en su integridad, es el de la renta, sin excluir el derecho de las provincias para establecerlo también. Pero así como el señor ministro contempla situaciones reales, de hecho, nosotros también las hemos contemplado. Algunas provincias se disponían, y así lo anunciaron, a establecer el impuesto provincial a la renta si no se les daba participación en el impuesto nacional. Fué así que se fijó el 85 % para la Nación y el 15 % para las provincias, con protesta de algunos de mis más estimados colegas de la comisión.

Cuando se planteó el reparto a la Capital, sólo resultaba factible si no se tocaba la parte correspondiente a las provincias. Era evidente, entonces, que había que aumentar el porcentaje.

Y el señor ministro, que tuvo criterio elástico en el impuesto a la renta, lo tuvo rígido en cuanto a la participación de la Capital y territorios nacio-

nales en el impuesto de unificación, punto que vamos a plantear en su oportunidad.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Lo que acaba de expresar el señor diputado Dickmann me es de una utilidad magnífica.

**Sr. Dickmann (A.).** — ¡Siempre le son útiles los argumentos: al revés o al derecho!

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Vamos a verlo. Si no llego a tener éxito, el señor diputado se jactará de ello; si lo tengo, ¿qué se le va a hacer?

Estaba sosteniendo que no podía el Poder Ejecutivo evitar que la generosidad se costeara por el tesoro federal. No sé si pretenderán contestar la verdad de ese aserto, en lo que respecta al reparto a las provincias, pero no lo pueden hacer respecto a la Capital.

Lo que decía el señor diputado, respecto a la distribución entre las provincias y la Capital, es exacto. Yo he creído, y sigo creyendo, y hasta que me demuestren lo contrario afirmaré que no hay por qué dar un centavo a la Capital...

**Sr. Dickmann (A.).** — Pero, ¿en dónde para la generosidad, a la que ha cantado un himno el señor ministro?

**Sr. Arce.** — Es absolutamente exacto lo que afirma el señor ministro, y es el verdadero criterio constitucional.

**Sr. Dickmann (A.).** — No se trata de la Constitución; se trata de pesos.

**Sr. Arce.** — De economía constitucional.

**Sr. Presidente (Noble R. J.).** — Sírvanse no dialogar los señores diputados.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Sostengo que no corresponde dar a la Capital un centavo en razón de la unificación, y eso resulta a todas luces claro para quien lea, siquiera sea por las tapas, el proyecto. Si para la unificación se exige a las provincias que desistan de un recurso y se les dará otro, a la Capital que no le quitamos ninguno, ¿en razón de qué le vamos a dar algo?

**Sr. Dickmann (A.).** — Se quita a los habitantes de la Capital una parte de

su patrimonio al aumentarles los impuestos al consumo, que serán elevados únicamente para la Capital y los territorios nacionales.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Por lo pronto queda sentado que tiene bases lógicas, y no de otro orden, el no darle más recursos a la Capital de la República. Soy hijo de la Capital de la República, cosa que no le pasa a algunos que me contradicen; tengo con ella vinculaciones tan fuertes que no serán rotas por nada en el mundo, pero, sin embargo, no creo que la Capital de la República tenga el derecho que se alega.

Pero, señores diputados, por arriba del proyecto ha planeado una observación de otro orden: son los malditos impuestos al consumo, se agrava la situación de los consumidores, se echa más cargas sobre las espaldas ya debilitadas del pueblo argentino... Y no puede dejar de expresarse, con este motivo, que el proyecto de unificación mandado por el gobierno desgrava al consumidor. La unificación desgrava al consumidor: el conjunto de los impuestos al consumo que resultará de los impuestos unificados aun a las nuevas tasas, es menor que la suma de los impuestos que hoy percibe la Nación con más los que perciben las provincias.

Por eso pretendía el Poder Ejecutivo resarcirse de esas pérdidas — porque en alguna forma tiene que hacerlo — con dos medidas. Una es el famoso impuesto a la herencia...

**Sr. Pena.** — ¿Y no habría unificación, señor ministro, sin impuesto a la herencia?

**Sr. Noble (J. A.).** — Impuesto que va a revivir de sus cenizas...

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Que va a revivir de sus cenizas, porque no es posible que deje de sancionarse, porque da carácter a esta iniciativa y por que la justifica ante los ojos de la opinión.

**Sr. Dickmann (A.).** — Reconozca al menos, señor ministro, que hemos sido sus mejores aliados en la comisión para este impuesto.



**Sr. Ministro de Hacienda.** — Me canso de aplaudirlo.

**Sr. Corominas Segura.** — ¡Dios lo libre de estos aliados que se le presentan!

**Sr. Dickmann (A.).** — Los únicos que deben tener cuidado son los felices herederos...

—Varios señores diputados hablan a la vez.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — ¡Por favor!

**Sr. Presidente** (Noble R. J.). — Sírvanse no interrumpir los señores diputados.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Si ha habido un miembro del Congreso y si hay hoy un miembro de la sala que no tiene miedo a elogiar públicamente a los adversarios, supongo que no se me discutirá a mí ese título. Me canso de aprobar, de aplaudir, de apoyar iniciativas contrarias. Creo haber podido pronunciar en mi ya larga actuación, alguna exposición interesante: nunca he tenido el honor de ser aplaudido por ciertas personas. *(Risas)*.

**Sr. Pena.** — No se puede, señor ministro. Ahí está la dificultad. Porque usted ahora no sostiene lo mismo.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Yo invoco el antecedente: aplaudo a los contrarios y ellos no me aplauden: debo hablar peor que los demás.

**Sr. Pena.** — Cuando hablamos como usted, se enoja.

**Sr. Dickmann (A.).** — Como nos da la espalda, no ve cuando aplaudimos. *(Risas)*.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — La otra medida no es sino una tendiente a impedir que se evada el impuesto a los réditos. Es sabido que hoy el impuesto global, como se llama al que se cobra por entradas mayores de 10.000 pesos, se elude por lo que hace a las rentas provenientes de sociedades anónimas. Se ha presentado con este motivo un proyecto que ha contado con la aprobación unánime de la comisión.

Pero no obstante el hecho positivo de que sólo queremos rehacer el tesoro

federal cobrando por otro conducto lo que antes se cobraba por impuestos nacionales y provinciales, el hecho es que la protesta contra el aumento de impuestos es evidente; la oímos todos los días, llena páginas de los diarios, ocupa el tiempo de los diputados con notas que continuamente se presentan, aunque nada de eso sea justificado. Es una prueba más de que cuando pocos gritan y muchos callan hacen más ruido los que gritan. Los que gritan no tienen razón, pero hacen más ruido.

El impuesto a las herencias, como con toda razón lo expresaba el señor diputado Pena, es indispensable para la unificación. Sé la resistencia que tiene entre mis amigos demócratas nacionales, y que hasta el pequeño grupo correntino ha impuesto a nuestro amigo Bruchou la obligación de no subscribir el despacho. Pero no tiene razón. Es infundado cierto temor de carácter federal. Se supone que ésta es una invasión escandalosa en las esferas provinciales y que vamos a imponer, contra la voluntad de los estados federales, un tributo sobre las herencias que se transmiten en las provincias. Nada menos exacto. No habrá, por virtud del proyecto, impuesto en las provincias sino en aquellas que directamente quieran que lo haya, y que podrían establecerlo sin autorización del Congreso nacional.

Tampoco es justificada la grito en cuanto a la tasa del impuesto, que por ser escalonado es mucho más benigno de lo que a primera vista parece. Para herencias de \$ 1.000.000, el impuesto no excede nunca de \$ 80.000. El impuesto resiste con ventaja la comparación con el que existe en otros países que no han abolido la familia, que no han destruido los hogares, en donde no se ha producido el cataclismo que aquí se anuncia de sancionarse el proyecto. Yo declaro haber visto dividirse más de una familia por cuestiones de herencia, muchas más que las que se han dividido por no tener herencia. *(Risas)*. Pero anticipo que este proyecto, aun para los que temen su acción deletérea, es de una benignidad incom-

parable. El impuesto similar inglés y la tasa federal a las sucesiones en Estados Unidos, como ha dicho ayer con exactitud el señor diputado Ghioldi, sobrepasan en mucho al nuestro. Y existe esta circunstancia agravante: si en alguna parte es justificado el impuesto a las herencias, es en la República Argentina. Cuando discutimos años atrás con mi actual colega el ministro Duhau un impuesto similar por despacho que entonces firmaron todos los miembros de la mayoría conservadora, yo comparé el monto de las sucesiones en la República Argentina con el monto de las sucesiones inglesas, la concentración de la riqueza que se trasmite por sucesión en la ciudad de Buenos Aires, comparada con las de Inglaterra. Y llegaba a esta conclusión verdaderamente asombrosa: en la Inglaterra del mayorazgo, en la Inglaterra aristocrática, en la Inglaterra de duques y señores de fortuna de origen feudal, la propiedad no está más concentrada que en la República Argentina, pese al Código Civil y pese al carácter aluvional de ciertas fortunas.

**Sr. Dickmann (E.).** — ¿El señor ministro tendría la gentileza de decirme sobre cien familias argentinas cuántas dejan herencia?

**Sr. Ministro de Hacienda.** — No, pero tengo este otro dato...

**Sr. Uriburu.** — ¡Ahora ninguna! (Risas).

**Sr. Dickmann (E.).** — Entonces, ¿qué miedo tienen al impuesto?

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Puedo dar al señor diputado este otro dato, que es más interesante: en la República Argentina el conjunto de bienes de las herencias de más de \$ 1.500.000, comparadas con las herencias de 100.000 libras esterlinas en Inglaterra son proporcionalmente al total de las herencias tan importantes en la Capital como en Inglaterra. Y como el señor diputado Duhau dijera entonces que eso sería en la Capital y no en las provincias, hice la investigación en Buenos Aires y llegué a esta conclusión: que es allí casi el doble la concentración de la riqueza.

**Sr. Noble (J. A.).** — ¿Eso está de acuerdo con los principios de la moral cristiana?

**Sr. Ministro de Hacienda.** — En eso la moral cristiana no tiene nada que ver.

**Sr. Arce.** — El señor ministro trata asuntos que no están en discusión y nuestro colega por Santa Fe nos invita a una polémica sobre la Convención de Buenos Aires.

**Sr. Uriburu.** — Es preparando la modificación que tienen en vista.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — La digresión era necesaria para dar un aspecto de conjunto sobre la reforma.

**Sr. Pena.** — Podría darnos el señor ministro las cifras muy útiles que ha enunciado así de memoria, ya que tiene hecha una investigación sobre fuentes oficiales que prueban acabadamente la veracidad de lo que acaba de decir: las fortunas escandalosas que hay en la provincia de Buenos Aires y en la Capital son mayores que las de países que se suponen los más ricos del mundo.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — No tengo inconveniente.

La digresión se ha justificado sólo por el deseo de dar una impresión de conjunto y para desvirtuar lo que se dijo ayer sobre la pertinencia con que la representación supuestamente oligárquica del país quiere echar sobre las espaldas del pueblo todos los tributos. Reivindicando para mí el honroso título de oligarca he presentado esa iniciativa que espero contará con el voto de la diputación de la derecha, como contó con el voto de ese grupo cuando formaba la unanimidad de la representación de Buenos Aires y se sancionaron impuestos a la herencia que son de los bastante pesados.

Pero, señores diputados, parece que no tiene importancia lo que se ha dicho acá en repetidas ocasiones, sobre los impuestos. Hay frases estereotipadas que no se cambiarán. Se modifica el sistema tributario, pero el juicio que se hace de él sigue siendo el mismo. Ayer se nos ha dicho que el sistema tributario reposaba sobre la obra de Rosas y de Pellegrini. Es la primera vez que oigo a un miembro del Partido Socialista hacer nacer alguna

cosa útil de iniciativas de Pellegrini. Alguna vez me han dedicado ciertos editoriales por la debilidad que naturalmente tengo para la memoria del gran argentino que fué único en su género: estadista de verdad, con coraje, con decisión, con un desprecio olímpico por la calumnia, digno en el poder y en la adversidad, magnífico como un señor, leal como un caballero. Sí, señores diputados: vayan reviendo algunos juicios, porque a medida que tendemos nuestra vista al pasado buscando el origen de cosas grandes y nobles, la figura de Pellegrini aparecerá con su silueta inconfundible, inspirando todo lo bueno y sirviendo de ejemplo para generaciones y generaciones de argentinos. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos!*).

Pero no bastará, señores diputados, que el binomio Rosas-Pellegrini entre en el léxico político si se quiere tener el panorama total del sistema tributario argentino: habrá que agregarle otro nombre: Uriburu. De él derivan los impuestos a los réditos que no fueron capaces de sancionar los congresos democráticos ni las asambleas demagógicas que hemos conocido. (*¡Muy bien!*). Fué necesario que el gobierno supuestamente más conservador que ha tenido el país se estableciera, para que de la inspiración de sus hombres y de la decisión de sus ejecutores resultara la incorporación al sistema tributario argentino de un impuesto que figura entre las fuentes de renta de todos los países cultos.

Sirva el ejemplo, señores diputados, para disipar de una vez esta leyenda de la división de la política argentina, agrupando de un lado todas las fuerzas regresivas y dejando el privilegio exclusivo de las ideas de progreso al grupo minúsculo que sólo por un azar puede ocupar un buen tereño de la representación argentina.

**Sr. Ghioldi.** — ¿Y por qué derecho propio está usted en un ministerio? ¿Por qué fuerza política propia?

**Sr. Ministro de Hacienda.** — ¡Ah, señor diputado! Estoy por la fuerza política que significa algo sobre lo que

me ocuparé dos minutos después, recogiendo y terminando con algunas aseveraciones que ayer se han formulado.

A la reforma tributaria de Uriburu, seguirá ésta de distinto carácter, pero no menos fecunda, que se recordará por años si llega a ser sancionada y que aparecerá como una de las grandes obras de la administración actual, probando con el ejemplo lo que pueden gobiernos y congresos empeñosos e inspirados en otros sentimientos que los que han movido fuerzas cuyo caso esperamos sea definitivo. Es absurdo que se añore por una parte de la población argentina regímenes que sólo por el olvido de sus atributos y de sus condiciones pueden presentarse como un ideal a la masa electora nacional. Y es imposible, señores diputados, que se sume a los que buscan la vuelta de algo que indefectiblemente se fué, una fuerza que es progresiva y que es culta, que representa como nosotros la misma civilización, que no puede en ningún caso tener concomitancias ni reconocer similitudes con el caudillaje destructor que por tantos años esterilizó el progreso de la legislación argentina. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*).

El señor diputado decía ayer, oponiéndolo a mi propio caso, que el ex ministro de Inglaterra, Snowden, salido de las filas del Partido Laborista, había llevado a la representación nacional un proyecto de impuesto a la tierra; que esperaba que otro ministro surgido del Partido Socialista hiciera una cosa semejante. Yo no sé, señores diputados, si tendré oportunidad de instar a los cuerpos legislativos para que sancionen determinadas medidas de ese carácter. Sé que he iniciado esta ley. Sé que cuando se haga la historia del régimen fiscal argentino, si esta iniciativa es sancionada, mi nombre no aparecerá omitido. Y sé, señores diputados, que en un momento álgido de la vida argentina, hice lo que Snowden quería que se hiciera, y dejé de hacer lo que el mismo Snowden declaró que no podía hacerse: huir del barco en ruinas;

desertar de la función pública cuando era necesario el esfuerzo de todos. Ese esfuerzo lo hemos prestado, contribuyendo a la formación política de este gobierno, y espero que con este proyecto habré contribuido con algo a su éxito ante la opinión, que no será sino obra de estricta justicia. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos prolongados. Numerosos señores diputados se aproximan y felicitan al señor ministro.*)

9

## CUARTO INTERMEDIO

**Sr. Presidente** (Noble R. J.). — Invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio hasta la hora 22.

—Era la hora 21 y 5.

—A la hora 22 y 32 minutos:

10

UNIFICACION DE LOS IMPUESTOS  
INTERNOS

**Sr. Presidente** (Ferreira). — Continúa la sesión. Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Ghioldi.** — Ocuparé otra vez la atención de la Honorable Cámara, aunque en esta oportunidad por breves momentos, para contestar las manifestaciones hechas por el señor diputado Simón Padrós y algunas de las consideraciones formuladas esta tarde por el señor ministro de Hacienda. Y diferentemente de lo que ha hecho el señor ministro, que recién al final se ocupó de su persona, yo voy a comenzar estas breves palabras refiriéndome a alguna circunstancia personal.

El elogio suele ser una manifestación socialmente plausible, cuando resulta una expresión espontánea del espíritu. Es también un instrumento político a veces de tanto o de más valor que la crítica o el ataque personal y, en fin, puede ser en manos de una persona hábil, esgrimido como medio de introducir en algún bloque la eizaña, la desconfianza o el recelo.

**Sr. Simón Padrós.** — ¿Me permite el señor diputado una brevísima interrupción?

**Sr. Ghioldi.** — ¡Cómo no!

**Sr. Simón Padrós.** — Cualquiera sea el concepto que exprese el señor diputado, no retiro el elogio.

**Sr. Ghioldi.** — Muchas gracias.

No descarto en las palabras amables que se han oído esta tarde respecto de mi persona alguna partícula de sinceridad; pero siendo éste un cuerpo político, es evidente que presentar a un diputado de los más modestos de este sector en la condición destacada con que se lo ha querido presentar, más que un elogio parece un juicio destinado a provocar recelo, que no alcanzará, sin embargo, sus objetivos, ya que ni yo ni mis compañeros de sector nos dejaremos perturbar.

Saben los compañeros de mi grupo, como lo sabe también la Cámara, que tengo el suficiente equilibrio de mi inteligencia y de mis sentimientos para saber ubicarme exactamente en el conjunto de los valores que atesora este grupo; y sabe la Cámara, el partido y mi bloque, que soy hoy y seré mañana discípulo de las grandes cabezas que existen en el sector socialista y que, sistemáticamente, son desconocidas por el señor ministro de Hacienda. (*¡Muy bien!*).

Paso ahora, señor presidente, sin conceder a este aspecto mayor importancia, a hacerme cargo de algunas manifestaciones hechas en primer lugar en la exposición del señor diputado Simón Padrós, quien esta tarde ensayó briosamente, como en otras oportunidades, una composición para ser presentada en los juegos florales de cualquier ciudad capital de provincia.

**Sr. Godoy.** — Y ahora en la Capital Federal.

**Sr. Ghioldi.** — También.

El señor Simón Padrós, con la imaginación propia de los hombres que habitan en las zonas próximas al trópico, ha tomado el asunto de la unificación de impuestos, ensayando una composición poética de no sé qué alcance ni de qué altura, pero que ha servido para de-

mostrar la insuficiencia de la argumentación que posteriormente ensayó en el discurso.

Tuve la intención de interrumpir al señor diputado por Tucumán — quien me reprochó en primer término no haberme ocupado mayormente del despacho — para preguntarle en qué artículo del despacho había el canto y la musicalidad de su palabra.

La exposición del señor diputado ha sido endeble como pocas.

**Sr. Simón Padrós.** — Estaba, entonces, en el mismo terreno que la suya.

**Sr. Ghioldi.** — Nos decía que la diputación socialista no debe insistir en clasificar las provincias en productoras o consumidoras, cuando la verdad de los hechos es que la clasificación política, económica y fiscal no ha sido hecha por la diputación socialista, sino por la conducta impositiva de algunas provincias que, so pretexto de gravar la producción provincial, han castigado el consumo nacional.

La clasificación no depende de los adjetivos ni de los párrafos del discurso, sino de los efectos mensurables de la política impositiva de las provincias del Norte y Oeste.

**Sr. Simón Padrós.** — ¿Si me permite?

¿Conoce el señor diputado el impuesto a la producción del trigo, del lino y del maíz que tiene la provincia de Santa Fe, y que sale de su territorio?

**Sr. Ghioldi.** — Conozco ese mal impuesto que existe en la provincia de Santa Fe y de este sector ya se han pronunciado, en más de una oportunidad, palabras contrarias al gravamen.

**Sr. Dickmann (A.).** — ¿No recuerda el señor diputado por Tucumán, que estando presente el ministro de Santa Fe fué el diputado que habla que le rogó que cuanto antes cumpliera con la promesa de abolir ese impuesto?

**Sr. Simón Padrós.** — No recordaba.

**Sr. Dickmann (A.).** — Se lo hago recordar. Está en la versión taquigráfica.

**Sr. Ghioldi.** — Utilizando sus brillantes cualidades literarias, el señor diputado se refirió al aspecto técnico de la industria tucumana, pintándonos

el silencioso drama que aquella provincia vivía desde hace largos años. Con una emoción histórica que yo admiro, compara el esfuerzo de los conquistadores del desierto, que se hizo armas al hombro, con el esfuerzo de algunos capitalistas tucumanos que, amparados por la alta barrera aduanera, hicieron pingües ganancias. Habló con emoción de aquella hora, no muy lejana, en que la industria de Tucumán y de Jujuy sustituyó la vieja caña criolla por la caña de Java. Pero silenció el hecho de que simultáneamente se vendía el azúcar argentina en la República a precios que no habían sido igualados hasta entonces.

**Sr. Simón Padrós.** — Como no venía azúcar extranjero más barato...

**Sr. Ghioldi.** — En 1920, cuando se obtuvo aquella mala ley de exportación de azúcar que combatió con documentación ilevantable el diputado Justo, hemos visto vender azúcar a cuatro pesos en la provincia de La Rioja y expendir paquetes de azúcar en las comisarias de Buenos Aires para conjurar de esa manera la gran «contribución patriótica» de los industriales azucareros, que aprovechaban la circunstancia de la guerra para aumentar sus beneficios.

Contestando mis observaciones sobre las deficiencias técnicas de la industria azucarera, el señor diputado no utilizó algunos elementos de juicio que seguramente conoce al dedillo. Yo no he hecho cargo general a la industria. Por el contrario, reconozco que ha surgido ahora a consecuencia del monopolio que estimulan la aduana, la ley reguladora y los convenios privados, ha surgido ahora una lucha, sorda en estos instantes, que puede hacerse pública, mañana, entre los industriales mejor plantados y bien dotados, y aquellos ingenios que por hallarse mal ubicados y peor dirigidos, deben necesariamente desaparecer en una industria sana.

La lucha existe ya en principio entre los azucareros de Tucumán y los de Salta y Jujuy, y si no fuera por esta situación de monopolio en la que

hay un cierto equilibrio artificial entre estas partes, habríamos visto estallar ese conflicto esta tarde, entre el señor diputado Simón Padrós y el señor diputado Arrieta, que son los exponentes de dos grados distintos del desarrollo industrial.

**Sr. Simón Padrós.** — Conocerá a sus hombres de izquierda, pero no pretenda conocer por igual a los hombres de la derecha.

**Sr. Ghioldi.** — No, señor diputado. Disculpeme, pero no he querido, en este instante, azucar, sino tan sólo tomar dos nombres para simbolizar dos grados del desarrollo de la industria azucarera.

**Sr. Simón Padrós.** — Quien empezó su discurso haciendo referencia a la cizaña, no tendría derecho a hacer esa consideración.

**Sr. Ghioldi.** — Bastaría tomar los índices del rendimiento del azúcar de las zonas de Tucumán, Salta y Jujuy para comprender que existen varios grados bien diferenciados del desarrollo industrial de este producto alimenticio.

Pero el señor diputado Simón Padrós, exagerando mis manifestaciones y dándoles un carácter absoluto que no tuvieron, hizo la defensa del esfuerzo de la industria del azúcar, que es bien relativo cuando se comparan los índices de rendimiento con los de otros países de la tierra.

Hace algunos años — y la situación ha variado relativamente poco, porque he comprobado los datos, que se refieren a la Argentina, con la documentación que me ofreció el señor diputado Simón Padrós — hace algunos años, el rendimiento de toneladas por hectárea era en la Argentina, de 2,83. Son datos del año 1929. En la misma época el rendimiento en Java era de 13,71 toneladas; en Santo Domingo y Haití, 5,26; en Puerto Rico 4,50, en Cuba 4,42, en Perú 4,50, en Australia 5,26, etcétera. Sin duda, existen otros países, como Brasil, Méjico, Mozambique, China y Filipinas, que tienen rendimiento inferior a la Argentina.

Estos datos destacan el atraso téc-

nico de nuestra industria azucarera, que debe atribuirse a la protección industrial, que sirve para dar supervivencia a los industriales peor dotados, en vez de estimular el desarrollo y el progreso técnico de la industria.

**Sr. Simón Padrós.** — Agregue a esa información, que en Cuba y Java está arruinada la industria, y que en Perú hace 2 meses que por ley de la Nación, ha quedado liberada de todo impuesto la industria, a pesar de esos enormes rendimientos.

**Sr. Ghioldi.** — Señor diputado: la conclusión a extraerse de sus manifestaciones, es que debe combatirse el progreso industrial por ser causa de miseria, desocupación y escándalo. La verdad es que el progreso técnico e industrial es indispensable para una mayor justicia social.

Lo único que habrá fracasado en Cuba y Perú es la mala distribución del régimen de la propiedad, el mal sistema de impuestos y el pésimo sistema de gobierno...

**Sr. Simón Padrós.** — Es que para un consumo de 24.000.000 hay además un stock de 13.000.000. No quiere comprender la situación económica.

**Sr. Ghioldi.** — Hay en el mundo infraconsumo.

**Sr. Simón Padrós.** — Y exceso de producción.

**Sr. Ghioldi.** — Es que hay en el mundo gente que ve destruir el azúcar y arrojar al mar la uva y el café, pero no puede tomar café ni vino, ni puede comer azúcar. No es por deficiencia industrial, sino por deficiencia de la organización social.

**Sr. Simón Padrós.** — Tucumán bate el record del minimum de desocupación en la Argentina.

**Sr. Ghioldi.** — El señor diputado está empeñado en hacer el elogio del atraso industrial. El sabrá por qué.

El escaso rendimiento de la industria azucarera argentina se traduce en el elevado precio de costo a que se refirió el señor diputado. Los informes que se utilizan para justificar la protección aduanera siempre tienden a dar un único precio de costo. Así, por

ejemplo, la Comisión Nacional del Azúcar que informó cuando el Gobierno Provisional — sin la firma del ministro de Hacienda, dato bien curioso — dió el famoso decreto elevando en 4 centavos oro el precio del azúcar, estableció el precio de costo en \$ 0,345 el kilogramo de azúcar granulada blanca de consumo y \$ 0,38 el de azúcar refinada «pilé», cuando es evidente que hay diferencias considerables en los precios de costo según los ingenios.

El señor diputado tomó una manifestación mía y la contestó de una manera muy particular, refiriéndose a condiciones accesorias de ella, y no a su parte central. Dije ayer que el despacho estaba inspirado en la defensa de intereses oligárquicos. El señor diputado, extendiendo sobre su pupitre la amplia planilla, adherida al despacho de la comisión que muestra el desarrollo de la aplicación del nuevo sistema impositivo en el transecurso de 20 años, demostró que algunas provincias, como Catamarca y Corrientes, salían altamente beneficiadas, tanto que habrían de tener tanto dinero que ni siquiera la imaginación bien fértil del señor diputado González podría encontrarle aplicación. *(Risas)*.

**Sr. Simón Padrós.** — Eso lo pone de su cosecha el señor diputado.

**Sr. Ghioldi.** — Sí, señor diputado.

Sin embargo, yo no me había referido en ese momento al beneficio que obtendrían Tucumán, Mendoza, Salta o Jujuy, sino al beneficio que obtendrán las industrias que he llamado oligárquicas, que en síntesis son aquellas que se desarrollan bajo el amparo de la protección aduanera.

Quise referirme a dos datos, para no leer íntegramente la planilla que tengo en mis manos. Los vinos están produciendo a las provincias 33.200.000 pesos. Después de la unificación de impuestos, que se haría para servir el ideal de unidad nacional de que tanto se ha hablado esta tarde, la industria del vino no pagará 33.000.000, sino 23, porque el régimen impositivo significa la disminución del gravamen que pesa sobre tal industria.

**Sr. Godoy.** — El Poder Ejecutivo calcula el rendimiento en 27.000.000.

**Sr. Ghioldi.** — Estoy leyendo cifras que ha mandado el ministro de Hacienda a la comisión. Si el ministerio envía una documentación y luego particularmente da datos que difieren de los consignados en aquélla, yo no soy responsable de ello.

La industria del azúcar, cuya contribución a los erarios provinciales es de 8.800.000 pesos según esta planilla, pagará en el futuro 7.000.000 de pesos.

He tenido, pues, base numérica suficiente para afirmar que la unificación de impuestos significará beneficiar materialmente a las industrias protegidas.

**Sr. Corominas Segura.** — El señor diputado sostiene que la industria del azúcar y la del vino gravan excepcionalmente los consumos del país, y de los datos que acaba de mencionar el señor diputado resulta que va a producirse una desgravación. Luego, el hecho no debería ser objeto de crítica, sino de elogio.

**Sr. Ghioldi.** — Por mí, la Nación y las provincias pueden obtener cuanto les sea posible gravando la industria del vino, porque es un producto cuya difusión en la masa popular no me interesa. Con respecto al azúcar un impuesto aplicado a la industria azucarera, que ha llegado al límite de carestía no es un impuesto que grave en realidad sobre el consumidor.

**Sr. Simón Padrós.** — Entonces, no era exacto aquello de que el impuesto provincial afectaba el consumo.

**Sr. Ghioldi.** — Las dos cláusulas tienen que jugar al mismo tiempo. Lo es sobre el consumo porque existe la aduana, pero con ese impuesto o sin él ustedes no podrán ir más arriba de los pesos 4,10.

**Sr. Simón Padrós.** — Entonces, es el derecho de aduana el que afecta al consumo, y no el impuesto provincial.

**Sr. Ghioldi.** — Pero el impuesto provincial significa una merma del impuesto de aduana para beneficio exclusivo de la provincia. Esto es de toda evidencia.

El señor diputado trajo a colación algunas palabras del concejal socialista Fernando Ghio, cuando en el Concejo Deliberante se discutió el comercio de carnes. El señor diputado decía: con el mismo derecho con que ustedes quieren amparar en el Concejo Deliberante al Frigorífico Municipal para proteger a los obreros del mismo, permítanos que nos defendamos de la competencia desleal que nos hacen los productores extranjeros, tratando de aplicar algunas medidas restrictivas. En primer término, señor diputado, y para ser leal, quiero decir que yo, personalmente, no he estado de acuerdo con el proyecto que defendió el concejal Ghio y, en segundo término, dígame que, en todo caso, la diferencia entre las inspiraciones de nuestro compañero y las del señor diputado, es esencial. El concejal Ghio quería amparar al Frigorífico Municipal, no a un frigorífico privado, protegiendo también a los trabajadores; pero en cambio, el señor diputado pide la protección, no para mantener el salario mínimo de los trabajadores de Tucumán, sino para obtener la ganancia máxima de los industriales.

**Sr. Simón Padrós.** — El señor diputado está en contradicción con el ex diputado Justo, cuando reconocía que, en Tucumán, había salarios y había jornales.

**Sr. Ghioldi.** — Ruego al señor diputado me deje continuar esta exposición que deseo sea breve. La reiteración con que se cita el nombre de Juan B. Justo pone de relieve la base falsa de la exposición del señor diputado Simón Padrós. Si hay algo que ha caracterizado la actuación parlamentaria de Justo, tanto aquí como en el Senado, es haber persistido en toda su vida en denunciar los privilegios de la industria azucarera y anunciar que ella terminaría por crisis y estancamiento industrial. Es lo más característico de la personalidad parlamentaria del diputado Justo y ahora, a los seis o siete años de su fallecimiento, es traído el nombre de Justo para decir

que si viviera tendría una opinión contraria a sus discípulos actuales.

**Sr. Simón Padrós.** — No podrá negar lo que dijo.

**Sr. Ghioldi.** — Por otra parte, como sé que el señor diputado Pena se ocupará especialmente de la industria del azúcar, dejo de contestar otras manifestaciones del señor diputado Simón Padrós y paso a referirme a algunas de las consideraciones hechas por el doctor Pinedo que ha empleado, como de costumbre, su habitual ingenio o inteligencia para preparar ya el camino a la inmortalidad a esta obra histórica que sancionará la Cámara.

El señor presidente, miembro informante de la comisión, omitió hacer el elogio de práctica a los autores inmediatos de la iniciativa y ha sido necesario que ellos salieran a la palestra haciendo el elogio y defensa de la propia obra y para que pareciera más grande y resplandeciente de luz trató de disminuir todas las objeciones y restarle importancia a las consideraciones que hemos formulado ayer. No sólo ha tratado de restar importancia a nuestras críticas, sino que trató de demostrar que, en el fondo, en lo fundamental, en el 99 % del despacho la diputación socialista estaba de acuerdo con la iniciativa.

De esa manera saldría triunfante de la Cámara, por unanimidad proclamada por el ministro, una obra que, desde este instante, pasa a la posteridad. El señor ministro hoy ha hablado en tono solemne, y es hablar en tono solemne cuando se ve en el curso de los años pasados nada más que las etapas culminantes, negándose a escudriñar la trama íntima a que día tras día van formando la historia. Claro está que desde un sillón ministerial o desde una banca de diputado, cuando se trata de obtener el aplauso de los demás, es fácil en una mirada general ver las altas cumbres del movimiento histórico; pero si creyéramos con ello haber alcanzado la verdad negaríamos el método histórico que nos obliga a descubrir sin temor las fuerzas materiales, los egoísmos, los dolos y los escándalos.



los que en todas las épocas de la historia se mezclan con las virtudes y los esfuerzos creadores. Y no es, señores diputados, que nosotros tengamos un método de la historia tal que nos permita decir ahora: «todo lo pasado no es sino error, crimen, venalidad y fraude. La historia se inicia con nosotros». No, señores diputados. Tenemos un método comprensivo de la historia, sabemos que la vida de las colectividades es la común aventura de los hombres que tratan de ubicarse y adaptarse en el universo para hacer más fácil, más cómoda, más alegre y más bella la vida. Pero sabemos que el tránsito por la tierra no es un esfuerzo siempre placentero, sino una lucha constante, donde se enfrentan el egoísmo y el altruismo, la pasión noble y la pasión inferior. No sería el caso de enternecernos todos hablando de la unidad nacional, creyendo que este despacho de la comisión está preñado por el Espíritu Santo y no han intervenido para engendrarlo los intereses materiales espurios. (*Muy bien!*).

Nos ha tocado a nosotros los diputados socialistas la prosa, dejando el verso a los diputados de la mayoría. Comprendo que ése es su papel, porque ellos tienen que enaltecer su obra, porque ellos tienen que cantarla, pero es a la oposición a la que corresponde la tarea de descubrir, a veces con valor, las fuerzas materiales, los egoísmos, los intereses concretos que han actuado para dar vida al despacho.

El señor ministro de Hacienda ha querido reducir nuestra oposición al asunto del azúcar, y le era cómodo adoptar esa posición polémica. Claro; si toda nuestra argumentación ha de girar en torno al azúcar, y si luego el señor ministro se encarga de demostrar que nuestra duda no tiene razón de ser, porque quedará subsistente la ley Saavedra Lamas, el ministro se ha ganado de entrada la batalla verbal. Pero es que para ello el señor ministro ha tenido que ignorar u olvidar momentáneamente todas las objeciones que hemos concretado en la comisión y que ayer desarrollé en el recinto. No es el caso

de entrar ahora, a esta altura del debate, a reiterar nuestro punto de vista. Con toda lealtad hemos dicho que concebimos como un progreso el procedimiento que tiende a unificar los impuestos nacionales y provinciales. Creemos que es introducir el método, creemos que es introducir el orden en el caos y la anarquía impositiva. Pero no estamos de acuerdo, y creo que es ella una posición legítima, con las bases que han servido a la comisión para despachar el proyecto.

No pudiéndose tomar el consumo real por carecerse ahora de datos para establecer el reparto, hemos propuesto que se tome un índice bastante aproximado a la realidad, cual es el índice de la población. Y a esta objeción, desdénada por el señor ministro, no podrá negársele la importancia que intrínsecamente tiene. Si se ha de introducir método escojamos uno que sea por igual para todas las provincias, la Capital Federal y los territorios, el método de la población, pero no apelemos al complicado sistema de las recaudaciones actuales, corregido por las recaudaciones hipotéticas de la provincia de Tucumán, para llegar después, al término de diez o veinte años, a la distribución por población.

Yo no sé cómo el señor ministro de Hacienda no nos ha explicado esta tarde la manera en que ha de financiar la ley. En la comisión fué muy claro y preciso. Dijo: a las provincias en concepto del producido del impuesto al consumo y a la producción se les entregará la suma de 67,4 millones de pesos. Por participación en el impuesto a los réditos y a las primeras ventas se les entregará 11.000.000. Quiere decir que el presupuesto nacional tendrá una salida de 78,4 millones. ¿Cómo el señor ministro equilibraba esas salidas? De la siguiente manera: proyectó obtener 25.000.000 del vino, tanto del tabaco, tanto de la cerveza, de los fósforos, de las cubiertas, del alcohol, del azúcar; en total, 53.000.000 por modificación de las tasas de los impuestos internos. Proyectó tomar 3.000.000 por modificación del impuesto a los réditos, y 8.000.000 del impuesto global

a las herencias. Total de entradas: 64.000.000. Con estas dos cifras el señor ministro se manejaba en la comisión. «Señores diputados por provincias: El proyecto entrega a las provincias 78.000.000; la Nación sólo podrá recaudar 64.000.000. Hay un déficit para la Nación de 14.000.000. No pueden atenderse más las reclamaciones de las provincias.»

¿Cómo propondrá financiar el despacho el señor ministro? Es lo que yo no podría informar ahora a la Cámara.

A las provincias en conjunto por participación en el producido en el impuesto al consumo, a la producción, a los réditos y a las ventas, les corresponderá no ya 78.000.000, sino 91 millones.

¿Cuánto recaudará la Nación por la modificación de impuestos? Aun admitiendo los 53.000.000 de pesos por modificación de las tasas — lo que no es exacto porque se ha rebajado el impuesto al vino y a la cerveza — y agregando los 3.000.000 de los réditos, tendríamos 56.000.000. No computo todavía los 8.000.000 por impuesto a la herencia. Quiere decir que de la comisión ha salido un despacho que elevó el déficit de 14.000.000 con que venía financiado el proyecto del Poder Ejecutivo a 35,9 millones. El señor ministro de Hacienda en lugar de decirnos cómo iba a financiar la ley, prefirió dedicarse a literatura histórica.

Dijo bien el señor ministro esta tarde: «este despacho — y creo que debe haber sido una frase que se le escapó, porque ella encierra la justificación plena de nuestra actitud — tendrá carácter si se sanciona también el impuesto a las herencias.»

Tal afirmación en boca del señor ministro significa que tenemos razón los socialistas cuando decimos que se persiste en gravar el consumo y el trabajo, y cuando se insiste en no gravar el privilegio del suelo o el privilegio hereditario, que será cada vez mayor en esta República, que ya no puede ofrecer el campo de hace 50 años para el enriquecimiento fácil en una sola generación de una familia. Mas el se-

ñor ministro, que es tan contemplativo con los conservadores, en quienes públicamente no encuentra un error, una tacha o un defecto, no nos perdona nada a los socialistas: los socialistas constituimos para él una espina irritativa que se le ha colocado en la médula. Cualquier palabra que pronuncie alguno de los parlamentarios de este sector irrita extraordinariamente al señor ministro, que trata de condenar a silencio a todos, diciéndoles: «usted no sabe nada, usted no ha leído nada, usted no entiende nada.»

**Sr. Noble (R. J.).** — El señor diputado podría dejar la parte personal del señor ministro para cuando concorra.

**Sr. Ghioldi.** — No es una parte personal.

**Sr. Solari (J. A.).** — El señor ministro podría estar presente.

**Sr. Ghioldi.** — Me parece que no hago ningún cargo, ningún ataque al señor ministro; estoy contestando manifestaciones del señor ministro.

**Sr. Noble (R. J.).** — Me refiero al tono del señor diputado.

**Sr. Presidente (Ferreira).** — Ruego al señor diputado no interrumpa.

**Sr. Ghioldi.** — El señor ministro, que nos niega hasta el saber escribir, con ese método que emplea para eliminar a los adversarios, dice a menudo que tiene que hacer gran esfuerzo para entender las cláusulas que nosotros redactamos y trata de poner algún empeño en interpretarlas lealmente.

Cuando se refería al caso de la provincia de San Juan, que yo había citado en una exposición anterior, el señor ministro hizo algunas consideraciones interesantes. Cuando la provincia de San Juan, conjuntamente con la de Salta y Corrientes en la reunión de la comisión se lamentaba de no tener una mayor participación en el reparto de impuestos unificados, el señor ministro expuso vigorosamente el concepto sano en una frase: «sería absurdo que ahora nos propusiéramos indemnizar a las provincias que han tenido y tienen buenos gobernadores». Con esa frase el señor ministro dió

por terminado definitivamente, como correspondía, los reclamos de las provincias que acabo de mencionar. Pero se planteó el caso esta tarde en la Cámara y entonces el mismo señor ministro, que ha pronunciado esas palabras en la comisión, encuentra el otro argumento y dice: «Tienen razón de reclamar una mayor parte en el producido de los impuestos porque una mayor participación no las compensaría de los malos gobiernos que tuvieron en otras oportunidades». Se ve, pues, que el señor ministro maneja el pro y el contra como los filósofos sofistas, para quienes el bien y el mal están más allá de nuestros alcances personales.

No hemos negado ni negaremos jamás por comodidad o especulación política, las bondades y las virtudes de una iniciativa, y con esta iniciativa que no votaremos por las manifestaciones hechas ayer y hoy, hemos aplicado ese método, que es el método civilizador de reconocer en todo la parte de verdad, de virtud o de progreso que efectivamente encierre.

El señor ministro aprovecha y deforma una frase que yo pronunciara ayer reiterando un concepto mil veces expuesto por la diputación socialista.

Dije ayer, reiterando conceptos que han sido emitidos por Justo, por Repetto, por Dickmann y por tantos otros, que todavía ahora es fundamentalmente exacto que el régimen impositivo argentino reposa en la construcción de Rosas, que aplicó los impuestos aduaneros y en la construcción de Pellegrini, que creó los impuestos internos. Agregué a continuación, porque no soy de los que me pago de éxitos ocultando la verdad, que era de destacar en los últimos años un progreso pequeño, pero progreso al fin, en el régimen impositivo, con la aplicación del impuesto a los réditos. El señor ministro olvidó esta última parte y entonces me presentó como un repetidor sistemático de una frase que tuvo verdad hace 20 años y que yo he tenido incapacidad de ponerla al día, poniéndome yo al día con la realidad argentina.

Trazó el cuadro histórico aprovechando el párrafo: Rosas, para quien desde luego, no tuvo palabras de elogio; Pellegrini, a quien exaltó en la defensa de la oligarquía. No sé si porque el ministro de Hacienda esté cada vez más enamorado de su tradición familiar pero es el caso que cada vez hace con más calor y pasión la defensa de esta oligarquía que hasta hace poco tiempo combatía él desde estas mismas bancas. Y yo le reconozco al señor ministro de Hacienda, prácticamente incorporado ahora al núcleo conservador del país, el derecho que le da su propia euforia de aspirar a una posición más alta y de pertenecer, por lo tanto, a la oligarquía tradicional; pero no tiene el derecho de presentarnos a nosotros como incomprensibles de la realidad actual como negadores de la solidaridad nacional, como queriendo regatear a las provincias el agua y el pan. No tiene derecho a construir a priori la serie histórica de los prohombres: Rosas, Pellegrini, Uriburu y Pinedo.

Somos una fuerza de civilización y de progreso. Por eso hemos reconocido las virtudes del método de la unificación, y no hemos regateado el reconocimiento en un párrafo mezquino, ya que hemos hecho una exposición amplia a este respecto, cayendo sobre mojado, pues insistimos después de la amplia exposición del señor diputado Martínez. Es que no nos mueve el repudio sistemático del pasado, ni nos pagamos de nuestros sueños sobre el futuro para disculparnos de la incapacidad para apreciar el presente.

Porque nosotros tenemos el concepto de la relatividad que aconseja saber apreciar el papel que juegan los presentes como los ausentes de esta Cámara, es que nosotros también tenemos derecho a decir que el señor ministro, que habló de la unidad nacional, no estuvo oportuno al repudiar en la forma que lo hizo el sector de la opinión pública que no tiene representación política en virtud de las causas conocidas. No puede hablarse al propio tiempo de solidaridad y unión na-

cional y decir con jactancia autoritaria que «aquéllos» no volverán, que se han ido definitivamente». Yo supongo, porque conozco al doctor Pinedo, que esto no significa dar apoyo a esa frase que algunos elementos políticos han hecho circular a pesar de nuestro régimen democrático: quedarse en el poder con votos o sin votos.

Termino esta breve réplica, señor presidente, en la que la Cámara habrá podido apreciar que, no obstante el apasionamiento que brota naturalmente de una contestación que es improvisada, he tenido el suficiente equilibrio de espíritu para saber apreciar en todo momento los valores relativos que existen también en otras filas.

Nada más. (*Muy bien! Muy bien! Aplausos*).

**Sr. Arce.** — Pido la palabra.

He de votar, señor presidente, el despacho de la Comisión de Presupuesto en lo que se refiere a la unificación de los impuestos internos, reservándome hacer algunas observaciones de forma cuando se discuta en particular, en el deseo de colaborar en la tarea realizada por la misma. Pero advierto — no sé cuál será la finalidad y me parece difícil que pueda demostrarse la conveniencia de esa actitud — que en este despacho se mezclan dos leyes que han debido redactarse por separado, y hasta se hace alusión a una tercera que es muy discutida por la opinión pública en general. Eso ha permitido que en este debate se hable un poco de todo, inclusive hasta del impuesto global a las herencias, que no tiene despacho y sobre el cual el señor ministro de Hacienda nos ha pronosticado hoy que, a pesar de que se lo crea un muerto, ha de revivir, como el fénix, de sus cenizas.

Planteo, pues, desde ahora, señor presidente, la necesidad de que se divida esta ley. Lo que hay más allá del artículo 28, nada absolutamente tiene que hacer con los impuestos internos de la Nación y de las provincias ni con la unificación.

Y al referirme a los impuestos de la

Nación y de las provincias, aprovecho la oportunidad para sugerir, desde luego, una corrección en el texto de la ley, que de aquí en adelante, si fuese sancionada, no requiere más la palabra «nacional» o «nacionales», puesto que solamente habrá impuestos internos.

Es necesario separar todo lo que se refiere al impuesto a los réditos y mucho más lo relativo al impuesto a las ventas, si queremos ordenar el debate y si queremos facilitar la sanción sobre cuestiones absolutamente distintas, con respecto a las cuales hay, según es público y notorio, opiniones diametralmente opuestas.

En cuanto a la unificación de los impuestos internos no estará de más que haga notar — el punto ya ha sido considerado especialmente por el señor miembro informante de la mayoría de la comisión y ha sido tocado en las exposiciones del representante de la minoría y del señor ministro de Hacienda — la relación que existe entre la posibilidad de unificar los impuestos internos y el federalismo económico en la Argentina.

Es evidente — y la afirmación ha sido hecha antes de ahora — que si las provincias pueden convenir con la Nación en renunciar a sus propias facultades de establecer impuestos al consumo, tienen ese derecho y que, si a la vez, lo tiene la Nación, es evidente, decía, que si antes de ahora no fué violado el federalismo argentino porque la Nación y las provincias establecieran impuestos sobre la misma materia, no lo estaría en el futuro una vez establecida la unificación.

Lo grave de la unificación no está allí: lo grave consistirá en que la máquina burocrática y la influencia política de la Nación, que es ya enorme en el territorio de las provincias y que, aun cuando con propósitos de bien público, ha avanzado, unas veces dentro y otras al margen de la Constitución, en jurisdicción de las mismas, hará que en un momento dado las provincias, que desde un punto de vista práctico, en los hechos, van caminando hacia el unitarismo polí-

tico, afirmen ese unitarismo en base a un unitarismo económico, que si es posible, desde que la Constitución autoriza a las provincias a celebrar convenios entre sí y con la Nación, en definitiva suprimirá, dejándolo solamente en el nombre, el federalismo argentino.

Pero los beneficios de la unificación de los impuestos internos son tan grandes, y en cambio — sobre todo por lo que se refiere a la administración pública y a la política — el unitarismo ha avanzado tanto, que no vale la pena argüir, no vale la pena combatir a este unitarismo político de una manera teórica cuando ya es tarde, cuando sería difícil convencer a la Nación misma, de que el federalismo de nuestras instituciones bien cumplido, es superior al híbrido sistema que vivimos. Votaremos, pues, la unificación.

Con relación a la ley es evidente, y desde mi punto de vista individual no tengo inconveniente en declararlo, que el único índice legítimo y razonable para la distribución deberá estar basado en la población. Pero así como las instituciones argentinas reposan sobre el equilibrio de esta Cámara, en que está representado el pueblo, según sea el número de habitantes de cada provincia, enfriado por aquel plato, donde se puede derramar el café, del Senado de la Nación, para recordar el célebre gesto con que el gran americano explicaba la necesidad de la creación de la alta Cámara, bueno será dejar establecido que no era posible adoptar desde el primer momento ese índice como base para la distribución del impuesto. Desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista estrictamente científico, y al decir científico me refiero al concepto políticoeconómico más general, los señores diputados que acaban de exponer sus ideas al respecto, por boca del señor diputado por la Capital, tienen razón. Pero es evidente que, por defectos del régimen de la superposición y por imperio de hechos existentes, en los gravámenes aplicados hasta este día por la Nación y por las provincias, no era posible ir directa-

mente a encarar la repartición de los impuestos internos unificados con arreglo a la población. Los señores diputados del sector socialista, que estiman siempre la doctrina, pero que por encima de la doctrina estiman los hechos, para adoptar las soluciones prácticas que se han de dar en lo político y en lo económico, no podrán negar que hay muchos hechos que impiden aceptar de entrada, como base para la distribución de los impuestos internos unificados, la población de las distintas provincias.

La transacción, la coordinación de los intereses, cuando está basada en hechos explicables, justificables y confesables, es de buena política; por decirlo así, es el eje sobre el cual debe girar la política, que en definitiva no es sino la coordinación de los intereses de una colectividad, expresados en una asamblea como ésta, por los distintos sectores de la opinión.

La transacción, pues, es el mejor criterio que han podido tener el Poder Ejecutivo y la Comisión de Presupuestos, y la evolución entre el régimen inicial de los hechos existentes para pasar en definitiva a una distribución más apropiada con relación a la población de cada una de las provincias es, en mi sentir, lo que corresponde.

—Ocupa la Presidencia de la Honorable Cámara, el señor vicepresidente 2º, doctor Roberto J. Noble.

Son estos los motivos, brevemente expuestos — estamos en la discusión en general —, que me decidirán a votar la unificación de los impuestos internos en la forma propuesta por la comisión.

Me he referido a la existencia de dos leyes en el despacho, y para probarlo me bastaría recordar que en el artículo 31 se habla de «la parte que corresponde a la Municipalidad de la Capital Federal y a las provincias»; pero en el artículo 32 se habla de que «para participar en la recaudación de los impuestos a los réditos y a las ventas las provincias deberán cumplir con las obligaciones que como agentes de re-

tención les fijan las leyes 11.628 y 11.683», apartado en el cual no figura la Capital, lo cual podría aparecer como una omisión o un olvido de la comisión, y en el artículo 33 se habla de que «el Poder Ejecutivo liquidará trimestralmente a las provincias y a la Municipalidad de la Capital las sumas que les correspondan por aplicación de los artículos 2º y 3º», que nada tienen que hacer con esa parte de la ley y que revelan a las claras que estos artículos pertenecen a dos leyes que originariamente estaban redactadas por separado.

**Sr. Dickmann (A.).** — En ausencia del presidente de la comisión, le daré la clave del asunto. Eran dos despachos separados y que a última hora fueron refundidos.

**Sr. Arce.** — Me he dado cuenta de que debía ser así y esa refundición es lo que critico. Planteo la disidencia desde ahora, en razón de que oportunamente he de pedir que las dos leyes se sancionen por separado.

A renglón seguido se habla de que «dentro del plazo de cinco días a partir del primero de cada trimestre, el gobierno nacional depositará esa suma a la orden de los gobiernos respectivos, en el Banco de la Nación Argentina». Es evidente que lo que se ordena, por lo que se refiere al impuesto a los réditos y a las transacciones, es que la parte que corresponda a la Capital Federal, que no figura en el apartado del artículo 33 a que me estoy refiriendo, se entregue, no al gobierno que corresponde, que es el de la Nación, sino al municipio de la Capital.

Advertidas estas incongruencias, en las que me baso para solicitar desde ahora la separación de ambas leyes, vengamos a este aspecto de la cuestión, desde que él ha sido abordado en el debate en general de las dos leyes refundidas.

Se ha dicho ya que el concepto de los diputados del sector socialista en lo que se refiere al índice más exacto y justo para la distribución del impuesto, es el de la población. Y si me

he referido a las grandes ventajas de la unificación de los impuestos internos, sin entrar en detalles, porque no desearé ponerme en disidencia, desde que en definitiva he de acompañar a los diputados que pertenecen a mi sector y que representan a las provincias que producen azúcar y vino, no puedo acompañar, en cambio, a la comisión, cuando ha cedido a la influencia de esa «nueva provincia» que por imperio de esta ley surge en el preciso momento en que tratamos de alcanzar el unitarismo económico, renunciando al federalismo. Esa nueva provincia que no está en la Constitución y que se trata de crear en esta ley, no ha de contar tampoco con mi voto. Ya ven los señores diputados del sector socialista cómo de la misma manera que ellos son capaces de dar la razón al adversario cuando la tiene, yo que les doy la razón en dos de los puntos considerados en este debate, no puedo acompañarlos para que la Municipalidad de la Capital Federal, asuma el papel de provincia y participe en el porcentaje al impuesto a los réditos y a las ventas.

En la economía de esta ley se habla de la Nación y de las provincias. Hasta este momento, no obstante que el Congreso puede, de acuerdo al artículo 67 de la Constitución, crear nuevas provincias, existen las mismas que cuando se organizó la Nación el año 1853, es decir, catorce. Por lo que se refiere a la Nación no existe naturalmente, ello es evidente, sino una: la Nación Argentina. Es cierto que después de muchas dificultades, después de haber fracasado muchas iniciativas, un buen día la Nación consiguió — permítaseme que repita una vez más un hecho que no podrá ser negado — gracias a la formación de un congreso ad hoc y de una legislatura ad hoc darse su Capital definitiva. Y ese acontecimiento político que podría lastimar el espíritu localista de algunos de los argentinos, hoy día, después de más de 50 años de acaecido, es aplaudido por todos los argentinos de la Capital y de las catorce provincias; ¿pero cuál es la situación creada después de ese acontecimiento? Que

existe un distrito federal de la Capital, que no es una provincia, sino la parte del territorio desmembrado de una de las antiguas provincias para formar la Capital Federal. Ella no puede reclamar la situación de provincia, y es por eso que me alarmaba hoy — y pido al señor diputado por la Capital a quien me voy a referir que no vaya a encontrar en estas expresiones nada que tienda a molestarlo porque sabe el alto concepto que tengo de su capacidad, de su hombría de bien y de su dedicación al interés colectivo: me refiero al señor diputado doctor Adolfo Dickmann — me alarmaba, hoy cuando decía, como cualquier diputado del viejo régimen de alguna de las provincias históricamente consagradas: «no se trata de una cuestión constitucional; ¡se trata de una cuestión de plata!». Y aparecía él en defensa de la Capital, como cualquier diputado por Mendoza, Salta, San Juan o Corrientes, reclamando parte en el botín que se distribuía en el momento de votarse la unificación de los impuestos internos.

Yo no sé si será criticable la actitud de los señores diputados de las provincias a que me he referido, cuando han defendido los intereses de los Estados cuyo pueblo ellos representan; en todo caso, la tradición no solamente les permite sino que les obliga a ensayar esa defensa, pero lo que no es posible es que los diputados por la Capital y toda esta Honorable Cámara, olviden que este distrito no forma una provincia, que no pertenece a nadie; que es falsa, institucional, social y parlamentariamente, la expresión «ustedes», referida, por ejemplo, a quienes representan a Corrientes, por oposición a los que representan a la Capital. No; no puede haber «ustedes» para los de la Capital. La Capital está representada por todos nosotros; la Capital de la República es la Nación misma. En ella gobiernan un Ejecutivo que es el de la Nación y una Legislatura que es la de la Nación. No es posible, pues, legítimamente, que se olvide que los recursos de la Capital son de la Nación y que es con los recursos de esta última que debe hacerse cuanto corresponda hacer en la Capital.

El gobierno de la Nación en la Capital es perfectamente comparable con los gobiernos de provincia en las provincias, del mismo modo que el conjunto de las municipalidades de las provincias, es comparable con la Municipalidad de la Capital. Ello es absolutamente innegable. De otra manera, la provincia de Buenos Aires, cuyo pueblo tengo el alto honor de representar aquí, podría decir a los señores diputados de la comisión: se han olvidado de las municipalidades de los 110 partidos en que se divide la provincia y para los intereses edilicios de esas 110 municipalidades reclamo la parte que proporcionalmente a su población corresponda, del mismo modo que se entrega la que ustedes entienden corresponder a la persona jurídica, Municipalidad de la Capital.

El gobierno general provee en la Capital de la República a todo aquello que no es comunal, como en las provincias, los gobiernos de provincia proveen en sus respectivos territorios a todo aquello que no proveen las municipalidades en que esos territorios se encuentran divididos.

**Sr. Dickmann (A.).** — ¿Me permite el señor diputado una interrupción?

**Sr. Arce.** — Voy a terminar mi pensamiento, y la permitiré en seguida al señor diputado.

Es cierto que la Nación, además, concurre en obsequio de las provincias realizando obras de fomento que correspondería fueran costeadas por los tesoros provinciales, pero no hay que olvidar que la formación de la Nación ha disminuído, cuando no arruinado, a muchas provincias del interior, y que de la misma manera que en las provincias el tesoro de la Nación costea gastos que corresponderían a los gobiernos de esas provincias, el tesoro de la Nación puede hacer y hace lo mismo en el territorio de la Capital. Y sería muy interesante que la Comisión de Presupuesto, llegado el caso, nos formulase una planilla en que estuviesen perfectamente discriminadas las sumas que por concepto de gobierno local y de gobierno general de la Nación invierte la Nación Argentina en el territorio de la Capital.

Y ahora que he terminado la expresión del concepto que quería presentar ante la Honorable Cámara, con mucho gusto le concedo la interrupción al señor diputado.

**Sr. Dickmann (A.).** — El señor diputado anticipa el debate respecto a un asunto que, a mi juicio, debe discutirse en particular y que yo, por mi parte, lo haré entonces. Pero debo señalarle hechos que seguramente ignora por no haber estado en la comisión.

Tiene el señor diputado a su izquierda a su colega por la provincia de Buenos Aires, que es el que más ha bregado en el seno de la comisión para salvaguardar algunos de los derechos de las municipalidades, lesionados por esta ley, a punto tal que consiguió, con nuestro apoyo, que la municipalidad que él representa no fuera perjudicada en la percepción de algunos impuestos que podrían ser afectados por la unificación.

En la doctrina que he sostenido en la comisión y que sostendré en el recinto, me hallo en muy buena compañía. El señor intendente de la Capital, reconocida autoridad en el derecho constitucional, — el doctor Mariano de Vedia y Mitre, que mereció el honor de ser convencional recientemente en la provincia de Buenos Aires —, se dirigió al Poder Ejecutivo en mensaje muy bien fundado, sosteniendo no sólo la conveniencia, sino los derechos de la Capital para participar en el impuesto a los réditos y a las transacciones.

Me reservo contestar al señor ministro y al señor diputado cuando proponga como artículo 6º el que propuse en la comisión, que fué largamente discutido y que aún no sé qué suerte correrá en el recinto.

**Sr. Arce.** — Tomo nota de las manifestaciones del señor diputado y de las opiniones del señor intendente municipal, que es un jurista distinguido, que como el señor diputado dijo, fué también miembro de la Convención Reformadora de la Constitución de la provincia de Buenos Aires; que es, además, como es público y notorio, hombre de letras, que traduce a Shakespeare y a

Oscar Wilde, y que por su magnífica obra literaria acaba de ser incorporado a la academia respectiva.

Pero si alguna vez me he permitido el sacrilegio de disentir con Alberdi, con Mitre, con Rawson, en base a una convicción, el señor diputado debe permitirme que pueda discutir con el señor profesor de derecho político, doctor Mariano de Vedia y Mitre.

**Sr. Dickmann (A.).** — Yo no me atrevo a tanto.

**Sr. Arce.** — Dicho esto, retomo el principio de mi exposición para terminar.

He dado las razones que me deciden a votar la unificación de los impuestos internos. Sugiero desde ahora, y espero que la Comisión de Presupuesto acogerá esta sugestión con benevolencia, la necesidad de suprimir la palabra «nacionales» en donde se habla de los impuestos internos, y propongo para su oportunidad la separación de las dos leyes que comprende el despacho: la primera, que abarca hasta el artículo 28, y la segunda, que abarca los artículos restantes. En esa oportunidad volveremos a debatir muy cordialmente con el señor diputado por la Capital, a propósito de la situación de la Capital con respecto a la situación que aquí se le ha querido dar de provincia argentina.

Nada más. (*Muy bien!*).

**Sr. Ahumada.** — Pido la palabra

A esta altura del debate, me voy a concretar a dar someramente los motivos que tiene el bloque que presido para votar este proyecto de ley. Así como las observaciones esenciales que me sugieren algunas de sus disposiciones.

Entendemos que con esta ley se resolverá de una vez por todas el viejo problema de la superposición impositiva, que tanto malestar ha ocasionado al comercio y a la producción del país, así como el no menos grave problema de la guerra aduanera interprovincial que se ha agudizado notoriamente en los últimos años. El propósito esencial de la ley es ése y creo que lo obtendrá ampliamente.



Antes de entrar a fundar las observaciones que he de formular, deseo hacer notar una circunstancia hasta cierto punto curiosa.

El señor diputado por Buenos Aires, doctor Arce, acaba de destacar un hecho que es evidente. En este despacho vienen, puede decirse, unidos arbitrariamente dos proyectos, cuya vinculación entre sí es difícil de establecer. Cuando yo voté en la Comisión de Presupuesto el despacho de la unificación de los impuestos internos, entendí lógicamente que ese despacho se traería a la consideración de la Cámara aislado, con personalidad propia. En ese entender firmé, en el apuro del momento, el despacho que se me llevó por empleados de Secretaría, pero me encuentro ahora en la Cámara con la novedad inesperada de que de los dos despachos sobre unificación de los impuestos internos y de prórroga del impuesto a los réditos y distribución de estos impuestos y del de las ventas, se ha hecho uno solo.

Formulo esta aclaración, porque no deseo que se me haga el cargo de aparecer en la Cámara rectificando un modo de proceder adoptado en el seno de la comisión.

Entiendo que la Cámara debe votar, en primer término, la ley de unificación de los impuestos internos. Una vez sancionada dicha ley, debe a su vez pronunciarse aisladamente sobre el otro despacho sobre prórroga del impuesto a los réditos y participación de las provincias en los impuestos a los réditos y a las ventas. Resultaría absurdo unir este último despacho al de unificación de impuestos internos, porque esta viene a ser una ley contrato entre las provincias y la Nación y de ninguna manera se explicaría en una ley de esta índole la inclusión de artículos que nada tienen que ver con ese punto esencial. Por estos motivos voy a votar, desde luego, la proposición que el señor diputado Arce anuncia que formulará oportunamente.

Una de mis disensiones en el seno de la comisión, con la mayoría, fué el criterio adoptado para determinar la

participación que correspondería del producido total de los impuestos internos nacionales a las llamadas provincias productoras. Observé que la situación de estas provincias, cuyos presupuestos en más del 90 por ciento se cubren con esos impuestos llamados a la producción, era, en realidad, de un punto de vista legal, criticable y arbitrario, pero no se podía negar que era una situación de hecho mantenida desde hace muchos años. Es evidente que frente a situaciones de esa índole, el legislador debe considerarlas, tratando en lo posible de enmendarlas o ajustarlas gradualmente a los buenos principios.

De ahí que yo acepté el criterio que informaba el proyecto del Poder Ejecutivo, de tomar como cifra básica para esas provincias, el promedio de las recaudaciones de los últimos cinco años. Pero al tratarse el caso de determinadas provincias, como Salta y Corrientes, se hizo la observación, que ya conoce la Cámara, de que estas dos provincias resultarían perjudicadas por el hecho de no haber atinado oportunamente a establecer impuestos a la producción, similares a los que rigen en las provincias de Tucumán, San Juan, Mendoza y Jujuy. Realmente era una situación digna de contemplarse, y, de contemplarse, debió hacérselo con un criterio amplio y general. Lamento decir que en el caso particular de la provincia de Salta, la mayoría de la Comisión de Presupuesto, contra mi voto desde luego, adoptó un criterio totalmente arbitrario. La suma básica que correspondería a dicha provincia de acuerdo a datos oficiales, fué aumentada notoriamente por la mayoría de la comisión y creo que el presidente de la misma ha anunciado que dicha suma nuevamente deberá ser aumentada.

Repito que si se hubiera adoptado un temperamento general de justicia, de equidad para todas las provincias que están en igualdad de condiciones, yo no hubiera trepidado en contemplar dicha situación y tratar en lo posible de llegar a una situación equitativa, ló-

gica y justiciera; pero soluciones así, arbitrarias y caprichosas, no contarán con mi voto.

Uno de los peligros que se han señalado contra este despacho de la Comisión de Presupuesto es el de la posibilidad de que sea un instrumento que facilite la centralización excesiva en este país federal, que marcha a pasos precipitados a un verdadero sistema unitario. Se me ha informado que un senador de la Nación llegó a decir, exagerando un poco las cosas, que los diputados de provincia que votáramos este despacho incurriríamos en un delito de lesa patria chica, de leso localismo, porque entregaríamos maniatadas las provincias a la acción preponderante de un ministro de Hacienda de la Nación o de un presidente de la República.

Declaro, señor presidente, que no he sido el único diputado que en la comisión se ha preocupado intensamente de este aspecto del problema. Realmente reviste suma trascendencia y de ahí la forma minuciosa en que la comisión se preocupó de encararlo para traer a la Cámara la mejor solución posible.

El señor ministro de Hacienda llevó al seno de la comisión, en una de sus últimas reuniones, la iniciativa de constituir un consejo federal en el que tuvieran representación las provincias, consejo federal que ejercería una especie de control moral sobre el Banco de la Nación en todo lo relativo al cumplimiento de la ley de unificación de impuestos. La llevó, pero sin mayor entusiasmo. El propio ministro reconoció que ese consejo federal carecería de atribuciones ejecutivas y que prácticamente resultaba así un agregado innecesario. La comisión, con ese criterio, resolvió no incorporar ese consejo al mecanismo de esta ley.

Y realmente resulta inobjetable ese criterio: la forma en que la comisión ha organizado la percepción y distribución de los impuestos que se unifican, no puede ser más previsora ni defender más celosamente los intereses de las provincias. El Banco de la Nación exclusivamente percibe los im-

puestos, los liquida y los entrega a las respectivas provincias, de tal manera que ningún funcionario administrativo de la Nación tendrá injerencia en esos dos actos que son esenciales en materia de impuestos: el cobro y la distribución de los mismos.

Así las cosas, el consejo federal carecería en absoluto de funciones prácticas y apenas ejercería, repito, una especie de control moral, francamente, sin mayor trascendencia. Tanto es ese el criterio de la comisión, que no se ha preoocupado, como notarán los señores diputados, de prever la acción civil que las provincias podrían tener para reclamar la entrega de la parte que les corresponda en los impuestos internos, y se ha limitado a establecer en el despacho que cualquiera omisión o incumplimiento de las disposiciones de la ley por parte de los funcionarios y de las autoridades del Banco de la Nación, constituirá *de jure*, puede decirse, un delito, y establece a renglón seguido las penas correspondientes y da facultad a las provincias para iniciar y proseguir las querellas criminales respectivas.

Se habla de las acciones criminales y civiles, pero al referirse a la acción civil se alude exclusivamente a la responsabilidad civil que emerge de todo delito.

Otro problema que me ha preocupado es el de la situación en que quedarán las provincias una vez que esta ley de contrato llegue a sancionarse. Si bien es cierto que las provincias resultan beneficiadas por la participación que tendrán en lo sucesivo sobre el monto de lo que se perciba por impuestos internos, quedan también paralelamente sujetas a una serie de restricciones y limitaciones en sus derechos de Estados federales, que plantean interrogantes de evidente seriedad. No es posible que las provincias por acogerse a los beneficios de esta ley lleguen sin darse cuenta, puede decirse, a quedar prácticamente maniatadas y en condiciones de no poder en lo sucesivo dictar las leyes de carácter fiscal imprescindibles para su desenvolvimiento

económico y para su labor administrativa.

Yo he defendido este punto de vista y lo voy a defender al discutirse en particular: que la ley debe resolver exclusivamente los problemas de momento, el verdadero estado de guerra interprovincial y de superposición impositiva que ofrece hoy el país. Hay que dar a ese problema las soluciones inmediatas que las circunstancias aconsejan.

Otros colegas de comisión — y creo que en eso los ha acompañado en gran medida el señor ministro de Hacienda —, han creído necesario no solamente buscar solución a los problemas actuales, sino prever la posibilidad de que los hechos de hoy se reproduzcan mañana con distintos aspectos, vale decir, con el nacimiento de otros impuestos. De ahí la serie de medidas de previsión que aparecen en el despacho de la comisión y que coartan notoriamente el derecho fiscal, impositivo de las provincias. Razón para que los diputados de provincia estudien serenamente el alcance de las disposiciones del proyecto, y para que la comisión deba dejar claramente establecido el alcance del texto de los artículos para evitar interpretaciones caprichosas que originarían conflictos a granel.

A mi modo de ver, las provincias conservan, en materia de derechos fiscales, todos los derechos que no enajenen o renuncien expresamente en virtud de la ley contrato. Al tratarse en la comisión el derecho de las provincias para imponer patentes, se llevó un anteproyecto que preveía exclusivamente el caso de las provincias consumidoras, pero el artículo relativo a las provincias productoras les desconocía el derecho de establecer patentes, específicas o no, a los comercios ni a las empresas que produjeran los artículos que son materia de los impuestos internos; observé que la situación resultaba intolerable e injusta, y el señor ministro, encontrando lógica la observación, la recogió de inmediato y cumplió al día siguiente la promesa hecha a la comisión, presentando

un nuevo texto del artículo pertinente, que figura ahora en el despacho y que no consagra esa prohibición. Traigo a colación el antecedente para dar base al punto de vista que sostengo, de que las provincias conservan incólume su derecho de Estados federales para dictar en materia impositiva todas las medidas que sean necesarias, salvo pura y exclusivamente aquellas que en forma expresa y terminante renuncien a ejercer por esta ley contrato. Este punto de vista tiene notoria trascendencia a los efectos de dejar establecido el alcance de esta ley, y repito que al estudiarse en particular, especialmente el artículo 19, inciso c), que firmo en disidencia, volveré sobre este asunto para demostrar los peligros de esta serie de limitaciones excesivas al derecho de las provincias.

Observé asimismo en la comisión, la necesidad de que la ley estableciera en forma expresa y categórica cuáles son los impuestos internos que se unifican. La mayoría de la comisión no creyó necesario hacer la enumeración taxativa, lo que creo es un error. El artículo 18 habla de «los impuestos internos que por esta ley se unifican», y releendo el texto del despacho en ninguna parte se encuentra la expresión cabal de cuáles son los impuestos internos motivo de la unificación. Esta es una laguna que la comisión debe apresurarse a salvar.

No tengo otras observaciones de importancia, y expreso que vamos a votar complacidos esta ley, con las excepciones anotadas, porque entendemos que con ella se resuelve uno de los problemas de mayor trascendencia en el actual momento económico y político del país.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*).

**Sr. Godoy.** — Pido la palabra.

Anticipo, señor presidente, que voy a ser breve, no sólo por la hora en que me toca hacer uso de la palabra, sino porque el debate en general está virtualmente agotado. Pero necesito referirme a dos o tres puntos, porque juzgo conveniente, dada la trascendencia del asunto, que se deslinde perfecta-

mente el alcance de las disposiciones del proyecto y el espíritu que ha presidido su redacción.

Un diputado del sector socialista preguntaba con cierto asombro si ésta es una ley contrato. Esta no es sólo una ley contrato, sino que no podría dictarse con otro concepto. ¿Por qué? Porque se trata de solucionar un problema candente para el porvenir de la República, en la única forma en que lo autoriza nuestra Constitución. Realizada la unidad política, tendemos con esta ley a afianzar en el hecho la unidad económica y por ello — lo que no es una novedad porque está contenido en la mayoría de los proyectos presentados — ha sido menester recurrir al arbitrio de una ley contrato. Las provincias renuncian a derechos que les reconoce indiscutiblemente la Constitución, para ponerse así al servicio de un concepto superior. Ya en los debates memorables de los años 1891 y 1894, cuando se discutió la creación de los impuestos internos, se estudió a fondo cada una de las cláusulas constitucionales que acuerdan a la Nación y a las provincias el derecho de imponer contribuciones directas o indirectas. Desde dos puntos de vista diametralmente opuestos se sostuvieron brillantemente tesis que por fin han venido a ser hermanadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declarando que la facultad de imponer esa suerte de gravámenes, es concurrente, tanto para la Nación como para las provincias. Resulta, así, que el problema que en su hora apasionó a los espíritus y que dió lugar a debates brillantes, como aquel en que la tesis netamente provincialista fué sostenida por el entonces diputado Mantilla con un calor y con un brío que fluye de sus palabras, aun cuando se las lea después de treinta años, fué replicada con una exposición no menos substancial, aunque quizá menos brillante, por el entonces ministro de Hacienda, doctor Terry. Allí se analizó el origen histórico de las disposiciones constitucionales, especialmente los artículos 4º y 67, inciso 2º, que confieren las atribuciones impositivas a que me estaba refiriendo. Y aunque

triunfó la tesis del ministro Terry se cumplió en el hecho la predicción que entonces hiciera Mantilla. Sus palabras sirvieron para que a través del tiempo perdurara o por lo menos no se extinguiera, el verdadero espíritu que animó su actuación en el debate, cual era el de defender lo inherente a la facultad que deben tener todos los Estados autónomos para poder existir, es decir, a la facultad de poder hacerse de los recursos indispensables para atender los servicios públicos.

Pero una vez que la Suprema Corte de la Nación ha resuelto el problema con fallos reiterados, en que ha establecido que para que pueda resultar incompatible el ejercicio de los dos poderes, el nacional y el provincial, no es bastante que el uno sea el de crear y proteger y el otro el de imponer o destruir, según sus propias palabras, de acuerdo a la terminología jurídica de los tratadistas norteamericanos, sino que es menester que haya «repugnancia efectiva» entre esas facultades al ejercitarse, en cuyo caso siempre que la atribución se haya ejercido por la autoridad nacional dentro de la Constitución, prevalecerá el concepto federal. Mientras el impuesto local — agrega el fallo que sienta la doctrina central — no afecte por su cuantía u otras causas a la protección aduanera y, viceversa, siempre que ésta no implique por cualquier motivo la anulación de aquél, nada obsta a la convivencia legal y material de los principios rigiendo sus respectivos campos de acción sin roce ni conflictos irreparables, que no los hay posibles dentro de la Constitución, como quiera que no se han instituido por ella, poderes discrepantes, sino, al contrario, entidades legales armonizadas en la afinidad suprema de la organización social y del bien público, principio y fin de las instituciones políticas que nos rigen. Elocuentes palabras que no sólo sientan admirablemente la doctrina jurídica que ha venido a armonizar tesis, al parecer totalmente contrapuestas, sino que han permitido después otra hermenéutica para casos concretos en que se encontraban en pleito facultades im-

positivas de una provincia con respecto a otra y que un fallo reciente ha venido a aclarar también, estableciendo que las facultades impositivas de las provincias están delimitadas por el artículo 10 de la Constitución, es decir, que esas facultades provinciales de poder crear gravámenes como fuentes de sus recursos naturales cesa o debe detenerse, cuando puede ser una traba efectiva para el libre comercio de los productos de una provincia al entrar en otra. Si es exacto, entonces, que las provincias han poseído y poseen la facultad constitucional de crear gravámenes como los impuestos internos al consumo, a la manera de recursos naturales, con qué nutrir su tesoro para atender las necesidades públicas, no puede decirse que hayan estado cometiendo abusos cuando han ejercitado, dentro de la órbita constitucional, esa facultad que les es inherente y que proviene de la reserva expresa, que ellas mismas hicieron cuando firmaron la Carta de 1853.

No es entonces aceptable la imputación que se quiere hacer a las provincias que han recurrido en especial, al impuesto sobre su producción, como fuente de recursos para su tesoro. Han ejercitado una facultad legítima y no se les puede exigir que cesen en el ejercicio de esa facultad, sino por un renunciamiento voluntario.

El ambiente público de esas provincias, que hemos traducido en el seno de la comisión y que estamos reflejando en este recinto los representantes de las provincias que han hecho uso preponderante de esas fuentes de recursos, dice que están dispuestas a renunciar a esas facultades porque comprenden que el interés de la Nación está por encima del de las provincias y que hermanando el interés de éstas con el interés del todo, se realiza la obra de engrandecimiento, que fué la inspiración que presidió la labor constitucional de 1853.

Convertido en ley este proyecto, será una ley contrato entre la Nación y las provincias. Lógico es, entonces, que se especifiquen las obligaciones y los derechos que las partes contratantes ad-

quieran por este instrumento legal que se crea. Es exactísima la afirmación del señor ministro de Hacienda cuando decía que era ajeno a la economía de la ley, el derecho que se pretende alegar en favor de la Municipalidad de la Capital. La Capital no es parte en esta ley, no renuncia a ninguna facultad, mal puede extraer, entonces, beneficio directo de un contrato que para ella es, en cierto modo, *res inter alios acta*.

De paso, deseo aclarar una observación que hizo el señor diputado Dickmann hace poco, cuando se refirió a la actitud del señor diputado por Buenos Aires, doctor Groppo, que había defendido los derechos de las municipalidades. El señor diputado Groppo y otros miembros de la comisión, entre los que me cuento, hemos defendido los derechos de los municipios de las provincias afectadas por esta ley contrato, pero con este concepto esencial: que los municipios provinciales son parte integrante de la entidad que viene a contratar con la Nación. La Capital no es parte integrante de esta ley contrato.

Lógico es, entonces, que tratáramos de resguardar los derechos de los municipios, a la vez que les imponemos obligaciones por el articulado de la ley; hay renunciaciones que deben poner en práctica esos municipios.

Alguien ha hecho la objeción de que no es concebible este acto por el cual aparecen contratando las provincias con la Nación. Sin embargo, nuestro derecho público nos ofrece múltiples casos de leyes que son verdaderas leyes contratos. Nuestra tradición histórica proviene de tratados entre las provincias, y expresas prescripciones de nuestra Carta Fundamental autorizan esta suerte de leyes. Así, el artículo 107 se refiere a la facultad que poseen las provincias para celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, de intereses económicos, y trabajos de utilidad común con conocimiento del Congreso federal. También pueden celebrar pactos que tiendan a promover su industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras, etcétera.

De manera que nuestra Constitución autoriza en forma indubitable esta clase de pactos.

Por otra parte, el artículo 13 se refiere a la celebración de pactos de índole más delicada que la del que estamos tratando. Ese artículo establece que no podrá erigirse una provincia en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una sola sin el consentimiento de las Legislaturas de las provincias interesadas y del Congreso.

Y si la Constitución autoriza expresamente que dos provincias puedan renunciar a su soberanía para reunirse en una sola, ¿cómo no van a poder celebrar esta suerte de leyes-contratos que tienden a satisfacer intereses económicos de ellas o intereses económicos de las provincias y de la Nación?

He tocado así, aunque no tan ampliamente como el tema lo merece, un aspecto esencial, porque es el aspecto constitucional. Y me preocupa esta fase del asunto porque en las funciones de legislador entiendo que lo primero que debemos observar cada vez que intentamos sancionar una ley, es si ella estará o no encuadrada dentro de los cánones constitucionales.

No es este mismo concepto el que parecen observar los señores diputados del sector socialista, cuando en múltiples ocasiones los hemos visto preocuparse de la fase material, o la financiera, económica o política, pero relegando siempre a segundo término el aspecto constitucional con la excusa de que ellos no tienen un concepto excesivamente legalista. Y así en las objeciones que se le han hecho a este proyecto de parte de ese sector, no ha habido una sola que se refiera al aspecto legal o constitucional.

Para cumplir con mi promesa de brevedad, voy a referirme a continuación muy rápidamente a un punto que debo recoger de la exposición del señor diputado Ghioldi, porque concierne especialmente a la provincia que represento. Entre las varias observaciones que en el curso de su exposición formuló al proyecto, relacionadas con la provincia de Mendoza, expresó algo que significa una imputación y que dijo con el tono

suficientemente expresivo para que no pudiera traducirse sino como tal, es decir, como una imputación de carácter grave. Dijo que la provincia de Mendoza realiza dumping.

No hay tal cosa. La ley provincial 1.068, de reciente creación, pues no tiene más de un año de vigor, a la que indudablemente ha querido referirse el señor diputado, ha tenido en vista contemplar la posibilidad de intensificar el consumo del producto mendocino en las diferentes plazas que pueden absorberlo dentro y fuera del país. Para ello ha creado primas a su mayor colocación en el interior de la República y a la exportación al extranjero y a los vinos superiores embotellados; esas primas no importan ni pueden importar el dumping. El dumping consiste en tratar de colocar el producto vendiéndolo a menor precio del de costo para hacer imposible la colocación en forma normal del producto rival, mientras que estas primas sólo tienden a compensar en parte los gastos de flete para que puedan ir los productos a las plazas a las que difícilmente pueden llegar por la distancia y por el recargo que importa en el precio de venta el flete ferroviario.

No quiero extenderme más en esta explicación para no ocupar por mayor tiempo la atención de la Honorable Cámara; pero antes de terminar voy a recoger otras dos observaciones contenidas en la exposición del señor diputado Ghioldi.

Dijo el señor diputado, al referirse a este proyecto, que ese dumping se realizaba con la concurrencia del ferrocarril. Tal afirmación es completamente inexacta porque, por desgracia, subsiste todavía para Mendoza una situación totalmente opuesta. El Ferrocarril Pacífico mantiene una tarifa diferencial que llama parabólica, por medio de la cual el vino de San Juan a Retiro paga menos flete que el vino de Mendoza a Retiro; de manera que el dumping para Mendoza sería precisamente contra ella y no a su favor. El vino de Mendoza paga por flete hasta Retiro 49 pesos, y el de San Juan 42 pesos, siendo, como es notorio, la distancia de San Juan a Retiro mayor en 180 kilómetros.

Dijo también el señor diputado Ghioldi que este proyecto de ley había sido impulsado por intereses espurios y yo para contestar a esto voy a valerme, para ser más breve, de las palabras con que el senador Sánchez Sorondo fundaba, con su elocuencia habitual, el proyecto que presentó en el Senado sobre esta misma materia. «Los que hemos creído ver con alguna claridad la magnitud y la posición de los nuevos fenómenos económicos, los que apreciamos este momento excepcional en la vida de relación de los pueblos y trascendental para el futuro de nuestro país; los que sentimos la emoción de estas horas; los que oímos el grito que clama acción desde la entraña de nuestra tierra, estamos obligados a ponernos a la tarea, por dura y por pesada que ella sea. Así, y sólo así, justificaremos nuestra presencia en las Cámaras legislativas, porque, ante los ataques que se llevan a nuestra cultura institucional, nosotros no podemos responder sino de una manera: trabajando por el bien del país.»

Los que hemos impulsado este proyecto de ley desde el remoto origen de esa cláusula de la ley de presupuesto sancionada el año pasado; los que bregamos por que esa cláusula fuera incluida en la ley de presupuesto; los que después hemos instado al ministro de Hacienda para que le diera forma al proyecto; los que hemos colaborado con él antes de que el mensaje llegara a esta Cámara y los que después hemos colaborado tanto en la subcomisión especial como en la Comisión de Presupuesto, hemos entendido que en este asunto tal vez más que en ningún otro de los que hemos tenido a nuestra consideración durante estos últimos tres años, era menester poner al servicio del país nuestra mayor capacidad y nuestra mayor energía y dedicación.

Con ese concepto hemos impulsado esta ley. No ha habido, por suerte, intereses espurios que hayan propulsado su confección ni que se hayan infiltrado subrepticamente.

Por último, debo decir que es totalmente injusta la afirmación de que las

provincias llamadas productoras o que han gravado su producción, hayan estado esquilmando a la población de la República. Esas provincias han ejercitado, como ya lo demostré, un derecho legítimo, incuestionable y constitucional; han levantado recursos para atender a sus necesidades de subsistencia y para labrar su engrandecimiento y con esto el de la Nación, cumpliendo, de esta suerte, fielmente, el mandato básico de los constituyentes: proteger las industrias, amparar el trabajo y promover el bienestar general. Esas mismas provincias, a la par de todas las demás, estuvieron dispuestas a salvar a la Nación en los momentos angustiosos de principios del año 1932 y sus representantes en este Congreso votaron, con plena conciencia de la obra que realizaban, todas las medidas de carácter financiero, todas las leyes de carácter impositivo que permitieron al erario nacional salir de su angustiosa situación y a la República desarraigarse poco a poco del pantano en que parecía iba a sumergirse.

No se concibe tanta falta de equidad para juzgar actitudes; y, en cambio, puedo decir con orgullo que no es Mendoza la provincia que en el pasado, en el presente o en el futuro, vaya a afirmar que la Nación trató de esquilmarla, o que la esquilmo, cuando San Martín fué a formar allá, en aquel humilde rincón serrano, el ejército que transpuso los Andes y dió la libertad a medio continente, sacando de ese pueblo reducido, minúsculo, de escasísimos recursos, todos los elementos indispensables, en material, en hombres y en patriotismo, para llevar a cabo su genial ensueño libertador. (*¡Muy bien!*).

**Sr. Pena.** — Pido la palabra.

Advierto, por mi propia fatiga, la fatiga de los colegas. Pero me veo obligado, a esta hora de la madrugada, a considerar un asunto de tanta complejidad, que exige un estado intelectual lúcido, que se lo tiene a la mañana después de dormir, pero que es difícil conservarlo después de largas exposiciones que nos han impuesto una atención constante de muchas horas. De acuerdo

con lo resuelto por la mayoría, debo hacermelo cargo de la situación imponiéndome el sacrificio, e imponiéndolo a los señores diputados, de seguir adelante con esta obra, a pesar de la hora avanzada.

Desde nuestro punto de vista la Cámara debería estar considerando el presupuesto de gastos. Eso es lo previo y lo que corresponde en todo proceso ordenado en esta materia. Pero la mayoría ha resuelto también empezar por donde le ha parecido mejor, dejando de lado el principio universalmente reconocido de que debe empezarse el estudio de las leyes financieras de un país por la ley de gastos.

El asunto que consideramos tiene aspectos complejos, pero no es para tanto como resulta de la exposición del señor ministro de Hacienda. Es una hipertrofia de la cuestión la que ha presentado el ministro de Hacienda, con el propósito de exaltar su propia personalidad. Hay muchos cuadros, muchos números, pero no es una tarea tan extraordinaria ni una cuestión tan sin antecedentes. Es una cosa relativamente sencilla en su concepción y fácilmente aplicable en su desarrollo y que en buena parte se debe a la obra de funcionarios que la han preparado y elaborado, funcionarios a los cuales conocemos en la comisión por su competencia en la materia son los que han hecho la obra, y el ministro aparece ahora jactándose como si él fuera el que ha inventado el asunto del principio hasta el fin. No estamos, a esta hora de la madrugada, tan dormidos como para olvidar lo que ha pasado en el seno de la comisión. (*Risas*). Es demasiado: no se puede admitir todo esto.

Se nos ha hecho el cargo de que nosotros no podemos nunca tener un elogio para la obra magna de este ministro de Hacienda, y nos ha dicho de que a pesar de que él es muy pródigo en elogios, no ha encontrado nunca elogios para su obra. Desde nuestro punto de vista — ya lo dije esta tarde — es difícil un elogio a la obra del señor ministro, porque si nosotros decimos ahora lo que el ministro decía como diputado, cuando

estaba con nosotros, se enoja. En verdad es para nosotros difícil el elogio porque nos encontramos, frente al ministro de Hacienda, frente a un desertor sin amnistía.

Este proyecto, repito, no es una cosa del otro mundo. No ha sido elaborado sobre un estudio que haya hecho perder el sueño al ministro de Hacienda.

Basta saber que esto empezó de una manera y ha terminado de otra. Si era un plan tan ajustado y matemático, no habría podido salir de la comisión sino de acuerdo con la seguridad dada por el ministro de que el plan era perfecto; pero ha sido modificado en su financiación.

No sé si los señores diputados se han dado el trabajo de saber que el desarrollo del plan en los años de su vigor, importa nada menos que 1.815.118.000 pesos... es tan grande la suma que la ponen en miles, despreciando los centenares como unidades de menor importancia.

Se habla mucho de los impuestos al consumo y se presenta este plan como una obra fantástica. En realidad se trata tan sólo de los impuestos a los malos consumos, a los alcoholes, vinos, cervezas, naipes, tabacos, cigarrillos. A nosotros nos interesa principalmente la parte en que este plan incide por primera vez, con carácter nacional, sobre el azúcar; en lo demás nuestro entusiasmo no es delirante, no creemos que sea cosa del otro mundo en cuanto se trata de gravámenes a los malos consumos, a las cosas superfluas como las alhajas y las pieles y a los objetos de vicio.

No crea el país que mañana costarán menos la carne o el pan, ni que habrá restaurantes económicos con tarifas 50 por ciento más bajas de las que rigen hoy; no va a pasar nada de eso: hay que desvanecer esa ilusión.

Me he tomado el trabajo de hacer una planilla, tabulando los datos que hay en el desarrollo de este proceso a través de su financiación, tomándolos por provincias y por años en su total. Desde luego, encontramos que las matemáticas han cambiado, como digo. No tenía a mano los elementos para establecer el



desarrollo total de la financiación del plan del Poder Ejecutivo; pero es seguro que con las modificaciones introducidas, que importan 37.000.000 más en los primeros 5 años, la diferencia al final de los 20 años entre el despacho de la comisión y el proyecto del Poder Ejecutivo, debe llegar a una cifra considerable. ¡Pero el proyecto del señor ministro estaba tan admirablemente calculado que puede seguir adelante sin inconvenientes!

Por este proyecto las provincias van a recibir en total estas sumas: Buenos Aires, pesos 470.569.000; Santa Fe, 219.440.000; Córdoba, 179.477.000; Entre Ríos, 96.502.000; Tucumán, 176.712.000 — debe ser muy poco, señor diputado Padrós —; Salta, 39.773.000; Santiago del Estero, 55.170.000; Mendoza, 293.259.000. San Martín ha sido invocado recién para establecer el carácter de la contribución a favor del gobierno de Mendoza —; Jujuy, 42.131.000; Corrientes, 63.891.000; San Luis, 25.070.000; San Juan, 130.776.000; La Rioja, 16.183.000; Catamarca, 20.131.000. Las sumas que corresponden año por año, son para 1935, de 72.800.000; para 1936, de 74.900.000; para 1937, de 77.000.000; y así para 1940, son 82.000.000; para 1945, son 91.000.000; para 1950, son 100.000.000 y así sucesivamente. Pero ya el señor diputado Simón Padrós dió las cifras relativas para no impresionar a la Cámara con cifras absolutas, porque él quería probar que Tucumán tenía una ventaja de 0,5 % de aumento con relación a algunas provincias que tienen una ventaja de 12 %. Pero las cifras absolutas tienen alguna importancia. Por ejemplo: Catamarca empieza a cobrar 184.000 pesos y va a terminar recibiendo 1.562.000; Corrientes empezará por recibir 687.000 pesos en 1935 y terminará recibiendo 5.401.000 en el año 1954.

Yo pregunto si hay alguna razón para que estas cosas tengan una duración tan larga y si la situación será tan irremediable, tan inconvencional, que fuera necesario buscar dinero en el extranjero para llevar adelante un plan cuyos resultados pudieran no ser los previstos. ¿Quiénes

son los que intervienen en este asunto? La Nación y las provincias. ¿Y qué es la Nación? La reunión de las provincias. ¿Y cómo hay tanto desacuerdo entre estos dos elementos? Si la Nación es la síntesis de las provincias, ¿a qué vienen tantas dificultades, tanto contrato, tanto tratado, tantas cosas raras, como si estuviéramos en una reunión de diplomáticos que representan a países distintos? Evidentemente, hay en esto un poco de fantasía.

Estoy de acuerdo en la unificación, pero para ello no es necesario hacer un contrato como si se tratara de partes que se recelan y que dudan de la buena fe con que actúan. Esto parece tan de sentido común que está de más cualquier argumentación de carácter constitucional para oponer reparos a esta sanción por vía de ensayo. La unificación es muy buena en doctrina. ¿Cómo no lo vamos a comprender? Habría que unificar miles de cosas en el orden nacional, sobre todo la legislación del trabajo, de que tan celosas se muestran las provincias para imponer condiciones en provecho de los capitalistas locales. Cuando se trata de llevar más allá de la jurisdicción de la Capital Federal y de los territorios, una ley benefactora del trabajo humano, inmediatamente se levanta la Constitución como si fuera una valla infranqueable para cualquiera tentativa de bien público.

Entendemos todas las ventajas de la unificación y ya el señor diputado Ghioldi ha expresado nuestro punto de vista con toda elocuencia. No es un problema de ahora, y la pretendida solución no ha salido de la cabeza del señor ministro de Hacienda. Es una cosa vieja.

Se trataba de mandar hacer cuadros por los empleados y, en definitiva, se consultaba más que todo las simpatías del que hacía las tablas.

El ministro se ha encargado de decirnos hoy que las provincias han obtenido sus exigencias más ambiciosas. Pero lo malo de esta unificación está en que ella da un estado de obligación pública a ciertas situaciones de hecho que hacen que la unificación en buena

parte aparezca, más que como se lo pretende — tratados y convenios entre la Nación y las provincias — como la organización de cierto tipo de legislación con vistas a resolver intereses particulares de gremios determinados.

Se trata de resolver un viejo problema que afecta principalmente a tres provincias, Mendoza, San Juan y Tucumán, que tienen industrias que han aprovechado del sacrificio de la Nación que se ha impuesto la carestía de los productos que ellas elaboran, para desarrollar un sistema hipertrofiado de finanzas locales, utilizando la diferencia marginal entre el derecho de aduana y todo cuanto ellas podían sacar sin peligro de que entrara el producto extranjero. De manera que, haciendo traición a la Nación que se imponía el sacrificio de consumir caros los artículos, ellas, en lugar de bajar el precio de los productos para desarrollar el consumo, se encargaban de encarecer el precio y aprovechar en lo posible el margen del derecho de aduana.

Pero llegó un momento en que se hizo imposible seguir adelante, porque el mal ejemplo es lo que más cunde, y entonces, lo de Mendoza, Tucumán y San Juan ha generado, por otra parte, un proceso de represalias y el desarrollo de una lucha económica entre las provincias argentinas. La ley viene a poner orden; pero, ¿para qué la ley va a poner un orden? ¿Para resolver el problema en favor del consumidor? ¿Mañana será más barato el azúcar, señor diputado Simón Padrós? ¡No! Va a ser más caro, si no se aclara la ley. Esta ley no persigue, entonces, el favorecer los consumos ni la baja de los precios de los productos necesarios para la vida del pueblo. Al contrario.

El señor ministro de Hacienda ha dicho muchas palabras, pero luego resulta que los actos de gobierno no han respondido a esas palabras, no porque él no quisiera hacer; yo admito que, en buena parte, el ministro desearía hacer muchas cosas, pero él no está para hacer lo que quiere, sino lo que los intereses que allí lo tienen desean que haga.

**Sr. Corominas Segura.** — No es posible referirse a un ministro de Esta-

do en estos términos. El señor diputado puede hacerlo en forma más respetuosa. No son intereses que puedan mencionarse de un modo tan deleznable los que tienen a un alto funcionario desempeñando las tareas que todo el país ve con aplauso.

**Sr. Pena.** — Tan alto como el señor ministro es el señor diputado. No se achique.

**Sr. Corominas Segura.** — No estoy en juego yo, sino los términos parlamentarios en que se debe hablar de un ministro.

**Sr. Presidente** (Noble R. J.). — Formulada la cuestión, la Presidencia entiende y espera que el señor diputado ha de tomar en cuenta la observación.

**Sr. Corominas Segura.** — No deben quedar en el Diario de Sesiones esas expresiones.

**Sr. Pena.** — ¿Qué presidente habla?

**Sr. Corominas Segura.** — Ahora estoy hablando yo.

**Sr. Pena.** — ¡Hable!

**Sr. Presidente** (Noble R. J.). — Continúa el señor diputado por la Capital.

**Sr. Pena.** — Está hablando el presidente del bloque demócrata nacional.

**Sr. Corominas Segura.** — Pido que se testen del Diario de Sesiones esas palabras.

**Sr. Presidente** (Noble R. J.). — La Presidencia revisará la versión y tomará las medidas pertinentes.

**Sr. Noble (J. A.).** — Se ha interpretado mal. El señor diputado se ha referido a intereses que el señor ministro contempla desde el ministerio.

**Sr. Presidente** (Noble R. J.). — Continúa con la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Pena.** — No quiero que se haga respecto de mis palabras ninguna interpretación con fines de deformación. He dicho una cosa muy clara. Conozco las ideas del ministro de Hacienda. Admito su buena voluntad de querer hacer algunas cosas mejor de lo que resultan, pero admito y admitirá el señor diputado que el ministro de Hacienda está sometido a la gravitación de intereses contrarios a sus ideas, y que pueden más que sus ideas. Si eso les parece que no es parlamentario...

**Sr. Briuolo.** — Perfectamente parlamentario.

**Sr. Godoy.** — Ya está el fallo del tribunal supremo.

**Sr. Briuolo.** — ¿Cómo no voy a fallar? ¿Acaso sólo el señor diputado tiene la lucidez necesaria para fallar? ¿Necesitamos de usted para que nos interprete? ¿Cree que usted sólo puede hacerlo?

**Sr. Godoy.** — El señor diputado parece que tuviera la exclusividad...

**Sr. Briuolo.** — ¡Haga el favor!

—Suenan la campana de orden.

**Sr. Godoy.** — La ridiculez del gesto está en consonancia con la del fallo.

**Sr. Presidente (Noble R. J.).** — No interrumpa el señor diputado.

**Sr. Pena.** — En este proyecto aparecen en danza fantástica millones de pesos y la gente que tiene la idea de sacarse el millón, cuando ve una cifra de seis ceros, aunque no se saque el millón, tiene una impresión tan fuerte que cuando se habla de muchos millones supone que los que los manejan son personas dotadas de ingenio e inteligencia superior, extraordinaria. Pero los mismos ceros se ponen a la izquierda y reducen totalmente el valor de las personas y de esas inteligencias.

Se habla de muchos millones, pero lo que no hay aquí son propósitos tan altos, tan nobles, tan elevados, como los que se ha pretendido lanzar en la discusión, apelando de manera reiterada a invocaciones patrióticas como si estuviéramos aquí reunidos representantes no de una nación solidaria y de provincias que hacen un pacto entre ellas, sino con un ente extraño. La Nación está aquí como enemigo de todos estos pobres hombres que son los diputados de las provincias y tienen un miedo bárbaro a la Nación, que son ellos.

Es algo fantástico. Parecería que algún día la Nación fuera a trasladarse más allá de la costanera.

Es sencillamente algo que choca al sentimiento más elemental de solidaridad nacional estas actitudes y expresiones, respecto de cosas tan fundamentales.

Las provincias sin derecho, aunque se hace la cuestión de que son poderes concurrentes, han gravado al azúcar, como Tucumán, Salta y Jujuy, para enriquecer sus arcas fiscales a expensas del consumo nacional. Ahora se trata de consolidar la situación por diez años. Y esto con una característica un tanto rara. El proyecto tan perfecto del ministro, que ha sufrido tantas modificaciones, en un artículo final, decía...

—Suenan el timbre que indica que ha transcurrido el tiempo reglamentario.

**Sr. Presidente (Noble R. J.).** — Ha vencido el término reglamentario de media hora.

**Sr. Pena.** — Está equivocado. Conveniría que leyera el reglamento mientras sigo hablando.

**Sr. Presidente (Noble R. J.).** — El señor diputado no puede hablar en nombre de su sector, porque ya lo ha hecho el señor diputado Ghioldi.

**Sr. Pena.** — El señor diputado Ghioldi ha hablado en nombre de la Comisión de Presupuesto. Yo hablo en nombre del sector.

**Sr. Presidente (Noble R. J.).** — En la orden del día de la Comisión de Presupuesto no hay constancia de ningún despacho en disidencia de la representación socialista. La Secretaría leerá las palabras del señor diputado Ghioldi.

**Sr. Pena.** — ¿Puedo o no hablar?

**Sr. Presidente (Noble R. J.).** — Antes la Secretaría leerá las expresiones del señor diputado Ghioldi.

**Sr. Secretario (Zavalla Carbó).** — (*Leyendo*): «Sr. Ghioldi. — Tengo la tarea de informar los puntos de vista de la representación socialista en este despacho sobre unificación de impuestos internos.»

**Sr. Presidente (Noble R. J.).** — La Cámara decidirá por una votación si se le concede prórroga.

**Sr. Ghioldi.** — Que se levante la sesión.

**Sr. Pena.** — Es un abuso intolerable de la Presidencia que en este momento está resolviendo arbitrariamente.

te una cuestión que la Cámara ha resuelto con anterioridad.

**Sr. Presidente** (Noble R. J.). — No le permito al señor diputado por la Capital que le falte a la Presidencia el respeto debido. El señor diputado tiene recursos reglamentarios para promoverle las cuestiones que desee. La

Presidencia tiene la obligación de velar porque se cumpla el reglamento.

No habiendo número en el recinto ni en la casa para votar la moción formulada, queda levantada la sesión.

—Era la hora 1 y 10 minutos del día 30.

NOVIEMBRE 29 Y 30 DE 1934

62ª REUNION — 4ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDENCIA DE LOS DOCTORES ANTENOR R. FERREIRA y ROBERTO J. NOBLE

MINISTRO PRESENTE: de Hacienda, doctor Federico Pinedo; DIPUTADOS PRESENTES: Agüero Santos, Ahumada Luis Alberto, Alonso Alfredo J., Amadeo y Videla Daniel, Ameri Rogelio L., Amodeo Aurelio F., Andreis Fernando de, Aráoz Ernesto M., Arce José, Arnoldi Adolfo, Arrieta Herminio, Basualdo Honorio, Benegas Tiburcio, Bermúdez Manuel A., Besasso Manuel V., Biancofiore Rafael, Bogliolo Rómulo, Bonazzola Carlos F., Briuolo Miguel, Bruchou Eduardo, Buira Demetrio, Buitrago Pedro, Bunge Augusto, Bustillo José M., Buyán Marcelino, Cáceres Lorenzo, Cafferata Juan F., Candia Cornelio, Cárcano Miguel Angel, Carreras Ernesto L. de las, Castiñeiras Alejandro, Castro Felipe, Coca Joaquín, Contte José A., Cordero Octavio, Corominas Segura Rodolfo, Couriel Carlos D., Dávila Miguel V., Degano Alfredo P., Della Latta Jerónimo, De Miguel Benito, Dickmann Adolfo, Dickmann Enrique, Escalera Facundo, Escobar Adrián C., Fernández Damián, Ferreira Antenor R., Ganza Marcelino, Garela Gorostiza Raúl, Ghioldi Américo, Giménez Angel M., Godfrid Juan, Godoy Raúl, Gómez Rincón Abel, González Benjamín S., González Guerrico Manuel, González Masada Manuel, González Valentín, Graffigna Santiago, Grisolia Luis, Groppo Pedro, Guglielmoli Aquiles M., Iribarne Alberto, Iriondo Urbano de, Jarrel Enrique C., Korn Guillermo, Lamesa Juan B., López Héctor S., Mancini Rafael, Martínez José Heriberto, Mattos Luis María, Molina Serapio, Moret Carlos (h.), Morrough Bernard Juan P., Mouchet Enrique, Movsichoff Bernardo, Noble Julio A., Noble Roberto J., Oddone Jacinto, Padilla Tiburcio, Palacín Manuel, Palacín Pedro, Palacio Benjamín, Palmeiro José, Parodi Misael J., Pena José Luis, Pérez Leirós Francisco, Pfeleger José E., Pintos Angel, Pita Carlos A., Pressacco Juan P., Pueyrredon Carlos A., Quiroga Félix, Radfo Pedro, Ramiconi Luis, Ramírez Manuel (h.), Repetto Agustín, Repetto Nicolás, Rodríguez Alfredo, Rozas José E., Ruggieri Silvio L., Ruiz Oscar, Salas José Raquel, Salcedo Saturnino, Santillán Enrique, Sellarés Avellino, Simón Padrós Juan, Solari Felipe C., Solari Juan Antonio, Solís Rogelio J., Speroni Daniel O., Spinetto Alfredo L., Taboada Mora Cipriano, Uriburu Francisco, Vega Abraham de la, Viechi Adolfo A., Vidal Baigorri José, Videla Dorna Daniel, Videla Rodolfo G., Vionnet Rodolfo L., Wado Eugenio, Zerda Justiniano de la; AUSENTES, CON LICENCIA: Aguirrezabala Miguel A., Aráoz Eudoro D., Aráoz José Ignacio, Becerra Eugenio A. (h.), Bosano Ansaldo Daniel, Calderón Osvaldo M., Espil Alberto, Franco Manuel A., Garayalde José María, Herrera Bruno J., Iuda Rufino, Lima Vicente Solano, Magris Amleto, Marcó Cipriano F., Monesca Eduardo, Ocampo Enrique, Parera Gregorio, Rojas Marcos E., Saravia José M.; CON AVISO: Costa Méndez Nicenor, Pomponio Vicente B., Zarazaga Marcel J.; SIN AVISO: Acosta Guillermo, Carreras José, Carús Agustín J., Crito Miguel, Lencinas Rafael Néstor, Manacorda Carlos, Ruiz Guinazú Jacinto, Schoo Lastra Dionisio, Vallejo Luis A., Vignart Uberto F.

## SUMARIO

- 1.—Manifestaciones en minoría.
- 2.—Acta.
- 3.—Asuntos entrados:

I.—Comunicaciones oficiales.

II.—Peticiones particulares.

- 4.—Acuérdase licencia para faltar a sesiones a los señores diputados Inda, Aráoz (José L.) y Espil.
- 5.—Continúa la consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en los proyectos de ley sobre unificación de impuestos internos, prórroga y distribución del impuesto a los réditos y del impuesto a las ventas.

6.—Orden de la labor de la Honorable Cámara.

7.—Indicación del señor diputado Oddone para que se inserten en el Diario de Sesiones las bases referentes al sistema de votaciones mecánicas.

8.—Continúa la consideración del asunto a que se refiere el número 5.

9.—Se pasa a cuarto intermedio.

10.—Continúa la consideración del asunto a que se refiere el número 5.

—En Buenos Aires, a veintinueve de Noviembre de 1934, siendo la hora 17 y 28:

1

## MANIFESTACIONES EN MINORIA

**Sr. Martínez.** — ¿Cuántos diputados hay en la casa, señor presidente?

**Sr. Presidente (Ferreira).** — En la casa hay 89 señores diputados.

**Sr. Martínez.** — Hago indicación de que se siga llamando hasta obtener quórum.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente (Ferreira).** — Como hay asentimiento, así se hará.

—A la hora 17 y 50:

**Sr. Palacio.** — Pido la palabra.

Habiendo número en la casa y debiendo venir, por otra parte, los señores diputados que han asistido a la Convención Constituyente de la provincia de Buenos Aires, con el propósito de que no se malogre la sesión, propongo que se siga llamando hasta obtener quórum.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente (Ferreira).** — Como hay asentimiento, así se hará.

**Sr. Rodríguez.** — Tenía entendido, señor presidente, que habíamos pasado a cuarto intermedio.

**Sr. Presidente (Ferreira).** — No, señor diputado. La sesión de ayer se levantó, por falta de número.

—Se continúa llamando para formar quórum.

—A la hora 18 y 25:

2

## ACTA

**Sr. Presidente (Ferreira).** — Queda abierta la sesión con asistencia de 80 señores diputados.

Se va a dar lectura del acta de la sesión anterior.

—Por indicación del señor diputado Amadeo y Videla se suprime la lectura del acta y se da por aprobada.

—Ocupa su banca en el recinto, el señor ministro de Hacienda, doctor Federico Pinedo.

3

## ASUNTOS ENTRADOS

**Sr. Presidente (Ferreira).** — Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

I

## Comunicaciones oficiales

El intendente municipal de Sarmiento (San Juan), formula denuncias relacionadas con el funcionamiento del régimen municipal de la localidad. (*A la Comisión de Negocios Constitucionales*).

—La Municipalidad de Quitilipi (Chaco), solicita la sanción del proyecto de ley creando el tercer juzgado letrado en ese territorio. (*A la Comisión de Justicia*).

—El Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, invita a la Honorable Cámara al acto de clausura de la Convención Constituyente. (*Al archivo*).

II

## Peticiónes particulares

La Sociedad Cooperativa de Luz y Fuerza de San Martín (Buenos Aires), solicita la exención de los derechos de aduana a los materiales eléctricos que se introduzcan del extranjero con destino a esa cooperativa. (*A la Comisión de Presupuesto y Hacienda*).

—La Asociación de Propietarios de Bienes Raíces solicita el rechazo del proyecto de ley de unificación de impuestos a las herencias. (*A la Comisión de Presupuesto y Hacienda*).

—La Convención de la Unión Cívica Radical Lencinista de Mendoza, solicita la sanción del proyecto de ley de vinos del Poder Ejecutivo. (*A sus antecedentes*).

—Vecinos de los territorios de Río Negro y Neuquén, formulan observaciones al proyecto de ley de unificación de impuestos. (*A sus antecedentes*).

—La Sociedad Anónima de Petróleo «Diadema Argentina», formula observaciones al proyecto de ley de impuesto a las ventas. (*A sus antecedentes*).

#### SOLICITUD DE SUBSIDIO:

Asociación Colonia de Niños Débiles Escuela y Patronato.

—A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

#### 4

#### LICENCIAS

##### 1

Mar del Plata, 28 de Noviembre de 1934.

*Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados.*

Solicito permiso para faltar a las sesiones de la presente semana.

Salúdalo atentamente.

*Rufino Inda.*

—Sin observación, se vota y acuerda, con goce de dieta, la licencia solicitada.

##### 2

Villa Quinteros (Tucumán), 29 de Noviembre de 1934.

*Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.*

Obligaciones políticas me obligan a solicitar licencia para faltar hasta el 18 de Diciembre.

Salúdalo atentamente.

*José I. Aráoz.*

—Sin observación, se vota y acuerda, con goce de dieta, la licencia solicitada.

#### 3

Mercedes (Buenos Aires), 29 de Noviembre de 1934.

*Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados.*

Por razones de salud, solicito permiso para faltar a dos sesiones.

Salúdalo atentamente.

*Alberto Espil.*

—Sin observación, se vota y acuerda, con goce de dieta, la licencia solicitada.

#### 5

#### UNIFICACION DE IMPUESTOS INTERNOS

**Sr. Presidente (Ferreira).** — Continúa la consideración del despacho sobre unificación de impuestos internos.

**Sr. Simón Padrós.** — Pido la palabra.

Cuando en la sesión de ayer, después de la medulosa exposición del miembro informante, señor presidente de la comisión, doctor José Heriberto Martínez, hizo uso de la palabra el señor diputado Ghioldi en nombre de la representación socialista, brindé mi ánimo a prestarle la más absoluta atención. Sus antecedentes de hombre estudioso, nos permitía esperar un informe técnico, amplio, documental, de la unificación de impuestos internos; pero no puedo ocultar que, después del desarrollo de su tesis, quedó mi ánimo embargado con una profunda sorpresa y también con algo de pesar. Sorpresa, porque en realidad no hemos escuchado el análisis de la ley, y hemos sí, percibido el ataque pertinaz a la industria azucarera. Se ha desviado de lo fundamental; ha dejado el tronco para ir a las ramas. Sorprende que un espíritu sutil como el suyo, que ha presenciado la laboriosa gestión de la ley en la comisión, no haya captado el clima con que los representantes de

las provincias han colaborado con un esfuerzo sostenido, con lealtad absoluta, al despacho de la ley de unificación.

También con pesar, señor presidente, porque en realidad su ataque a la industria azucarera ha sido de nuevo un golpear en el corazón de vastas zonas norteñas, dedicadas con entusiasmo infinito al desarrollo de una magna acción, cual es la de hacer paz y patria en el Norte argentino.

Yo necesito, ya que se ha desviado el análisis de la ley de unificación hacia el ataque renovado a la industria azucarera, decir algunas palabras para que los señores diputados socialistas interpreten alguna vez el sentir que nos embarga cuando nos vemos tan injustamente atacados.

La grandeza del país es bien sabido que nació en la pampa. Esta incommensurable llanura que se extiende desde el Aconquija hasta las aguas del Plata, resultaba chica para el esfuerzo argentino. Y así como hubo hombres, bravos soldados que la engrandecieron en la conquista del desierto hacia el Sur, también fué útil la obra de hombres que con un esfuerzo tesonero lo engrandecieron hacia el Norte.

La pluma ágil del doctor Uriburu decía un día que en esa grande y alegre ciudad donde hay tantas estatuas sin pedestal, hay pedestales sin estatuas, refiriéndose como a una de ellas a la inolvidable figura del general Roca, el dominador del desierto. Hay hombres en esta Cámara que de jóvenes han de haber oído contar el esfuerzo tesonero y sostenido de aquella conquista, han de haber oído cómo en los fortines, límites, en cada amanecer, las agudas notas de un viejo clarín saludaban la aurora, mientras se alzaba al tope el lienzo azul y blanco, batiendo sus pliegues como alas deseosas de volar más allá del infinito desierto. Pero hay otros hombres que cuando seamos viejos podremos también contar a nuestros hijos lo que ha representado la conquista de la selva norteña, de incommensurable magnitud.

con viejos quebrachales, y grandes laureles, abatidos por el hacha del leñador, para que los cráteres que abría a la tierra el desgarramiento de sus viejas raíces brindaran el germinar de la esplendorosa semilla, cuando la caricia del arado lograba convertir la vieja selva en verde cañaveral. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*).

Este es el esfuerzo que la industria azucarera representa en el Norte argentino, esfuerzo que si no ha dado, como los del Sur, soldados al ejército ha dado argentinos a la patria. (*¡Muy bien!*).

Debo ahora decir que en el curso de los debates en la Comisión de Presupuesto y también en la información del señor diputado Ghioldi, se incurre sistemáticamente en la repetición de un concepto erróneo. Se quiere dividir a las provincias argentinas en productoras y consumidoras, olvidando que no hay tal. Hay una absoluta hermandad en las provincias argentinas. Todas son productoras: las unas de productos agrícolas ganaderos, las otras de productos industriales, y todas, y cada una de ellas, son consumidoras de los productos respectivos.

No podemos olvidar que viven de la industria azucarera, del esfuerzo norteño en forma directa o indirecta, no menos de 3.000.000 de habitantes y que esos 3.000.000 representan el consumo de 300.000 toneladas de carne y de cerca de 500.000 toneladas de trigo.

No es prudente ni hábil querer dividir en esta hora económica y fiscal en la que nace tan importante ley a la Nación, a las provincias, en consumidoras y productoras. Por consiguiente, pido que esta definición quede borrada del pensamiento de la ley.

Bastaría recordar y quiero hacerlo como un homenaje al que dietó hace 23 años la ley orgánica de amparo al azúcar, al doctor Saavedra Lamas, y como recuerdo a ese esfuerzo que consolidó la acción del Norte, permítaseme leer un párrafo del discurso que pronunció en Septiembre de 1921: «Se prueba que la protección al azúcar es no sólo la protección a una industria, es la protección a una vasta región



geográfica de la República, que tiene en ella su mejor producción; que el azúcar sustenta el régimen fiscal de varias provincias, que es para un grupo de Estados argentinos el aliciente pasado y presente de su actividad económica, que ha sido una industria benemérita, que arrancó de su pobreza a toda la región del Norte, que es el fruto más noble del histórico esfuerzo de sus hijos, que por ella se construyeron las grandes líneas férreas, se alimentaron las poblaciones indígenas, se sustentaron las agregaciones adventicias y se conservó la cultura de aquellos centros seccionales de gobierno que exige hasta el equilibrio político de la Nación».

Estas tan acertadas palabras y estos inteligentes conceptos no se apartan de mi ánimo cada vez que el debate azucarero vuelve al de la Cámara.

Se ha invocado y se ha dicho en la comisión y en el recinto, que los impuestos con que las provincias han gravado sus productos responden a un avance constitucional. Yo tengo por la Constitución argentina un infinito respeto. Basta pensar que es la esencia de nuestra tradición y que en ella condensaron su experiencia y hasta su sabiduría nuestros mayores, para que sea para mí, la Constitución, el libro al cual los argentinos debemos el máximo respeto. Pero yo quiero la Constitución interpretándola en su espíritu, no como el creyente a la Biblia ni como el musulmán al Corán, como el libro que encierra el dogma, en donde la fe pone freno al análisis. Yo estudio la Constitución, no limitándome a aprenderla de memoria, sino a captar su amplio y profundo significado, y es así como he contemplado el artículo 67, inciso 16 de la Constitución, que da como a una de las directivas centrales de ese capítulo «la de promover la industria», agregando: «la introducción y establecimiento de nuevas industrias».

Hemos cumplido en el Norte, señor presidente, un precepto constitucional y si se han aplicado impuestos, ha sido en uso de esa facultad concurrente, que algún otro señor legislador podrá am-

pliar con mayor tecnicismo y mayor documentación especializada, que la que yo podría presentar.

El señor diputado Ghioldi en el curso de su exposición, y entrando ya en materia, dijo, si mal no recuerdo, — y siento venir al debate sin haber tenido en mis manos el Diario de Sesiones de ayer, que no ha sido todavía distribuido a los señores diputados — dijo que la comisión había operado en frío al consumidor.

**Sr. Ghioldi.** — Más o menos ese fué el concepto.

**Sr. Simón Padrós.** — No, señor diputado. Grandes masas de la población argentina se encontrarán aliviadas por la unificación de los impuestos internos. La superposición de gravámenes provinciales, en algunos Estados provinciales, creando esa guerra impositiva de frontera interprovincial, hace que hoy la ley de unificación de los impuestos internos sea recibida como una liberación para el comercio, para el consumidor y para el productor.

Pero no siempre el concepto de la defensa del consumidor veo que surge como directiva fundamental en la política socialista. No hace tantos meses en el Concejo Deliberante de la Capital Federal se debatía un importante asunto: la provisión de carne para el consumo de la Capital Federal. En la sesión del Concejo, de fecha 9 de Diciembre de 1932, encuentro estos párrafos del señor concejal Ghio: «Voy a sostener que la municipalidad va a llegar a terminar con la competencia desleal que se está haciendo al Matadero Frigorífico Municipal por empresas frigoríficas. Eso lo hemos de sostener en el informe de la comisión investigadora, porque nosotros, obligados a dar al personal del Matadero y Frigorífico Municipal una retribución humana, es decir, el salario mínimo, estamos superados a la «competencia desleal» de las empresas frigoríficas, que pagan salarios miserables, salarios de hambre.»

Yo comparto, señores diputados, la necesidad de sostener orgánicamente una explotación, aunque más no fuera con esa finalidad fundamental: la de

mejorar el standard de los obreros, que en ella trabajan y que cuando existe una competencia desleal hay que derrotarla; pero ese principio, ese concepto no puede ni debe ser exclusivo para el Matadero Municipal. El criterio socialista es demasiado amplio y, diré, suficientemente puro, para pretender restringirlo al pequeño problema del Matadero Municipal.

Y en el informe presentado el 10 de Octubre de 1933, firmado por los señores concejales Ghio, Poreel, Romero y Vago, se agregaba: «De ahí que su costo elevado y la exigua cantidad de animales que en el Matadero Municipal se faenan, planteen hasta hoy una cuestión sin respuesta: es la que se refiere a las amortizaciones del capital invertido y al pago de sus intereses.»

Reconozcamos, señores diputados, que es un lenguaje bien capitalista; reconozcamos que si lo emplearan algún día los industriales viticultores o los industriales azucareros, quizá se levantara una explosión de protesta en la representación socialista.

Nosotros pretendemos que sea también amparada la industria contra la competencia desleal del salario inferior, del salario inhumano. Por eso, cuando tengo en mi banca la documentación oficial, cursada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con comunicaciones telegráficas de los señores cónsules y representantes diplomáticos en los diversos países productores de azúcar del mundo — documentación que ofrezco a los señores diputados y que puede también imprimirse en el Diario de Sesiones — y encuentro que en el Brasil se pagan 5.000 reis en los Estados del Norte y 3.000 reis en los Estados del Sur, salario que al cambio de 27,10 representa en moneda argentina 1,35 de jornal para los Estados del Norte y 0,81 para los Estados del Sur; cuando veo que en el Perú se paga 1,60 soles, que al cambio de 90 representa 1,44 pesos argentinos; cuando en Cuba, por el decreto del presidente Grau, en Enero de 1934 se pagaba 0,80 centavos de dólar americano, que equivalen a 3 pesos de nuestra

moneda; cuando en Filipinas, en Manila, se pagan 0,80 centavos de dólar filipino, que equivalen a 1,86; cuando en Java, en Singapur por ocho horas de trabajo se pagan 0,30 centavos de florín, que a 283 representan 0,85 centavos de pesos moneda legal; cuando en Praga, en Checoslovaquia — en ese país a que hacía referencia el señor diputado Ghioldi, que nos mandaba azúcar que puede cotizarse en el Puerto de Buenos Aires a menos de 2 pesos — se paga por un trabajo de sol a sol, un jornal, sin comida, — como dice el informe diplomático, 18 coronas, que al cambio libre de 17,50 representan 3,16 pesos argentinos; cuando veo todos esos salarios, yo me pregunto, señores diputados, si no hay ahí una razón para la defensa azucarera, para el amparo por el que ha venido clamando durante años y años, la industria del Norte.

Si el malogrado diputado doctor Justo, cuya ausencia de este recinto no se cansan de lamentar amigos y adversarios, pudiera presenciar los debates azucareros en un período en el que el encarecimiento de los costos y de los fletes, de los jornales y de materia prima es evidente para la industria azucarera, en un período en que se ha producido el encarecimiento de la caña y del salario, que en buena hora ha llegado pero que no es posible que salga exclusivamente del capital si se sujeta a continua pérdida, quizá hubiéramos escuchado palabras menos desalentadoras para la industria.

En el año 1926 el ex diputado doctor Justo, en un viaje realizado a Tucumán, dijo, textualmente, en una conferencia lo siguiente: «En todas partes me he informado de la situación de los trabajadores y no podría decir que considero a los obreros del azúcar en una situación inferior a los de la producción argentina en general. En cuanto a la habitación, veo la de los trabajadores de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires principalmente, y encuentro que estas casitas que rodean a los ingenios formando una especie de pueblito son en muchos casos superiores a la habitación media del tra-

bajador en Buenos Aires, que generalmente es una pieza de conventillo donde vive toda la familia.»

Y seguía diciendo en esa interesante exposición: «En la provincia de Tucumán, que es mucho más culta, que es superior a las provincias septentrionales en muchos sentidos, la situación de trabajo está determinada por acción de la ley; he notado con gran satisfacción que en Tucumán rige la jornada de ocho horas.»

**Sr. Ghioldi.** — ¿Podría el señor diputado indicarnos dónde se ha publicado?

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Señor diputado: parece que el señor diputado Ghioldi desea enterarse de cómo se ha procurado esa información el señor diputado por Tucumán y que, en reciprocidad, dirá cómo se procuró él la que trajo ayer.

**Sr. Ghioldi.** — No preguntaba eso: es una interpretación capciosa del señor ministro, que cree haber descubierto lo que yo pensaba.

Lo que preguntaba es dónde se ha publicado eso.

**Sr. Simón Padrós.** — Le voy a decir: en el diario «El Orden» de Tucumán — pues que la conferencia era en Tucumán — del día 19 de Junio de 1926, que ofrezco al señor diputado.

**Sr. Ghioldi.** — Le agradezco, pero sólo quería saber con exactitud la fecha...

**Sr. Simón Padrós.** — Todas mis citas, señor diputado, son siempre de una absoluta veracidad.

**Sr. Ghioldi.** — No dudo de la veracidad, porque conozco de memoria ese magnífico discurso.

**Sr. Simón Padrós.** — El señor diputado Ghioldi, en su exposición — y esto avanzando ya en la réplica al mismo — dijo algo más serio; dijo que el sindicato Norte-Oeste es el que había, en realidad, obtenido el usufructo, el beneficio de la ley.

**Sr. Ghioldi.** — Respetando la ley de propiedad literaria, recuerdo al señor diputado que esa frase no es mía, sino del señor ministro de Hacienda.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Es exacto.

**Sr. Simón Padrós.** — Pero comparte totalmente su impresión.

**Sr. Ghioldi.** — Efectivamente.

**Sr. Simón Padrós.** — Lo sorprendente es que los señores diputados, que tienen el trato común de los hombres en una labor parlamentaria y que tienen una experiencia acentuada, no alcanzan a interpretar cuándo hay una colaboración leal, cuándo los hombres hablan como pensando en voz alta, sin el reato siquiera de saberse frente a un adversario político.

No ha habido tal sindicato, señor diputado; y pueden haber presenciado, desde el señor ministro hasta los colegas de comisión, que las representaciones que tienen una vinculación industrial en las provincias del Norte se han abrazado a la ley de unificación, diría, como el creyente a Cristo: es, en principio, una salvación, es la unidad económica, es la tranquilidad fiscal. Entonces, no podíamos jamás plantear dificultades a la ley; pero no podíamos tampoco traicionar los intereses fiscales de nuestras provincias. Si queríamos la ley por interés económico, en cambio, por responsabilidad representativa, teníamos que hacer la ley de tal modo que cuando llegara a las Cámaras de nuestras respectivas provincias no se encontrara entorpecida por razón de que su mecanismo y las limitaciones impuestas a las provincias hicieran imposible acogerse a la ley. Y si bien la lógica dice que de dos males no hay que elegir ninguno, la lógica práctica, la efectiva, indica que de dos males hay que elegir el menor. Y esta es la situación en que se hubieran encontrado las provincias productoras de artículos gravados con impuestos provinciales, de haber salido la ley en la forma presentada en el mensaje del Poder Ejecutivo.

Hemos hecho, pues, una colaboración leal, hemos presentado las dificultades que el proyecto tenía para nuestras respectivas provincias, y nos hacíamos la ilusión, desvirtuadas ayer por el discurso del señor diputado Ghioldi,

de que habíamos logrado convencer a los señores diputados socialistas de la conveniencia y necesidad de modificar el despacho, precisamente para darle vía libre en las legislaturas provinciales.

El señor diputado Ghioldi me repitió ayer en el recinto que yo era industrial. Quizás lo hizo sin intención objetiva. Quizás no. Pero si así fuera, yo le diría al señor diputado Ghioldi que no he ocultado jamás mi posición de industrial, como no la han ocultado el ganadero o el agricultor que vienen a la Cámara, precisamente, para colaborar con mayor eficacia en los problemas que entienden. En mi primera presentación en este recinto, cuando el señor ministro Pinedo ocupaba una banca de colega, dije más o menos lo siguiente: No habrá ácido capaz de roer el temple del metal en que mi alma se acoraza. Hice mi profesión de fe industrial y en ella me mantengo, porque entiendo que no es incompatible con la lícita y digna defensa de los intereses económicos de aquella provincia que me ha delegado a la Cámara precisamente sin excluir esa significación. Por consiguiente, en el momento en que una ley de unificación de impuestos internos va a tener una trascendencia tan enorme en la vida económica y fiscal de esas provincias, ¿cómo voy a frenar el impulso de una colaboración decidida, continua, permanente, hasta conseguir un despacho de comisión que haga la ley viable!

Pero si hubiera habido provecho en esa ley, si como dice el señor diputado Ghioldi, era un triunfo oligárquico, ¿por qué no analizamos la ley? Vamos a ver dónde está ese triunfo oligárquico. El triunfo se mide, y se aprecia por sus resultados, y se informa por la magnitud de sus cifras; yo necesito citar algunas, no por afición a los números que me empiezan ya a causar con los años; pero en este instante los números son mi defensa y a ellos voy. Triunfo oligárquico, señor diputado Ghioldi, cuando nos encontramos con semejante desarrollo de cuadro en los 20 años de la ley. Vamos a hacer des-

filar en forma sintética las provincias argentinas, desde el año 1835 al 54; y observamos lo siguiente: La recaudación promedia en los 5 años de 1929 a 1933 en la provincia de Buenos Aires que fué de 11.500.000, pasa a 32.161.000 la provincia de Santa Fe, de 7.436.000 pasa a 14.000.000; la provincia de Córdoba, de 6.091.000 pasa a 11.400.000; la provincia de Entre Ríos, de 2.317.000 pasa a 6.620.000; Tucumán, entre impuestos a la producción y consumo, de 7.628.000 pasa a 8.039.000; Salta, de 1.657.000, pasa a 2.343.000; Santiago del Estero, de 730.000 pasa a 4.073.000; Mendoza, de 17.240.000, pasa a 12.651.000; Jujuy, de 2.236.000 pasa a 2.046.000; Corrientes, de 429.000, pasa a 5.401.000; San Luis, de 416.000 pasa a 1.810.000; San Juan, de 7.746.000 pasa a 5.631.000; La Rioja, de 118.000 pasa a 1.241.000; Catamarca, de 111.000 pasa a 1.526.000.

Estas cifras que había que citar así en forma concreta no tienen el exacto valor sino con el índice comparativo que es el que resalta la posición definitiva de las provincias en virtud de la unificación de impuestos. De ahí el cuadro que preparé en donde está el desarrollo año por año de la renta que va a recibir cada provincia comparada con el promedio de su recaudación por consumo y producción total de 1929 a 1933. Buenos Aires pasa de 1 a 2,78, quiere decir que casi triplica. Santa Fe pasa a 1,88, casi duplica; Córdoba pasa a 1,88, casi duplica; Entre Ríos a 2,86, casi triplica; Tucumán pasa a 1,05. El triunfo oligarca del sindicato mantiene por dichos impuestos para Tucumán el índice de 1,05; Salta, 1,41; Santiago del Estero, 5,57; Mendoza, 0,73; Jujuy, 0,91; Corrientes, 12,58; San Luis, 4,35; San Juan, 0,73; La Rioja, 10,48; Catamarca, que bate el record, 14,10.

Estableciendo el orden en índices, resulta que las provincias en orden de beneficio son las siguientes: 1º, Catamarca; 2º, Corrientes; 3º, La Rioja. Y siguen en 4º lugar Santiago del Estero; 5º San Luis; 6º, Entre Ríos; 7º, Buenos Aires; 8º, Córdoba; 9º, Santa Fe; 10º,

Salta; 11°. Tucumán; 12°. Jujuy; 13°. Mendoza; 14°. San Juan. Qué casualidad: Las cinco provincias del sindicato oligarca ocupan los cinco últimos lugares del índice de retribuciones en virtud de la ley de unificación.

**Sr. Dickmann (A.).** — ¿Me permite el señor diputado?... Sé que no lo molesto.

**Sr. Simón Padrós.** — Nunca.

**Sr. Dickmann (A.).** — Reconozco la colaboración eficaísima del señor diputado en el seno de la comisión; pero me voy a permitir colaborar en este momento con él para completar su información. El señor diputado ha olvidado que debido a su propuesta se ha establecido en el artículo 8° lo siguiente:

Las provincias afectadas por la disminución dispuesta en el artículo anterior tendrán derecho a que la Nación tome a su cargo hasta su extinción, deuda provincial actualmente existente, consolidada o que se consolide antes de tres años, por un importe nominal cuyo servicio de interés y amortización equivalga a las entidades que las provincias dejarán de percibir cada año en relación al inmediato anterior, por aplicación del artículo precedente.

Quiere decir que se ha resarcido la pérdida a esas provincias. Seguramente por un olvido no lo ha dicho el señor diputado.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — No es así.

**Sr. Simón Padrós.** — Si hubiera esperado breves minutos se hubiera ahorrado la lectura un poco fatigosa y una referencia inútil, porque precisamente iba a entrar a ese tema.

**Sr. Dickmann (A.).** — Temía que se hubiera olvidado.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Al señor diputado le convendría que se olvidara.

**Sr. Simón Padrós.** — Iba a decir que esa compensación en el servicio de la deuda, y que equivale para Tu-

cumán a una economía de más o menos 286.000 pesos en cada uno de los primeros 4 años y de 115.000 en los siguientes hasta endosar su deuda total, aproximadamente hacia 1950, no es sino la exacta equivalencia de lo que la Nación le va a quitar, y como he comparado las cifras relativas al último año en que ya no existe compensación, porque las provincias van perdiendo 5 % por año durante 4 años y 2 % por año durante los últimos 16 años, precisamente en este sentido tenía que destacar el error con que el señor diputado Ghioldi dijo ayer que en virtud de esa nueva redacción, que le iba mermando 2 % por año a partir del cuarto, en vez del 5 % que decía el mensaje del Poder Ejecutivo, surgía una ventaja que avaluó en la cifra de 29.000.000, pero no hay tal. Esa lentitud en el decrecimiento ha sido una concesión bondadosa del señor ministro; ha sido así como una anestesia para extraer, no diré sin dolor, pero con menos dolor, la quita del 5 % que primero había establecido. Se hace la quita más lenta, pero se hace definitiva.

**Sr. Ghioldi.** — Eso no quiere decir que la cifra que yo haya dado esté mal.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Las cifras están bien, pero el concepto del señor diputado por Tucumán, también es exacto.

**Sr. Ghioldi.** — No son incompatibles los dos conceptos. El habla de un concepto y yo de otro.

**Sr. Simón Padrós.** — La quita, aunque sea más lenta, existe. Es en ese sentido que rectificaba al señor diputado. Pero el caso más importante en donde el señor diputado Ghioldi tuvo un especial y amable ensañamiento (*risas*) fué en el de Tucumán, donde magnificó la situación en forma tal que me veo obligado a replicar para que no quede en la Honorable Cámara y en los que puedan seguir el debate sobre la unificación, la impresión que habría

quedado, dada la forma en que fué presentado el asunto.

Ante todo debo decir, que el primer informe remitido por el Poder Ejecutivo, traducido en números y que tengo a la vista, fijaba a Tucumán en su artículo 7º, una recaudación en 1933, computando las letras de los 2 centavos gravadas por la ley de 1933 y seguramente por error ascendía a pesos 6.317.000.

**Sr. Ghioldi.** — ¿A qué informe se refiere?

**Sr. Simón Padrós.** — Al que vino del Poder Ejecutivo.

**Sr. Ghioldi.** — Yo tengo aquí el comparativo.

**Sr. Simón Padrós.** — No es ése. El primer informe, de traducción de números publicado a mimeógrafo que tengo a la vista y que ofrezco al señor diputado, asignaba para Tucumán...

**Sr. Ghioldi.** — Los miembros de la comisión tienen...

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Los dos tienen razón. El proyecto enviado por el gobierno a la Cámara consigna la cifra del señor diputado Ghioldi.

**Sr. Dickmann (A.).** — Los demás eran trabajos preparatorios de la sub comisión.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — El trabajo preparatorio de ese proyecto que se varió el día antes de mandarlo, en virtud de unos datos que llegaron de Tucumán, consignaba las cantidades que indica el señor diputado Simón Padrós.

**Sr. Dickmann (A.).** — Fueron trabajos internos de la comisión.

**Sr. Simón Padrós.** — Los diputados que hemos tenido la ansiedad de esta ley, nos hemos acercado al ministerio para pedir que nos tradujera en cifras el alcance del proyecto, y ese pedido, diría particular, formulado por algunos diputados de la comisión, fué evacuado con una impresión a mimeógrafo, en donde figuraba por producción, un promedio de 6.317.000. En lugar de

esta cifra viene ahora en el despacho la de 5.714.000, pero el mensaje del Poder Ejecutivo vino con sólo 4.651.000 pesos.

Quiere decir, que la impresión en que estaba la representación tucumana al conocer el proyecto del Poder Ejecutivo, reflejada en ese informe previo, era de 6.317.000. Pero se ha atacado en forma tan virulenta la cuestión de las letras, que es necesario aclarar debidamente.

Tucumán ha venido manteniendo un régimen de producción sujeto a la amputación derivada de su necesidad económica exigida por la ley de limitación. Tucumán ha estado precisamente en estos últimos cinco años, de 1928 a 1933, sujeta a la amputación, no sólo para reducir la producción en equilibrio con el consumo, sino también para ir eliminando paulatinamente los stocks.

De modo, entonces, que se han tomado como base de percepción únicamente cosechas amputadas. Pero cuando se trata de legislar para 20 años, cuando Tucumán había cristalizado su régimen impositivo en virtud de un impuesto consolidado por 33 años; cuando Tucumán iba a recuperar a partir de 1935-36 su cifra normal de fabricación, para satisfacer la parte proporcional de consumo interno, viene la ley de unificación. Y, ¿en qué situación quedaba, comparando el mensaje con 4.651.000 con la situación actual y definitiva de Tucumán? Su cifra normal, dentro del consumo nacional de 360.000 toneladas y admitiendo que sea de 260 a 270.000 toneladas, con los 2 centavos de impuesto consolidado por hectárea, implica una percepción de 5.200.000 pesos. Una cosecha de 3.000.000 de toneladas de caña a 26 ½ centavos por tonelada de impuesto, da 795.000. Por percepción de impuesto provincial de alcohol en los últimos 10 años, las cifras han oscilado de 300 a 700.000 y suponiendo que fueran sólo 400.000, llegaríamos a un total perma-

nente, orgánico para el futuro inmediato, a partir del año 1935 y con toda seguridad de 1936, de no menos de 6.400.000 pesos.

Esta es la realidad. No son fantasías ni cálculos. Esta es una verdad controlable con las cifras que acabo de exponer.

¿Cómo era posible pretender que Tucumán pudiera acogerse a una ley que le hubiera dado, en vez de los 5.714.000 pesos que figura en el despacho de la comisión, todavía una diferencia en menos de 692.000 pesos, porque en definitiva esta es la diferencia que se discute, ya que si algo había indiscutible es que había que tomar para Tucumán y para el año 1933, por lo menos  $\frac{1}{2}$  centavo, pagado en efectivo a cuenta, mientras resolviera en definitiva la Legislatura de Tucumán, sancionar con fuerza de ley el decreto de la intervención?

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, doctor Roberto J. Noble.

Pero hay otra argumentación. El decreto de la intervención al oficializar con su autoridad el convenio suscripto con la industria, establece en su articulado que es ad referendum de las Cámaras legislativas. De manera que si hubiera arbitrariedad en tomar, como decía, los 2 centavos, también la habría en tomar sólo  $\frac{1}{2}$  centavo; y sobre todo está la razón numérica, visible y tangible, que hubiera imposibilitado a Tucumán con una percepción que ha venido siendo efectiva en 1925, de pesos 5.740.000; en 1926, de 6.241.000 y en 1927, de 5.720.000 pesos, encararla para el futuro con sólo 4.651.000, si bien en 1933 sólo recaudó 5.616.000, incluido el impuesto de  $\frac{1}{2}$  centavo.

Como argumento final, quiero decir al señor ministro y a la Honorable Cámara que no se ha tomado en cuenta para el cómputo del promedio básico del impuesto al consumo ni a la produc-

ción, la proporción que puede haber en la gruesa partida que año tras año, en los cinco últimos años ha venido percibiendo Tucumán por concepto de impuestos atrasados, que ha variado desde 646.000 pesos como mínimo a 1.166.000. No ha sido computada ninguna de esas cifras, porque no ha sido posible establecer qué proporción había de impuesto a la producción y de impuesto al consumo, que tengo entendido fueron mínimos, y como fué aceptada la proposición de incorporar el monto de los 2 centavos suscriptos en letras, no me pareció discreto que insistiera todavía en tomar la parte proporcional que hubiera de impuestos atrasados. En esta forma y teniendo además Tucumán una percepción anual de pesos más o menos 730.000 de la Nación, en concepto de su participación en los impuestos a créditos y ventas, confío que se acogerá a la ley de unificación.

Dejo así documentada la posición relativa a Tucumán.

El señor diputado Ghioldi desviándose de la ley de unificación entró al ataque a la ley reguladora y debo decir sobre ello pocas palabras.

La ley reguladora nació en Tucumán como imperativo de una situación que se estaba volviendo ya dramática. Fué auspiciada, y sancionada por todos los grupos políticos que integraban las Cámaras. Fué igualmente solicitada íntegramente por las fuerzas vivas, gremiales, industriales, y cañeros. De manera que esa ley que nació bajo el aplauso general para resolver la gran magnitud del problema que encaraba, tuvo estas consecuencias: ha resuelto para Tucumán la tranquilidad social; ha ordenado el mercado; ha estabilizado el precio; ha equilibrado la producción al consumo; va eliminando los stocks. En una palabra, definió una situación que, de no haber sido contemplada y resuelta, el Norte, se hubiera visto en la necesidad de golpear ahora las puertas del Congreso, como tantas

otras industrias que no han podido resolver sus problemas en virtud de acuerdos, de convenios, o de leyes provinciales, para que fuese una ley nacional la que viniese a dar la solución orgánica de esta situación.

Pero yo debo decir que esta acusación a la forma en que ha solucionado sus graves problemas, es injusta, señor diputado Ghioldi. Tucumán ha vivido su problema azucarero silenciosamente, ya desde los días en que la degeneración de su vieja cepa eriolla se agotó en su vida y en el año 1916 se perdió rápidamente el viejo cañaveral elaborando ese año sólo 84.000 toneladas. La industria azucarera debió afrontar la renovación integral de sus cañaverales, 120.000 hectáreas, más o menos, que son 6.000.000 de surcos que, a 4 pesos de costo cada surco, significan 24.000.000 de pesos. Y esa pérdida total del plantel, Tucumán la sufrió tan silenciosamente, sin que el país se apercibiera de la angustia que nos agobiaba; tan silenciosamente como el pariente pobre y digno que se repliega en su dolor para no llamar a la puerta del pariente poderoso. Después, cuando ya rehabilitada la fuerza productiva de la industria con la nueva semilla de Java, llevada a Tucumán en hora grata por la previsión de su estación experimental, y pudo revivir el viejo plantel, vinieron los grandes problemas y los resolvió con su acción local, con su puro esfuerzo, y en este sentido hemos tenido el aplauso de la opinión, de gran parte de la opinión. Tengo en mi banca, y no voy a leer para no prolongar mi exposición, artículos de fondo publicado en «La Nación» en 15 de Marzo y 8 de Agosto de 1932, en el que se aplaude la acción reguladora que se derivaba de esa ley, y del convenio azucarero.

Pero en realidad, señores diputados ¿qué hemos hecho con la ley reguladora que tres gobiernos distintos han mantenido y qué tres intervenciones distintas han respetado, con pequeñas modificaciones? Pido a los señores di-

putados que quieran interpretar el sentido con que expreso estas palabras.

No voy a medir el alcance constitucional de ciertas disposiciones que la ley involucra. Si hay algún avance, la Suprema Corte del país como autoridad soberana sabrá pronunciarse al respecto. Lo que sí puedo decir es que esta ley nació como un clamor de la industria, como una necesidad de los cañeros, como una exigencia de la provincia. El plan internacional Chadbourne resuelto con posterioridad a ella, pareciera que no hubiera hecho sino incorporarla, porque ha perseguido los mismos conceptos: limitar las cosechas, eliminar los stocks, ordenar el mercado, valorizar el producto.

Pero hay un antecedente que apoya la posición en que podemos estar los tucumanos al haber resuelto por medio de una legislación el problema de la industria azucarera. Con fecha 16 de Marzo de 1933, es decir el año pasado, el presidente Roosevelt mandó al Congreso de Estados Unidos la ley que era el más formidable ariete de guerra, puesto para la paz en manos de un gobierno. Entregaba una verdadera dictadura económica al Ministerio de Agricultura. Establecía en su artículo 2º, reducir la producción de 9 productos básicos para eliminar el exceso y aumentar los precios en los años 1933 a 1935 inclusive. Regular la distribución de los productos en el mercado, e imponía gravámenes al industrial para mejorar los precios de la materia prima, con un aumento en el precio equivalente al gravamen llamado impuesto de manufactura.

Y cuando poco después esa ley quedaba sancionada, decía textualmente Roosevelt: «La parte más importante de la legislación es el proyecto de fiscalización industrial, destinado a asegurar un beneficio razonable, a garantizar salarios que permitan vivir a los obreros.» Y agregaba: «La ley de fiscalización industrial suspende los efectos de las leyes contra los trust en Norte América.»



El señor diputado por la Capital hizo otra referencia al artículo 26 del despacho. No habíamos dado a ese artículo la trascendencia que luego se le dió en el recinto, y no voy a silenciar el asombro con que he oído el ataque a ese artículo, pues cuando en la Comisión de Presupuesto fué incorporado al despacho, a pedido de la representación mendocina, se hizo no sólo sin debate, sino con la manifestación expresa hecha por un miembro del sector socialista, más o menos en estos términos: si las provincias pueden resolver sus problemas, ¿para qué quitarles la posibilidad de hacerlo? Repito que no hemos dado al artículo 26 la trascendencia, ni le hemos atribuido la magnitud a que se ha hecho referencia ayer.

En el artículo 26 se establece, simplemente, la posibilidad de seguir aplicando impuestos sin carácter fiscal para regular dentro de los límites que las respectivas constituciones de provincia permitan.

Es evidente que la mejor solución, la solución orgánica y de fondo, sería una ley nacional; es innegable que la solución ideal para resolver los problemas económicos vinculados a productos no elaborados exclusivamente por una sola provincia, será mediante una ley nacional, y yo me sentiría feliz si antes de terminar mi paso por esta Cámara pudiera contribuir a la sanción de una ley nacional de regulación azucarera.

Pero interinamente no se creyó inconveniente aceptar el pedido de los señores diputados mendocinos y permitir que esas regulaciones pudieran ser efectuadas por las provincias.

Podría modificarse debidamente el artículo, y hasta establecer paralelamente, como se ha hecho con el despacho de la ley de vinos, que desde el día en que una ley nacional regule la economía de una industria, las provincias no podrán aplicar la facultad del artículo 26.

El señor diputado de la Vega, en la Comisión de Presupuesto, al discutirse en la ley de vinos este artículo

en su parte pertinente, dijo bien que las facultades concurrentes y constitucionales no pueden ser dadas ni quitadas. Las que existan seguirán existiendo. Y si el artículo 26 fuera suprimido del despacho, no les quepa duda, señores diputados, que las provincias encontrarían la manera de regular la economía de su industria, si no con impuestos, con otras formas o sistemas, porque cuando una necesidad se vuelve imperativa se encuentra la manera de satisfacerla. No nos preocupa, pues, mayormente el artículo 26, pues por otra parte no desconocemos que esas facultades son también armas de doble filo.

El señor diputado Ghioldi hizo también una referencia en el sentido de que la parte técnica de la industria es una rémora para el progreso de la misma. Creo que fué más o menos eso lo que significó.

En otra oportunidad, ante una manifestación semejante, tuve que hacer una cita de alta autoridad. Cuando el conflicto cañero industrial se llevó al terreno presidencial, el presidente doctor Alvear emitió su conocido laudo, que para Tucumán constituye la constitución, diré económica, en la relación gremial-cañera-industrial. En ese laudo hay un párrafo que dice: «Es notorio que desde el punto de vista técnico, tanto en el proceso fabril como en los métodos de cultivo y selección de especies de caña, se ha llegado en el país a un grado de perfeccionamiento que es motivo de justificado orgullo para los factores dirigentes de la industria.» No desconozco ni niego que hay ingenios que no tienen sus instalaciones marcando el ritmo del progreso seguido por otros, pero, en ese caso, peor para ellos.

El señor diputado Ghioldi hizo otra referencia que nuevamente lamenta no poder concretar en su letra y en su espíritu por la falta del Diario de Sesiones. Entendí que dijo, que algunos industriales encontraron más utilidad en usar la ley que en explotar su ingenio. No está bien, señor diputado, ha-

cer esa manifestación en el recinto; no deben hacerse juicios temerarios ni ligeros con la autoridad que representa el nombre del señor diputado Ghioldi en esta Cámara. Yo he interpretado esa manifestación, ya que no concreta caso ni cargo, como un simple desliz, al pasar, de su discurso, como una mirada de soslayo cuando se abarca un panorama de conjunto.

En el curso de su exposición el señor diputado Ghioldi expuso con claridad dos conceptos: el de que la ordenación del mercado forcejeaba la Constitución y que el precio de carestía, como él lo llamaba, afectaba al monto del consumo. No crea, señor diputado. Cuando una medida es útil en todo el amplio alcance que persigue, no debe ser atacada. Las diferencias de precio que pudieran hacerse en la venta del azúcar sin afectar la estabilidad de la industria, serían tan insignificantes, con los limitados márgenes que el precio actual permite, dado el elevado costo de producción, que no compensarían con la mayor venta problemática el sacrificio a que se sujetaría la industria por la disminución en el precio.

Dijo el señor diputado que había tenido el asesoramiento de un técnico industrial.

**Sr. Ghioldi.** — No sé si es exactamente un técnico, pero es un hombre vinculado a la industria.

**Sr. Simón Padrós.** — Me complace que tenga el asesoramiento de factores conocedores de la industria, pero siento que un espíritu tan observador y tan analítico como el suyo no haya buscado con la misma inquietud la colaboración de otros factores técnicos.

**Sr. Ghioldi.** — Le consta al señor diputado que he tomado como polo opuesto a aquella información la del propio señor diputado, a quien le he requerido informes que utilicé.

**Sr. Simón Padrós.** — No, señor diputado; me requirió solamente infor-

mes estadísticos, y creo que se los di con toda amplitud; pero no requirió en ningún momento el análisis completo de las cuestiones que luego ha traído al debate, porque, si así hubiera hecho, si hubiera recabado otras opiniones para sujetar el control de su espíritu crítico al panorama complejo que la industria encierra, tal vez se habría evitado algunas de las apreciaciones lanzadas en el recinto. El señor diputado hizo otras que recogeré en forma rápida, porque debo terminar; el señor ministro tiene que hacer uso de la palabra, y me siento violentado por el tiempo que he demorado su exposición.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — No se violenta, señor diputado.

**Sr. Simón Padrós.** — Pero necesito desvirtuar algunas manifestaciones del del señor diputado, relativas a las cifras de los derechos aduaneros y respecto a los precios de venta.

El señor diputado Ghioldi manifestó que en nuestro país había uno de los derechos aduaneros más altos del mundo.

**Sr. Ghioldi.** — No dije de los más altos.

**Sr. Simón Padrós.** — Pero dijo que es éste uno de los países que tiene los más altos derechos. Voy a leer en forma rápida, comprometiendo la veracidad de la información, los derechos aduaneros que regían en Enero en los siguientes países: Estados Unidos, 8,65 centavos oro por kilo; Perú, 12,90; Brasil, 74,30; Francia, 31,34; Inglaterra, 8,39; Alemania, 17,71; Austria, 8,67; Italia, 20,34; Portugal, 21,52; España, 11,34; Bélgica, 10,42; Checoslovaquia, 24,20; Polonia, 28,08; Noruega, 13,76; Irlanda, 10,78. Estos datos se refieren a centavos oro por kilo de azúcar refinada.

En cuanto a los precios, también el señor diputado informó que nuestros precios eran de los más elevados y no resisto a la necesidad de citar los siguientes para Abril de este año, según la planilla adjunta:

**Precios que paga el consumidor por cada kilogramo de azúcar refinado en los distintos países. — Información consular**

(Cables recibidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores en los días 12 y 13 de Abril de 1934)

PAISES	Precios por kg. en las distintas monedas	Al cambio del día 18 de Abril	Precios por kg. en \$ m. n.
Montevideo . . . . .	30 centavos oro uruguayo	193,83	0,581
Río de Janeiro . . . . .	1,400 reis . . . . .	285,05	0,399
Londres . . . . .	6,06 peniques	17,10	0,428
Madrid . . . . .	1,70 pesetas . . . . .	45,43	0,772
Roma . . . . .	6,50 liras . . . . .	28,32	1,84
París . . . . .	4,55 francos . . . . .	21,91	0,996
Praga . . . . .	6 coronas con 20 heller .	13,82	0,856
Berlín . . . . .	6,78 marcos . . . . .	131,01	1,021
Bruselas . . . . .	2,80 francos . . . . .	77,64	0,59
Amsterdam . . . . .	0,60 florines . . . . .	224,98	1,349
Varsovia . . . . .	1,40 zlotys . . . . .	63,04	0,882

Buenos Aires, 18 de Abril de 1934.

**Sr. Dickmann (E.).** — ¿De dónde son esos datos?

**Sr. Simón Padrós.** — Tengo en mi carpeta — y pido se inserte en el Diario de Sesiones — copia de los informes telegráficos de la representación diplomática y consular, transmitidos al señor ministro de Relaciones Exteriores, doctor Saavedra Lamas.

—Asentimiento. (1)

**Sr. Presidente (Noble R. J.).** — Habiendo asentimiento, así se hará.

**Sr. Dickmann (E.).** — Es una fuente completamente incierta e insegura.

**Sr. Simón Padrós.** — Es una fuente oficial. Si a esto el señor diputado le llama fuente incierta...

**Sr. Dickmann (E.).** — Incierta e insegura. La diplomacia sirve para todo, menos para informar sobre precios.

**Sr. Simón Padrós.** — Puede hacer la Cámara telegramas a las respectivas capitales pidiendo esos informes. Comprenderá el señor diputado que cuando un representante diplomático manda una información al señor ministro de Relaciones Exteriores, resulta infantil pretender que es una información insegura.

Le voy a dar el dato de Rusia. Con-

fieso que este dato no procede de agente diplomático en aquel país, pues en Rusia no tenemos representación.

**Sr. Dickmann (E.).** — Lamento mucho que no tenga el dato.

**Sr. Simón Padrós.** — Sí, lo tengo, pero suministrado por la Legación Argentina en Alemania, el año pasado. Al 20 de Mayo de 1933, las raciones a los trabajadores se vendían a 2,50 rublos, el kilo, o sea 3,92 pesos papel. El precio del comercio era de 13 rublos por kilo, equivalente a 21,06 reichsmark, igual a 20 pesos papel por kilo. El 26 de Enero de 1931, en la Cámara de los Comunes el secretario del Parlamento manifestaba que en el mercado libre el azúcar refinada se vendía en Rusia a un equivalente de 1,26 pesos el kilo. Esto, no en la Rusia imperial del Aguila Blanca, sino en la Rusia del plumaje negro con el sistema comunista.

Para terminar, quiero hacer una manifestación de carácter numérico. Creo recordar que el señor diputado Ghioldi significó que el concurso del Banco de la Nación a la industria azucarera implicaba 44.000.000 de pesos.

**Sr. Ghioldi.** — Son datos oficiales dados por el Banco de la Nación.

**Sr. Simón Padrós.** — Así lo he interpretado.

(1) Véase pág. 374.

No tengo los datos de última hora porque ayer el debate se cerró a medianoche y no he podido materialmente actualizarlos; pero me preocupé de extractarlos cuando el pedido de informes formulado el año pasado por el señor diputado Repetto, y en la memoria del Banco encontré que en «descontos» el Banco de la Nación había anticipado a agricultores, industriales, hacendados, comerciantes y otros gremios, \$ 838.000.000, de los cuales 106 a industriales o sea el 12,64 %. Los anticipos en cuenta corriente fueron de \$ 214.000.000, de los cuales 30 a los industriales, o sea el 14,35 %. En aquella fecha la cifra total de crédito a la industria azucarera era de \$ 38.000.000. Sospecho que la diferencia de 6.000.000 de pesos, con relación al año actual, se debe a préstamos hechos por el Banco de la Nación, no a industriales y agricultores, sino a los préstamos con warrants sobre azúcar, que seguramente no están computados en la cifra del año anterior.

**Sr. Ghioldi.** — Sería interesante que el ministro de Hacienda diera datos si los tiene a mano.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — No los tengo a mano.

**Sr. Simón Padrós.** — Quiero terminar diciendo que esta cifra de \$ 38.000.000 de aquel año representa el 27,58 % del total del préstamo brindado por el Banco de la Nación a los industriales del país y representa el 3,60 % de los pesos 1.052.000.000 brindados a préstamos gremiales por el Banco de la Nación, y sólo el 2,24 % de préstamos totales otorgados en redescuentos y adelantos sobre los \$ 1.687.000.000 por el Banco de la Nación.

**Sr. Dickmann (E.).** — Habría que saber si hay otros bancos que han prestado a la industria azucarera y redescotado en el Banco de la Nación y a qué suma asciende eso.

**Sr. Simón Padrós.** — Entiendo que lo redescotado es papel de primera liquidez.

**Sr. Dickmann (E.).** — No estoy muy seguro.

**Sr. Simón Padrós.** — En todo caso va con la firma y responsabilidad del Banco que redescuenta.

**Sr. Presidente (Noble R. J.).** — La Presidencia invita al señor diputado por Tucumán se dirija a ella para evitar diálogos que dilaten el debate.

**Sr. Dickmann (E.).** — Son preguntas e interrupciones que interesan al debate.

**Sr. Presidente (Noble R. J.).** — La Presidencia las tolera siempre que no perturben el debate.

**Sr. Simón Padrós.** — Termino ya, señor presidente. He hecho una información objetiva tratando de destruir los puntos de vista expuestos por el señor diputado Ghioldi; he expresado mis argumentos con lealtad y declaro firmemente, que si como tucumano entiendo haber cumplido con mi deber ante la ley de unificación de impuestos internos, no he dejado de ser un solo instante diputado argentino.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*).

## 6

## ORDEN DE LA LABOR

**Sr. Corominas Segura.** — Pido la palabra para una moción de orden.

Hago indicación de que la Cámara continúe sesionando hasta terminar la discusión en general de esta ley, sin perjuicio de pasar a un cuarto intermedio por una hora, a las 21.

**Sr. Presidente (Noble R. J.).** — Se va a votar la proposición formulada por el señor diputado.

— Resulta afirmativa.

## 7

## INDICACION

**Sr. Oddone.** — Pido la palabra.

Deseo hacer un breve paréntesis al importante asunto en discusión para formular una solicitud a la Cámara.

La comisión que la Cámara ha designado para estudiar la forma de implantar un sistema de votación mecá-

nica en este recinto, ha elaborado las bases correspondientes y necesita publicarlas en el Diario de Sesiones. Como ello no se puede hacer sin la autorización de la Cámara, la solicito.

—Asentimiento. (1)

**Sr. Presidente** (Noble R. J.). — Como hay asentimiento, así se hará.

8

### UNIFICACION DE LOS IMPUESTOS INTERNOS

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Pido la palabra.

Supongo que la Cámara percibe que estamos tratando una ley de gran trascendencia que, de ser aprobada, como lo espero, y si cuenta con la adhesión de las provincias, marcará una época en el desenvolvimiento del derecho fiscal argentino. Es posible, entonces, que con frecuencia en el transcurso de los años se vuelva la vista hacia este debate buscando cuál fué la inspiración de la reforma y cuál fué el alcance de la transformación impositiva que quiere hoy realizarse. Esto me preocuparía bastante seriamente si tuviera un amor propio desmedido, porque no ha de ser esta exposición una de las que más haya cuidado, y ello se debe a que el gobierno creía haber dicho lo necesario en los fundamentos escritos con que acompañó el proyecto.

La tarea para el gobierno era bastante sencilla, porque se trata de una materia aclarada por exposiciones de primer orden, emanadas de autoridades reconocidas en la cátedra, en el Parlamento, en los tribunales. Hay fallos substanciosos que aclaran con precisión cuál es la actividad impositiva de la Nación y de las provincias, y en cuanto a lo que corresponde hacer, son varios los proyectos que tratan esta ma-

teria, como lo ha expresado con toda precisión, el señor miembro informante, diputado Martínez.

Pero ni de esos antecedentes, ni de la circunstancia de existir pendiente de la resolución del Congreso un proyecto del señor senador por Buenos Aires, doctor Sánchez Sorondo y del diputado por Buenos Aires, doctor Escobar puede inferirse algo que ayer se ha dicho y nos ha llenado de asombro. Proyectos emanados de hombres de todos los partidos, iniciativas emergentes de gobiernos, del Parlamento, de congresos gremiales, que han pedido esta reforma, todos hemos creído que ella podría consultar los intereses más generales, y, sin embargo, ayer se nos ha mostrado cómo la máquina que movía todo esto no era sino la presión política, todos los días más grande, de nuestros amigos del Partido Demócrata Nacional. No es el despertar de la conciencia argentina — decía el señor diputado Ghioldi — no es el triunfo de la razón, no es el convencimiento de la justicia lo que ha movido esta reforma. Es el triunfo de las fuerzas oligárquicas representadas en este recinto. Y para demostrar que él estaba libre de la presión de esos elementos proponía simplemente y lo ha indicado como solución, el rechazo de este proyecto.

Resultaría, entonces, que la reforma impositiva sólo podría hacerse cuando no existiera presión oligárquica.

Todo lo bueno que se ha hecho, proviene de fuente oligárquica y no sería sino una presunción de bondad, una prueba de eficacia, decir que esta iniciativa es fruto de la oligarquía. Si puede ser tenido por oligarca por antecedentes de familia o por vinculaciones políticas con los hombres de la derecha, evidentemente no puede atribuirse ese carácter por su alcance social, a mis iniciativas.

Hablar claro tiene grandes ventajas, pero tiene también inconvenientes notorios.

El señor diputado Ghioldi es, evidentemente, uno de los parlamentarios más claros que han pasado por este recinto; sus exposiciones son nítidas, su len-

(1) Véase pág. 382.

guaje es preciso. Y por eso, si muestra con claridad las ideas y da la medida de la razón que se tiene para determinadas actitudes, pone también de manifiesto la debilidad de las razones cuando no se las tiene. Y lo que ayer nos dijo el señor diputado ha sido una prueba acabada de que no hay motivo para oponerse a la reforma. Si confiada la representación de la izquierda al más prominente de sus hombres, sólo ha podido decirse lo que ayer hemos oído, eso significa que estamos tratando una ley inobjetable.

El señor diputado por la Capital apenas ha podido hacer observaciones incidentales, cuando no tangenciales, al asunto en debate. Se ocupó de esos aspectos políticos en que parece que tiene ahora algún interés, no obstante el desprecio olímpico que antes existía por la política criolla; se ha examinado con minuciosidad que llega hasta la exageración, aspectos de detalle, como el del azúcar, y parece, por lo que ayer oímos, que la oposición socialista debería limitarse a impugnar un artículo, si es que tiene el alcance que ellos le atribuyen, y a solicitar la ampliación, la modificación o la aclaración de algunas otras cláusulas accesorias.

Esperando que en la discusión en particular ha de hacerse el examen más profundizado de esas cuestiones de detalle, hoy quiero decir, para tranquilizar a la Cámara, y sobre todo a mis amigos del grupo socialista, algunas palabras sobre este aspecto del azúcar.

Declaro que esta ley no modifica en un ápice la ley Saavedra Lamas. Es sabido que en virtud de ella y de su reglamentación por el Gobierno Provisional, a lo que algunos han atribuido, a mi modo de ver, con razón, el carácter de un decreto-ley, sólo posible por la absorción de poderes por parte del Gobierno Provisional; en virtud de esas disposiciones, el azúcar está sometida a este régimen: el precio en la aduana, más el impuesto fijo de la ley Saavedra Lamas, más el impuesto movable resultado de ese decreto del general Uriburu, forman 41 centavos.

Las variaciones que se produzcan en los ítems que forman ese total, no alteran el total mismo, y con esta ley o sin ella, todo eso sigue rigiendo mientras el Honorable Congreso no resuelva que se haga otra cosa. El proyecto que se discute, insisto, no introduce ninguna transformación en el sistema impositivo o en el sistema general del azúcar; y serían necesarias medidas de otro orden, que bien puede el Congreso adoptar, si quiere, para resolver otra cosa. El Congreso puede, si desea, subir el «plafón» establecido hasta hoy del precio del azúcar y puede también bajarlo. Puede considerar que para ese «plafón» el impuesto es bajo, y en ese caso elevarlo, o puede hacer lo contrario hasta el límite de su abrogación. Nada de eso tendrá que ver con la materia de esta ley, ni a nada de eso se opone esta ley.

Creo que la explicación es amplia, contundente y definitiva como para justificar el pedido que haré de que no se detenga más la Honorable Cámara en la consideración del aspecto azucarero y que sigamos con la unificación de impuestos, dejando para el momento oportuno las consideraciones que sugiera todavía la situación del azúcar.

No busca este despacho una modificación de nuestro sistema tributario, teniendo en cuenta la fuente de donde emanan los recursos nacionales. Por eso parece que las consideraciones generales hechas sobre nuestro sistema impositivo están fuera de lugar. Con la unificación, el gobierno no se propone modificar ese sistema. Parte de la base de que existen los impuestos internos nacionales y provinciales y quiere poner en ello un poco de orden, impidiendo la doble, la triple, la múltiple imposición y queriendo, también, poner un límite a la guerra económica que se inicia entre las provincias y que llegaría a caracteres trágicos si no fuera detenida a tiempo.

El señor diputado por la Capital expresó ayer que consideraba un aspecto simpático de nuestro sistema impositivo el de los impuestos internos.

Es satisfactorio haberlo oído, porque por el carácter de impuestos indirectos que frecuentemente se les atribuye, — empleando una terminología tan imprecisa en nuestro idioma como en otros, tan vacilante en la República Argentina como en Estados Unidos — se sostiene con fundado motivo que pesa sobre los consumos populares y, por lo tanto, crea a estos tributos una mala fama.

El señor diputado por la Capital se ha encargado de disipar el mal entendido, recordando que la materia gravada por los impuestos internos nacionales, por regla general soporta tributos, puesto que son consumos no indispensables, y apenas hace una excepción en cuanto a los seguros, en lo que lo acompaña calurosamente. Pero los impuestos que se unifican no son todos de ese orden. Existen impuestos provinciales similares a los impuestos nacionales, hasta el punto de parecer copiados de éstos, pero existen impuestos provinciales sobre materias indispensables como el mismo azúcar, y es de desear que eso no crezca.

Sin la unificación, la precaria situación financiera de los Estados federados los llevaría indefectiblemente a hacer crecer esa clase de tributos, y prescindiendo de esa consideración meramente fiscal, los designios de política económica que ya se atribuye por nuestras provincias a su sistema impositivo, harán que crezcan los impuestos sobre materias de uso indispensable, lo que es un motivo más para desear la unificación. Si está cercano o lejano el día en que pueda prescindirse, por el mejoramiento en la percepción de los otros recursos, de los tributos sobre los consumos populares, es evidente que ello no se lo va a poder conseguir, sino cuando los impuestos estén unificados. Abrogar de nuestro sistema fiscal un impuesto dado, será muy fácil por resolución de este cuerpo; pero pretender que tenga igual facilidad la derogación de los tributos si ellos dependen de quince cuerpos legislativos, es evidentemente infundado. Motivo hay, pues, para mirar con buenos ojos si se

quiere que sea otra la materia imponible, este proyecto de unificación, como el señor diputado Ghioldi lo ha declarado cumplidamente, expresando que el propósito de la unificación satisface sus aspiraciones.

Lástima es que el pequeño detalle que se ha visto en el azúcar y en algunas otras disposiciones insignificantes, que luego examinaremos, conduzca a un fuerte grupo de la Cámara a no apoyar con su voto una iniciativa que traduce, estoy seguro, el sentir y la voluntad de la unanimidad del pueblo argentino.

Los fines de esta ley son claros y perceptibles a simple vista. Se busca la unificación de los gravámenes en todo el país, esperando que con ello se satisfaga, no sólo un ideal de justicia, sino que se establezcan condiciones similares para el desarrollo de industrias en las diversas partes de la República. Se centraliza la percepción, evitando los costos ingentes de la percepción de tributos iguales por la Nación o por las provincias en el mismo territorio. Se procura el reparto del producido de esos impuestos en forma que satisfice las aspiraciones más ambiciosas de los Estados federales; se crea la unidad económica nacional, echada de menos por la proliferación de barreras que aparecían antes en una forma clandestina, vergonzante, y que hoy surgen a la luz del día, sin escrúpulos ni vergüenza, como la manifestación categórica de la voluntad provincial de valerse del impuesto para servir los intereses de sus industrias, para fomentar el expendio de sus propios productos y para dificultar la llegada de los que les hacen concurrenceia.

La unificación económica de la República, señores diputados, es cada día más una condición imprescindible del progreso argentino; lo será cada día más, pues si hay algo seguro en este mundo es que el progreso de la técnica y el desarrollo de la producción en grande, exigen mercados por lo menos de la esfera nacional. Si se ha dicho de Estados Unidos, desde la vieja Europa, que el progreso de esa gran

federación con respecto a las naciones del viejo continente se debía a la magnitud de su unidad económica, que permitía desarrollar en el país industrias de las dimensiones necesarias para que la producción fuese barata, hoy nosotros, en la República Argentina, que da los primeros pasos en su desenvolvimiento industrial, podemos comprender sin dificultad, las consecuencias que traerán para nosotros, no como en Europa la división por barreras internacionales, sino la división por innumerables barreras provinciales que reducen la unidad económica para cada industria a límites minúsculos, en que con una semana de trabajo se *satisface el consumo de un año.*

Esta ley, señores diputados, que contemplará la unificación económica del país, es una ley de unión nacional. A los ochenta años de existencia organizada, se siente la necesidad de resolver problemas que no previeron, que no pudieron ver que se plantearían, los organizadores de la Nación. La reforma va a hacerse por acuerdo libre entre el Estado federal y las provincias, y las soluciones que parecían inverosímiles, las dificultades crecientes que todos los días sentíamos, los obstáculos cada vez mayores, resultantes de la lucha entre la Nación y las provincias disputándose el campo de su actividad impositiva, podrán ser resueltos en forma que corte el nudo gordiano, que impida toda discusión sobre su constitucionalidad, de modo que no quepa discusión sobre su alcance y su validez. Con ello, señores diputados, quedará aclarado un grueso aspecto de la actividad fiscal de la Nación y de las provincias, que hace tres años se consideraba necesario resolver por vía constitucional. Recuerden los señores diputados que el gobierno del general Uriburu indicó, entre las medidas necesarias a efectuar por medio de una reforma constitucional, la delimitación de las actividades impositivas de la Nación y de las provincias.

Cuando discutimos el presupuesto último, tuve ocasión de decir que alguna otra iniciativa del gobierno del general

Uriburu se había realizado por sí sola: era aquella destinada a impedir que el Congreso pudiera fijar mayores gastos que los indicados por el poder administrador. Sin necesidad de la reforma constitucional, eso se ha cumplido y sin necesidad de la reforma constitucional podrá establecerse con precisión, en virtud de esta ley, cuáles son los impuestos nacionales y cuáles son los impuestos provinciales y quedará perfectamente delineado el campo común, el campo en que los límites hoy se confunden y en el cual el reparto habrá puesto fin a los conflictos.

Decir que esta reforma se hace sin enmienda de la Constitución, no es sino, decir que se hace sobre sus bases. Se desarrollan sus preceptos, se cumplen sus disposiciones, se convierte en realidad lo que fuera propósito de sus iniciadores.

El señor diputado Martínez hizo ayer una exposición exacta de antecedentes, cuando dijo que en virtud de ellos no era posible oponer a esta ley los principios resultantes de nuestro federalismo. Y es lógico que así sea, cuando el propósito de unidad viene de lo más profundo de la historia argentina y se le ha dado forma por los que le dieron forma a nuestro federalismo. Recordaba el señor diputado Martínez el Pacto Federal del año 1831, manifestación incipiente y balbuciente del deseo de un pueblo inorgánico, a tener unidad, a borrar diferencias, a abatir las murallas que lo separaban. Alguna vez yo he hecho la comparación entre ese texto y los artículos de la Federación norteamericana que precedieron a la Constitución actual de Estados Unidos en lo que se refiere al poder de la Federación en materia de comercio y en materia de impuestos, y he recordado que una y otra reservaron a los poderes locales facultades suficientes para anular los propósitos que perseguían: apenas se concedió un mero y vago derecho de los habitantes de un Estado a entrar y salir del territorio de los otros, una garantía débil de que los habitantes de las demás provincias no serían gravados en forma mayor que los de la pro-



pia, pero dejando incólume el derecho de las provincias a trabar el comercio exterior, de donde se derivaron, allí como aquí, las mismas consecuencias.

No es raro que lo expresen los autores argentinos con los mismos términos empleados en Estados Unidos, porque los hombres que sufrían acá las consecuencias de la dislocación conocían perfectamente la historia de Estados Unidos. Y si se recordaran palabras de aquellos hombres para fundar la decisión que hoy queremos tomar para unificar el país argentino en materia tributaria, verificaríamos que los términos caben perfectamente, que cada palabra estaría hoy en su lugar, que podemos ir a buscarlas en las resoluciones de todos los cuerpos representativos de la vieja Argentina y en los tratados que pusieron fin a nuestras disenciones civiles.

El Tratado de San Nicolás fué citado ayer por el señor diputado por la provincia de Córdoba, y yo recordaba — y hoy confirmé la cita — el mensaje en que López lo enviaba a la Legislatura de Buenos Aires. Las gabelas provinciales «han sido la causa principal de nuestra pobreza, de nuestro atraso, de nuestra disolución política», decía el patricio, como dijeron casi en términos análogos los hombres que antes de dictarse la Constitución norteamericana veían el derrumbe de la Federación y la posibilidad de que cada Estado tomara su propio camino por no entenderse en materia económica.

En el propio Congreso Constituyente, es el diputado Zapata el que dice absolutamente lo mismo que el doctor López. El general Mitre, cuando discutía la reforma constitucional —, en medio de aquella asamblea formada por partidarios activos y adversarios silenciosos, pues es sabido que la minoría opositora guardó una actitud digna declarando que toda reforma sería votada en contra, para llegar cuanto antes a la unión nacional —, la minoría de Ugarte, de Frías, de Pérez —; en esa convención mostró que palpaba la necesidad de la unión nacional y quería resolverlas por medio de la uni-

dad económica. Y se pueden citar palabras del general Mitre, que parecen hechas para esta reunión. «No participo — decía — de las ideas de los materialistas que creen que la base de todo gobierno político son los intereses económicos. Pero, como la comisión lo ha dicho en su informe, es uno de los medios más eficaces para interesar a los individuos y las sociedades, interesándolos en la quietud y la felicidad común». Y en seguida dice: «La mano poderosa de Carlos V y de Napoleón no ha podido dar forma regular ni reconstruir al imperio germánico, pero una simple liga económica de aduanas, el Zollverein, lo ha conseguido, y ella es hoy el centro de los destinos alemanes, mientras que se han roto los vínculos de la unión política que no consultaban los intereses de los pueblos.»

Yo recuerdo, de mis años de joven estudiante en Alemania, una cuantas estrofas cuyo origen no puedo precisar. He consultado a quienes podían estar interiorizados de las cosas de aquel país y no han podido contestarme; pero las recuerdo porque son una nueva manifestación de la necesidad de abatir vallas económicas si se quiere llegar a la unión. Refiriéndose al Zollverein, decían esas estrofas:

Denn er hat ein Band gebunden  
Um das deutsche Vaterland  
Und die Herzen hat verbunden  
Mehr als unser Bund dies' Band.

«El ha atado una cinta alrededor de la patria alemana y los corazones se han unido más por esa cinta que por nuestra alianza.»

Nosotros esperamos, señores diputados, que en el camino de la unificación esto ha de producir, evidentemente, la consecuencia de un acercamiento nacional, de una amalgama de los intereses provinciales en el interés nacional, aunque sea a costa de algunos sacrificios, los necesarios e indispensables para llegar a la unión, medida sin egoísmos y con amplitud, como cuadra a una asamblea que trata intereses argentinos entre el Estado federal y sus provincias y

no entre el Estado federal y Estados extranjeros. Esos sacrificios son necesarios para que este proyecto se convierta en ley y no quede en proyecto efímero como lo fueron algunas iniciativas que nuestros amigos de la izquierda han considerado menos objetables que la que se ha traído al seno de la Cámara.

He dicho alguna vez, haciendo la crítica de la actitud de ciertos diputados, que no podemos sentarnos aquí, como en una asamblea de ministros plenipotenciarios; que no se trata de delegados de las provincias, sino de representantes de la Nación, y que se incurre en abuso de la investidura al ejercitar el mandato de la provincia en la defensa exclusiva de sus intereses; pero también, señores diputados, concibo como absolutamente desprovista de razón la actitud de aquellos que se niegan a la consagración de un principio justo y progresivo porque beneficia demasiado a las provincias. No tendremos sino que felicitarnos de que los Estados federados salgan cuanto antes de la situación actual; y si para ello el reparto adquiere en algún momento el carácter de subvención federal, no hagamos de ello mayor cuestión, si estamos constitucionalmente autorizados para darlas, si políticamente, en el más amplio sentido de la palabra, es lógico que así lo hagamos y si económicamente no perturba, si por su cuantía no hace en las finanzas nacionales una brecha demasiado grande.

**Sr. Dickmann (A.).** — Seguramente el señor ministro mantendrá ese criterio con toda amplitud...

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Efectivamente.

**Sr. Dickmann (A.).** — Ya lo vamos a ver.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Para llegar a la unión nacional el sistema de unificación elegido es bueno. Tengo la pretensión de que es bueno y la jactancia de que es ingenioso, y la prueba objetiva la tengo en el hecho de que es la primera vez que un proyecto de este orden llega a esta Cámara con probabilidades de ser sancionado. No hay

en él nada misterioso, como son los guarismos contenidos en iniciativas que le han precedido y que en una manera muy simple pero absolutamente arbitraria disponían que la Nación recibiría el 53 % y las provincias el 47 por ciento, o la Nación el 61 % y las provincias el 39. ¿Por qué? Nunca ha habido una palabra explicativa de semejantes guarismos.

En cambio, en este proyecto todo es lógico, coordinado y puede explicarse. Supongo que los señores diputados ya lo habrán percibido. Se parte del principio de la recaudación actual, porque si no se garantiza a las provincias lo que ellas recaudan, es inútil ofrecerles la unificación. No hay un solo Estado que pueda admitir un sistema que no le asegure la percepción de los tributos con que contaba para poder desenvolverse. Pero, en seguida, se dice, sin ambages ni disimulo, que el sistema de la tributación actual es totalmente arbitrario, que es imposible tomarlo por base y que el argumento más convincente es la situación de la opulenta provincia de Buenos Aires. Si la inmensa Buenos Aires con la tercera parte de la población de la República, con la masa popular más rica del país recauda las cantidades irrisorias que pueden percibirse en sus cuadros fiscales, tiene que deberse ello a defectos de la percepción, a filtraciones en el impuesto que hacen imposible tomar la recaudación como un índice del consumo.

Yo sé que teóricamente es perfecta la resolución que diga: vamos a distribuir los impuestos al consumo en la proporción en que los consumos se hagan, pero como ese índice no existe y como en el futuro existirá menos desde que la unificación presupone la exclusión de los impuestos provinciales, es necesario tomar otro índice menos perfecto pero razonable y viable. Hemos adoptado el índice de la población y lo hemos adoptado con el aplauso de todos, hasta con aceptación del grupo socialista que lo tiene en una de sus proposiciones. Yo sé que el reparto del impuesto al consumo por la población es un subsidio a las provin-

cias pobres, pero no ha habido, afortunadamente, ni en la comisión ni en la reunión de representantes de los gobiernos de provincia, una sola voz de hombres de las provincias ricas que discuta a las provincias menos privilegiadas el derecho a percibir parte de los impuestos internos nacionales en proporción estricta a la población.

¿Cómo pasamos de un impuesto a otro? ¿Cómo se hace la evolución en el reparto para reemplazar el reparto inicial por percepción al reparto definitivo, que se hace de acuerdo a la población? Se hace en esta forma, que yo creo ingeniosa: cada año el 10 % pasa de un sistema a otro. Como eso podría traducirse en un pequeño decrecimiento de las entradas para las provincias de Córdoba, Santa Fe, Salta, se compensa la medida aumentando todos los años en 10 % la cantidad básica a distribuir, lo que, por otra parte, satisface la aspiración de las provincias de ver crecer la suma a repartir para compensar la disminución cuantiosa de los recursos que han tenido en los últimos años.

Yo he dicho en la comisión, defendiendo los intereses fiscales de la Nación, como decía ayer el señor diputado Ghioldi, que aumentada por resolución de los señores diputados que forman parte de la comisión la cifra básica, ya no era tan justo el aumento de 10 % por año. Tengo que repetir el concepto porque es exacto, pero no haré del asunto una cuestión capital porque no creo que esté el país en condición de disputar 3.000.000 de pesos ásperamente a las provincias hasta el extremo de poner en peligro el sistema, si eso no se acepta. A eso le llama «ceder» el señor diputado Ghioldi; dice que grito, pero que después cedo. Estoy esperando que el señor diputado indique la solución que debe adoptarse para imponer al Congreso la solución que uno quiere, si la mayoría no quiere adoptarla. Si lo hiciera me dirían que hoy soy un fascista.

Saben los señores diputados que el reparto en la forma indicada se desarrolla en el término de 10 años, pero

que a partir de 1940 se produce una novedad. Hasta 1939 las provincias tienen cantidades fijas a percibir, cualquiera sea el rendimiento de los tributos internos unificados. La Nación tiene la cantidad variable representada por el saldo entre el conjunto percibido y las sumas entregadas a las provincias. Después de 1939 la situación cambia. Las provincias y la Nación corren en adelante la misma suerte. El término medio de lo que reciben las provincias en los años 1938 y 1939, se compara con el término medio recibido por la Nación en esos años y en adelante ésa es la proporción definitiva de reparto entre Estado federal y Estados federados. Como ven los señores diputados, no es la fijación de un guarismo absoluto y arbitrario, sino la consagración de los hechos que se produzcan en años que no están sometidos a nuestros actos, el que servirá de pauta para un reparto equitativo en el futuro.

No creo que ese aspecto del problema pueda ser conmovido por la proposición socialista de efectuar el reparto por población, supongo que instantáneamente. Advierto, señores diputados, que tengo muy buena voluntad para interpretar las cosas que están mal escritas; que me esfuerzo en desentrañar su sentido, aunque parezcan no tenerlo. Por ejemplo, esta proposición socialista dice: reparto del producido de los impuestos unificados en razón de la población de las provincias, territorios y Capital Federal. Si esto se toma al pie de la letra, quiere decir que a la Nación no le toca nada, o cuando muero le toca la parte de la Capital y territorios nacionales, hipótesis esta última que se desvirtúa porque más adelante habla de dar una participación a la Capital y territorios. No puede querer decir eso. Sé que no quiere decir eso, y no sería de buena fe que me aferrara a una interpretación literal que no condice sin duda con lo que sus autores quieren decir. Deben haber querido decir que ha de hacerse ese reparto desde ya por población. Y afirmo que en esa hipótesis, que es la

mejor en que pueda ponerse uno para interpretar ese texto, la solución no es mejor sino infinitamente peor que el sistema ideado por el Poder Ejecutivo y aceptado por la comisión.

El paso instantáneo al reparto por población significaría dar a las provincias de Corrientes, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja, cantidades siderales de dinero con las cuales no tendrían materialmente nada que hacer. No se concibe que alguna provincia que cobra 90.000 pesos pase a cobrar el año que viene 800.000 pesos. Es inverosímil y no es lógico que a la provincia de Corrientes que hoy tiene 300.000 pesos, le toque el año próximo 5 ó 6 millones de pesos por este tributo. No hay razón para admitir semejante criterio. Evidentemente, el sistema gradual, por etapas, que adoptó el Poder Ejecutivo y la comisión, es mejor.

Parece que no tiene igual solidez, a juicio de los diputados socialistas, la proposición del gobierno, incorporada al despacho, según la cual se daría lo que hoy perciben a las provincias que cobran impuestos sobre la producción — tengo que emplear esa locución para no provocar el justo resentimiento del señor diputado Simón Padrós en cuanto a la denominación de provincias productoras. — Parece que ese reparto no es bien visto y que sería más admisible, a juicio de algunos, la derogación lisa y llana de los impuestos provinciales, con una indemnización por esa supresión: empleando los términos precisos de la resolución socialista: «extinción progresiva en un plazo no mayor de 10 años de las cuotas que se reconocen a las provincias productoras por gravar el consumo nacional».

Afirmo que entre la proposición socialista y la del Poder Ejecutivo y la comisión, no hay diferencias de fondo: lo que nosotros proponemos reducir a 50 % en el término de la ley, los señores diputados proponen reducirlo en el 100 % en el término de 10 años.

Nosotros no estereotipamos un sistema de reparto para toda la vida; no decimos a las provincias que hasta el final de los siglos percibirán las sumas

que el proyecto indica; no llega más allá del 50 % el descenso, porque el término de la ley es limitado. Dejémosles algo a las generaciones futuras y esperemos que el Congreso dentro de 20 años tenga ocasión de resolver con justicia el problema que entonces existirá. Por el momento, decrece lo que se da a las provincias por concepto de impuesto a la producción, con un ritmo de 2 ½ % por año, según el proyecto, en vez del 5 % indicado por el gobierno.

Alguien ha dicho con alguna justicia que la adopción de este sistema importa reconocer entradas fijas a las provincias en proporción a los malos gobiernos que han tenido, y también que las provincias van ahora a felicitarse de haber tenido ciertos gobiernos y que en algunas plazas de ciudades de provincia tendrán que levantarse algunos monumentos. Yo no sé si en eso no hay un poco de exageración. Que le toque a una provincia una suma algo mayor en el reparto, dudo que le compense el grave mal que ciertos gobiernos le han inferido. La acumulación de deudas cuantiosas, que las provincias a que se alude tendrán que solventar con el sacrificio de sus generaciones futuras, no está compensado desgraciadamente por las mínimas cantidades que este proyecto les atribuye más allá que lo que se supone justo. No podrán sino felicitarse las provincias que, aun cuando no les toque hoy en el reparto las sumas que ven atribuir a sus hermanas, se han salvado de los efectos de cierta clase de gobiernos que es de esperar no se repitan.

**Sr. Dickmann (A.).** — Si se refiere a San Juan, se habría salvado antes de la ley.

**Sr. Godoy.** — Pero evidentemente el daño económico que han sufrido esas provincias, como la de San Juan, por los malos gobiernos...

**Sr. Dickmann (A.).** — Parecido a Mendoza, en el aspecto del vino...

**Sr. Godoy.** — ... no le será compensado con el aumento que puedan recibir como ayuda o compensación por impuesto a la producción.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Creo que las provincias que no han sufrido semejantes males y que han gozado de gobiernos más respetuosos y serios, nada tienen que envidiar a las demás. No lo deploro Corrientes, ni se queje Salta.

**Sr. Dickmann (A.).** — ¿Patentes de «grandes» gobiernos está repartiendo el señor ministro?

**Sr. Ministro de Hacienda.** — No tengo empeño en repartir patentes de grandes gobiernos, pero es notorio que en ninguna de las dos provincias se han hecho las cosas que conocemos de otras.

**Sr. Dickmann (A.).** — Yo le preguntaría a algún diputado por Corrientes, si suscribe las palabras del señor ministro.

**Sr. González (B. S.).** — Sí, señor diputado; porque Corrientes en su pobreza sabe vivir con sobriedad, dignidad, altivez y patriotismo.

**Sr. Contte.** — Como ahora no está en discusión la situación política e institucional de la provincia de Corrientes, no deseo introducir en este instante una cuestión ajena al debate.

—Hablan simultáneamente varios señores diputados.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Pero hay desde el punto de vista del presupuesto y de las entradas fiscales, una consideración que no puede dejar de percibirse y es el principio de que lo que se da a las provincias, lo que percibirán, es lo que necesitan para solventar sus presupuestos basados en esas entradas. Las provincias que no están en esa situación, que no han edificado sus presupuestos sobre semejante base, no van a perder nada en el futuro, mientras que sus congéneres ven la línea decreciente futura de sus entradas, que se traduce en los guarismos absolutamente exactos que ha indicado hoy el señor diputado Simón Padrós.

El reparto a las provincias que gravan la producción de sus artículos es necesario. Esto no quiere decir que la Nación considere que los tributos que

han cobrado sean legales y justos. En el mensaje del Poder Ejecutivo se expresa el juicio que le merece la atribución tomada por las provincias, de gravar el consumo nacional. Un poco las ha redimido del cargo mi amigo el señor diputado Ghioldi, que ha expresado ayer, refiriéndose al azúcar, que el impuesto no lo pagaba la población consumidora de la República, sino los industriales de esas provincias, por tener precio fijo el azúcar y por haber llegado a ese precio máximo. En cuanto eso sea exacto, que no lo es, sino en un breve periodo, el impuesto que ha existido en las provincias cambia de carácter: ya no es un tributo indirecto que pesa sobre la población de la República, indebidamente llevado a las arcas provinciales, sino que es un impuesto directo sobre la ganancia de los industriales de las provincias, lo que le da una base de justicia a su cómputo entre las entradas provinciales indiscutibles.

No creo, sin embargo, que esa interpretación sea del todo exacta; me atengo a lo dicho en el mensaje y sostengo que no armoniza con nuestro sistema constitucional y legal la actitud de las provincias de imponer impuestos al consumo nacional, pero debo respetar los hechos. La Suprema Corte de Justicia nacional, juzgando esa materia, ha declarado que tanto los Estados provinciales como la Nación tienen para cobrar los impuestos, atribuciones que invocan. Pronunciada la Corte en ese sentido, creo que las proposiciones tendientes a desconocer la facultad de las provincias, lo que se quiere hacer por ley, es ineficaz.

Hay que armonizar los derechos de la Nación y de las provincias. Y es lo que se hace. Ninguna provincia de las de ese grupo aceptaría el sistema si no se le diera la participación que el Poder Ejecutivo propone y que la mayoría de la Cámara ha aceptado.

No quedaría, entonces, como impugnabile en el proyecto de unificación en esta parte, sino el famoso artículo 26 y el principio de la consolidación.

El principio de la consolidación de los impuestos, sobre el cual ayer hubo cierta discusión dialogada, es demasiado sencillo para no ser comprendido. No es concebible que provincias como las del Norte, que viven de la industria del azúcar, puedan aceptar un régimen de unificación de los impuestos si no saben qué impuesto va a tener el azúcar, por lo menos por un tiempo dado.

El derecho del Congreso a consolidar impuestos es indiscutible; lo hacemos todos los días y sería ilógico que lo negáramos cuando vamos a tratar con las provincias. La Nación puede obligarse frente a potencias extranjeras a gravar determinados artículos, y, ¿no puede hacerlo frente a las provincias? Yo afirmo que importa el ejercicio del derecho, no la renuncia del derecho, la fijación de esos impuestos; que porque se tiene la facultad de imponerlos se puede pactar la obligación de no imponerlos.

Y la consolidación ha sido también un poco justificada por el señor diputado Ghioldi en las consideraciones que hizo sobre el precio del azúcar. Si el azúcar tiene un límite en su precio, ¿qué más lógico para los industriales, para toda la población de las provincias, que decir: «yo necesito saber qué impuesto se va a cobrar», si el precio más el impuesto no puede pasar de los 41 centavos? ¿Cómo conciben los señores diputados que las provincias productoras de azúcar adhieran al sistema sin saber el impuesto que se va a imponer, y en consecuencia el saldo que va a quedar a los productores? Es evidente que eso no es posible y es evidente, entonces, que la consolidación se justifica.

En cuanto al artículo 26, que no vino en el proyecto originario, yo le atribuyo el alcance que creo le ha dado el señor miembro informante de la comisión, diputado Martínez. No les estamos reconociendo a las provincias el derecho a hacer lo que ahora hacen en materia de regulación de la producción. No se lo reconocemos, ni se lo dejamos de reconocer. Ellas lo están ejer-

citando y está en juicio tal facultad. El supremo tribunal dirá quién tiene razón.

Lo que esta ley dice a las provincias es lo siguiente: no invoquen el pretexto de la regulación cuantitativa de la producción para percibir en ningún caso impuestos para las provincias; limiten la producción o dejen de limitarla, ésa es cuestión provincial; pero lo que no es tolerable es que, borrando el sistema tributario provincial, los impuestos a la producción reaparezcan con el pretexto de regulaciones cuantitativas. Si se empeñan en hacerlo, si creen necesario cobrar dinero a título de pena, tienen un motivo para no entusiasmar-se: el producido no irá a las áreas provinciales sino a las áreas nacionales.

**Sr. Martínez.** — Lo que dice el señor ministro coincide con lo que he expresado en nombre de la comisión.

**Sr. Dickmann (A.).** — Se trata de una limitación al presunto derecho de las provincias a esa regulación.

**Sr. Martínez.** — No, señor diputado.

**Sr. Dickmann (A.).** — Es lo que ha dicho con razón el señor ministro, porque solamente así tendría sentido esa disposición.

**Sr. Martínez.** — El señor ministro y yo hemos dicho lo siguiente: el Congreso no se pronuncia en forma alguna acerca de si las provincias tienen o no derecho para regular la producción. Es una cuestión que escapa a nuestra jurisdicción y esfera, pues ello debe discutirse ante la Corte Suprema. Pero si mañana nadie le contradice este derecho a las provincias, que no sirva él de pretexto para que las provincias, so color de reducir el monto de la producción, establezcan disfrazadamente un impuesto interno. Si ellas establecen tal impuesto o tal multa, no ingresará a las áreas provinciales, sino que deberá ir al fondo nacional.

**Sr. Dickmann (A.).** — Exactamente lo que he manifestado, pero en menos palabras. Es una limitación a las provincias y una valla a los incentivos de obtener recursos.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Este despacho, señores diputados, es el más seriamente estudiado que he visto. Hace muchos años que he entrado a esta Cámara. He visto cuerpos de muy distinto aspecto y comisiones de composición muy variada; pero no he visto un asunto que se haya estudiado con la meticulosidad, con el acopio de antecedentes e información con que lo ha sido el proyecto de unificación de impuestos. No han sido sólo los señores diputados los que han ido escudriñando hasta el último detalle de este complejo proyecto de ley, sino que también lo han hecho los gobiernos provinciales, los miembros de las legislaturas de las provincias, a tal punto que hoy se podría tomar examen sobre el sistema tributario de las provincias con un resultado totalmente distinto de lo que pasaba hace cinco meses.

Esta es una ley bien estudiada. Si tiene defectos, como los tendrá, son los que pueden corresponder a una perturbación colectiva del entendimiento, pero no pueden deberse a precipitación o a error individual; tendríamos que habernos equivocado muchos.

Es más generoso, como hemos dicho, el proyecto despachado que el proyecto del gobierno; pero lo es en cuanto a las provincias que no tienen impuestos a la producción sino al consumo. Respecto a las provincias que gravan la producción el proyecto disminuye lo propuesto por el Poder Ejecutivo. Por esta ley se daría a las provincias, por sus impuestos al consumo 6.400.000 pesos más que lo propuesto por el Poder Ejecutivo, y se daría a las provincias en razón de reparto por impuesto a la producción, 1.700.000 pesos menos. En resumen: 4.700.000 pesos más.

Pero a esa suma se ha agregado otra de 8.000.000 en el proyecto de reparto del impuesto a los réditos y a las ventas. Yo no sé si el señor diputado Ghioldi dirá que también en eso he cedido.

**Sr. Noble (J. A.).** — No ha cedido. (Risas).

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Por lo pronto no será la opinión de una parte de la oposición. Y por lo demás, debo hacer notar esta circunstancia: de los 8.000.000 de aumento, 3.000.000 corresponden a la Capital Federal, y es a pedido de los diputados socialistas.

**Sr. Dickmann (A.).** — Una vez que se hacía reparto, evidentemente lo justo era que lo hiciera para todos, inclusive para la Capital.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Sí, señor diputado, pero el ministro planteó en la comisión este asunto: No me opongo, dije, a que se dé a la Capital los recursos que se piden, pero sí creo que esa suma debe sacarse del total que haya de distribuirse a las provincias. Y fué precisamente el señor diputado Dickmann quien se opuso.

**Sr. Dickmann (A.).** — Como alude a mi opinión el señor ministro, me ha de permitir que le conteste.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — ¡Cómo no, señor diputado!

**Sr. Dickmann (A.).** — El señor ministro sabe que en el seno de la comisión hemos sostenido que si hay un impuesto que debe ser nacional en su integridad, es el de la renta, sin excluir el derecho de las provincias para establecerlo también. Pero así como el señor ministro contempla situaciones reales, de hecho, nosotros también las hemos contemplado. Algunas provincias se disponían, y así lo anunciaron, a establecer el impuesto provincial a la renta si no se les daba participación en el impuesto nacional. Fué así que se fijó el 85 % para la Nación y el 15 % para las provincias, con protesta de algunos de mis más estimados colegas de la comisión.

Cuando se planteó el reparto a la Capital, sólo resultaba factible si no se tocaba la parte correspondiente a las provincias. Era evidente, entonces, que había que aumentar el porcentaje.

Y el señor ministro, que tuvo criterio elástico en el impuesto a la renta, lo tuvo rígido en cuanto a la participación de la Capital y territorios nacio-

nales en el impuesto de unificación, punto que vamos a plantear en su oportunidad.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Lo que acaba de expresar el señor diputado Dickmann me es de una utilidad magnífica.

**Sr. Dickmann (A.).** — ¡Siempre le son útiles los argumentos: al revés o al derecho!

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Vamos a verlo. Si no llego a tener éxito, el señor diputado se jactará de ello; si lo tengo, ¿qué se le va a hacer?

Estaba sosteniendo que no podía el Poder Ejecutivo evitar que la generosidad se costeara por el tesoro federal. No sé si pretenderán contestar la verdad de ese aserto, en lo que respecta al reparto a las provincias, pero no lo pueden hacer respecto a la Capital.

Lo que decía el señor diputado, respecto a la distribución entre las provincias y la Capital, es exacto. Yo he creído, y sigo creyendo, y hasta que me demuestren lo contrario afirmaré que no hay por qué dar un centavo a la Capital...

**Sr. Dickmann (A.).** — Pero, ¿en dónde para la generosidad, a la que ha cantado un himno el señor ministro?

**Sr. Arce.** — Es absolutamente exacto lo que afirma el señor ministro, y es el verdadero criterio constitucional.

**Sr. Dickmann (A.).** — No se trata de la Constitución; se trata de pesos.

**Sr. Arce.** — De economía constitucional.

**Sr. Presidente (Noble R. J.).** — Sírvanse no dialogar los señores diputados.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Sostengo que no corresponde dar a la Capital un centavo en razón de la unificación, y eso resulta a todas luces claro para quien lea, siquiera sea por las tapas, el proyecto. Si para la unificación se exige a las provincias que desistan de un recurso y se les dará otro, a la Capital que no le quitamos ninguno, ¿en razón de qué le vamos a dar algo?

**Sr. Dickmann (A.).** — Se quita a los habitantes de la Capital una parte de

su patrimonio al aumentarles los impuestos al consumo, que serán elevados únicamente para la Capital y los territorios nacionales.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Por lo pronto queda sentado que tiene bases lógicas, y no de otro orden, el no darle más recursos a la Capital de la República. Soy hijo de la Capital de la República, cosa que no le pasa a algunos que me contradicen; tengo con ella vinculaciones tan fuertes que no serán rotas por nada en el mundo, pero, sin embargo, no creo que la Capital de la República tenga el derecho que se alega.

Pero, señores diputados, por arriba del proyecto ha planeado una observación de otro orden: son los malditos impuestos al consumo, se agrava la situación de los consumidores, se echa más cargas sobre las espaldas ya debilitadas del pueblo argentino... Y no puede dejar de expresarse, con este motivo, que el proyecto de unificación mandado por el gobierno desgrava al consumidor. La unificación desgrava al consumidor: el conjunto de los impuestos al consumo que resultará de los impuestos unificados aun a las nuevas tasas, es menor que la suma de los impuestos que hoy percibe la Nación con más los que perciben las provincias.

Por eso pretendía el Poder Ejecutivo resarcirse de esas pérdidas — porque en alguna forma tiene que hacerlo — con dos medidas. Una es el famoso impuesto a la herencia...

**Sr. Pena.** — ¿Y no habría unificación, señor ministro, sin impuesto a la herencia?

**Sr. Noble (J. A.).** — Impuesto que va a revivir de sus cenizas...

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Que va a revivir de sus cenizas, porque no es posible que deje de sancionarse, porque da carácter a esta iniciativa y por que la justifica ante los ojos de la opinión.

**Sr. Dickmann (A.).** — Reconozca al menos, señor ministro, que hemos sido sus mejores aliados en la comisión para este impuesto.



**Sr. Ministro de Hacienda.** — Me canso de aplaudirlo.

**Sr. Corominas Segura.** — ¡Dios lo libre de estos aliados que se le presentan!

**Sr. Dickmann (A.).** — Los únicos que deben tener cuidado son los felices herederos...

—Varios señores diputados hablan a la vez.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — ¡Por favor!

**Sr. Presidente** (Noble R. J.). — Sírvanse no interrumpir los señores diputados.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Si ha habido un miembro del Congreso y si hay hoy un miembro de la sala que no tiene miedo a elogiar públicamente a los adversarios, supongo que no se me discutirá a mí ese título. Me canso de aprobar, de aplaudir, de apoyar iniciativas contrarias. Creo haber podido pronunciar en mi ya larga actuación, alguna exposición interesante: nunca he tenido el honor de ser aplaudido por ciertas personas. *(Risas)*.

**Sr. Pena.** — No se puede, señor ministro. Ahí está la dificultad. Porque usted ahora no sostiene lo mismo.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Yo invoco el antecedente: aplaudo a los contrarios y ellos no me aplauden: debo hablar peor que los demás.

**Sr. Pena.** — Cuando hablamos como usted, se enoja.

**Sr. Dickmann (A.).** — Como nos da la espalda, no ve cuando aplaudimos. *(Risas)*.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — La otra medida no es sino una tendiente a impedir que se evada el impuesto a los réditos. Es sabido que hoy el impuesto global, como se llama al que se cobra por entradas mayores de 10.000 pesos, se elude por lo que hace a las rentas provenientes de sociedades anónimas. Se ha presentado con este motivo un proyecto que ha contado con la aprobación unánime de la comisión.

Pero no obstante el hecho positivo de que sólo queremos rehacer el tesoro

federal cobrando por otro conducto lo que antes se cobraba por impuestos nacionales y provinciales, el hecho es que la protesta contra el aumento de impuestos es evidente; la oímos todos los días, llena páginas de los diarios, ocupa el tiempo de los diputados con notas que continuamente se presentan, aunque nada de eso sea justificado. Es una prueba más de que cuando pocos gritan y muchos callan hacen más ruido los que gritan. Los que gritan no tienen razón, pero hacen más ruido.

El impuesto a las herencias, como con toda razón lo expresaba el señor diputado Pena, es indispensable para la unificación. Sé la resistencia que tiene entre mis amigos demócratas nacionales, y que hasta el pequeño grupo correntino ha impuesto a nuestro amigo Bruchou la obligación de no subscribir el despacho. Pero no tiene razón. Es infundado cierto temor de carácter federal. Se supone que ésta es una invasión escandalosa en las esferas provinciales y que vamos a imponer, contra la voluntad de los estados federales, un tributo sobre las herencias que se transmiten en las provincias. Nada menos exacto. No habrá, por virtud del proyecto, impuesto en las provincias sino en aquellas que directamente quieran que lo haya, y que podrían establecerlo sin autorización del Congreso nacional.

Tampoco es justificada la grito en cuanto a la tasa del impuesto, que por ser escalonado es mucho más benigno de lo que a primera vista parece. Para herencias de \$ 1.000.000, el impuesto no excede nunca de \$ 80.000. El impuesto resiste con ventaja la comparación con el que existe en otros países que no han abolido la familia, que no han destruido los hogares, en donde no se ha producido el cataclismo que aquí se anuncia de sancionarse el proyecto. Yo declaro haber visto dividirse más de una familia por cuestiones de herencia, muchas más que las que se han dividido por no tener herencia. *(Risas)*. Pero anticipo que este proyecto, aun para los que temen su acción deletérea, es de una benignidad incom-

parable. El impuesto similar inglés y la tasa federal a las sucesiones en Estados Unidos, como ha dicho ayer con exactitud el señor diputado Ghioldi, sobrepasan en mucho al nuestro. Y existe esta circunstancia agravante: si en alguna parte es justificado el impuesto a las herencias, es en la República Argentina. Cuando discutimos años atrás con mi actual colega el ministro Duhau un impuesto similar por despacho que entonces firmaron todos los miembros de la mayoría conservadora, yo comparé el monto de las sucesiones en la República Argentina con el monto de las sucesiones inglesas, la concentración de la riqueza que se trasmite por sucesión en la ciudad de Buenos Aires, comparada con las de Inglaterra. Y llegaba a esta conclusión verdaderamente asombrosa: en la Inglaterra del mayorazgo, en la Inglaterra aristocrática, en la Inglaterra de duques y señores de fortuna de origen feudal, la propiedad no está más concentrada que en la República Argentina, pese al Código Civil y pese al carácter aluvional de ciertas fortunas.

**Sr. Dickmann (E.).** — ¿El señor ministro tendría la gentileza de decirme sobre cien familias argentinas cuántas dejan herencia?

**Sr. Ministro de Hacienda.** — No, pero tengo este otro dato...

**Sr. Uriburu.** — ¡Ahora ninguna! (Risas).

**Sr. Dickmann (E.).** — Entonces, ¿qué miedo tienen al impuesto?

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Puedo dar al señor diputado este otro dato, que es más interesante: en la República Argentina el conjunto de bienes de las herencias de más de \$ 1.500.000, comparadas con las herencias de 100.000 libras esterlinas en Inglaterra son proporcionalmente al total de las herencias tan importantes en la Capital como en Inglaterra. Y como el señor diputado Duhau dijera entonces que eso sería en la Capital y no en las provincias, hice la investigación en Buenos Aires y llegué a esta conclusión: que es allí casi el doble la concentración de la riqueza.

**Sr. Noble (J. A.).** — ¿Eso está de acuerdo con los principios de la moral cristiana?

**Sr. Ministro de Hacienda.** — En eso la moral cristiana no tiene nada que ver.

**Sr. Arce.** — El señor ministro trata asuntos que no están en discusión y nuestro colega por Santa Fe nos invita a una polémica sobre la Convención de Buenos Aires.

**Sr. Uriburu.** — Es preparando la modificación que tienen en vista.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — La digresión era necesaria para dar un aspecto de conjunto sobre la reforma.

**Sr. Pena.** — Podría darnos el señor ministro las cifras muy útiles que ha enunciado así de memoria, ya que tiene hecha una investigación sobre fuentes oficiales que prueban acabadamente la veracidad de lo que acaba de decir: las fortunas escandalosas que hay en la provincia de Buenos Aires y en la Capital son mayores que las de países que se suponen los más ricos del mundo.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — No tengo inconveniente.

La digresión se ha justificado sólo por el deseo de dar una impresión de conjunto y para desvirtuar lo que se dijo ayer sobre la pertinencia con que la representación supuestamente oligárquica del país quiere echar sobre las espaldas del pueblo todos los tributos. Reivindicando para mí el honroso título de oligarca he presentado esa iniciativa que espero contará con el voto de la diputación de la derecha, como contó con el voto de ese grupo cuando formaba la unanimidad de la representación de Buenos Aires y se sancionaron impuestos a la herencia que son de los bastante pesados.

Pero, señores diputados, parece que no tiene importancia lo que se ha dicho acá en repetidas ocasiones, sobre los impuestos. Hay frases estereotipadas que no se cambiarán. Se modifica el sistema tributario, pero el juicio que se hace de él sigue siendo el mismo. Ayer se nos ha dicho que el sistema tributario reposaba sobre la obra de Rosas y de Pellegrini. Es la primera vez que oigo a un miembro del Partido Socialista hacer nacer alguna

cosa útil de iniciativas de Pellegrini. Alguna vez me han dedicado ciertos editoriales por la debilidad que naturalmente tengo para la memoria del gran argentino que fué único en su género: estadista de verdad, con coraje, con decisión, con un desprecio olímpico por la calumnia, digno en el poder y en la adversidad, magnífico como un señor, leal como un caballero. Sí, señores diputados: vayan reviendo algunos juicios, porque a medida que tendemos nuestra vista al pasado buscando el origen de cosas grandes y nobles, la figura de Pellegrini aparecerá con su silueta inconfundible, inspirando todo lo bueno y sirviendo de ejemplo para generaciones y generaciones de argentinos. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos!*).

Pero no bastará, señores diputados, que el binomio Rosas-Pellegrini entre en el léxico político si se quiere tener el panorama total del sistema tributario argentino: habrá que agregarle otro nombre: Uriburu. De él derivan los impuestos a los réditos que no fueron capaces de sancionar los congresos democráticos ni las asambleas demagógicas que hemos conocido. (*¡Muy bien!*). Fué necesario que el gobierno supuestamente más conservador que ha tenido el país se estableciera, para que de la inspiración de sus hombres y de la decisión de sus ejecutores resultara la incorporación al sistema tributario argentino de un impuesto que figura entre las fuentes de renta de todos los países cultos.

Sirva el ejemplo, señores diputados, para disipar de una vez esta leyenda de la división de la política argentina, agrupando de un lado todas las fuerzas regresivas y dejando el privilegio exclusivo de las ideas de progreso al grupo minúsculo que sólo por un azar puede ocupar un buen tereño de la representación argentina.

**Sr. Ghioldi.** — ¿Y por qué derecho propio está usted en un ministerio? ¿Por qué fuerza política propia?

**Sr. Ministro de Hacienda.** — ¡Ah, señor diputado! Estoy por la fuerza política que significa algo sobre lo que

me ocuparé dos minutos después, recogiendo y terminando con algunas aseveraciones que ayer se han formulado.

A la reforma tributaria de Uriburu, seguirá ésta de distinto carácter, pero no menos fecunda, que se recordará por años si llega a ser sancionada y que aparecerá como una de las grandes obras de la administración actual, probando con el ejemplo lo que pueden gobiernos y congresos empeñosos e inspirados en otros sentimientos que los que han movido fuerzas cuyo caso esperamos sea definitivo. Es absurdo que se añore por una parte de la población argentina regímenes que sólo por el olvido de sus atributos y de sus condiciones pueden presentarse como un ideal a la masa electora nacional. Y es imposible, señores diputados, que se sume a los que buscan la vuelta de algo que indefectiblemente se fué, una fuerza que es progresiva y que es culta, que representa como nosotros la misma civilización, que no puede en ningún caso tener concomitancias ni reconocer similitudes con el caudillaje destructor que por tantos años esterilizó el progreso de la legislación argentina. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*).

El señor diputado decía ayer, oponiéndolo a mi propio caso, que el ex ministro de Inglaterra, Snowden, salido de las filas del Partido Laborista, había llevado a la representación nacional un proyecto de impuesto a la tierra; que esperaba que otro ministro surgido del Partido Socialista hiciera una cosa semejante. Yo no sé, señores diputados, si tendré oportunidad de instar a los cuerpos legislativos para que sancionen determinadas medidas de ese carácter. Sé que he iniciado esta ley. Sé que cuando se haga la historia del régimen fiscal argentino, si esta iniciativa es sancionada, mi nombre no aparecerá omitido. Y sé, señores diputados, que en un momento álgido de la vida argentina, hice lo que Snowden quería que se hiciera, y dejé de hacer lo que el mismo Snowden declaró que no podía hacerse: huir del barco en ruinas;

desertar de la función pública cuando era necesario el esfuerzo de todos. Ese esfuerzo lo hemos prestado, contribuyendo a la formación política de este gobierno, y espero que con este proyecto habré contribuido con algo a su éxito ante la opinión, que no será sino obra de estricta justicia. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos prolongados. Numerosos señores diputados se aproximan y felicitan al señor ministro.*)

9

## CUARTO INTERMEDIO

**Sr. Presidente** (Noble R. J.). — Invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio hasta la hora 22.

—Era la hora 21 y 5.

—A la hora 22 y 32 minutos:

10

UNIFICACION DE LOS IMPUESTOS  
INTERNOS

**Sr. Presidente** (Ferreira). — Continúa la sesión. Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Ghioldi.** — Ocuparé otra vez la atención de la Honorable Cámara, aunque en esta oportunidad por breves momentos, para contestar las manifestaciones hechas por el señor diputado Simón Padrós y algunas de las consideraciones formuladas esta tarde por el señor ministro de Hacienda. Y diferentemente de lo que ha hecho el señor ministro, que recién al final se ocupó de su persona, yo voy a comenzar estas breves palabras refiriéndome a alguna circunstancia personal.

El elogio suele ser una manifestación socialmente plausible, cuando resulta una expresión espontánea del espíritu. Es también un instrumento político a veces de tanto o de más valor que la crítica o el ataque personal y, en fin, puede ser en manos de una persona hábil, esgrimido como medio de introducir en algún bloque la eizaña, la desconfianza o el recelo.

**Sr. Simón Padrós.** — ¿Me permite el señor diputado una brevísima interrupción?

**Sr. Ghioldi.** — ¡Cómo no!

**Sr. Simón Padrós.** — Cualquiera sea el concepto que exprese el señor diputado, no retiro el elogio.

**Sr. Ghioldi.** — Muchas gracias.

No descarto en las palabras amables que se han oído esta tarde respecto de mi persona alguna partícula de sinceridad; pero siendo éste un cuerpo político, es evidente que presentar a un diputado de los más modestos de este sector en la condición destacada con que se lo ha querido presentar, más que un elogio parece un juicio destinado a provocar recelo, que no alcanzará, sin embargo, sus objetivos, ya que ni yo ni mis compañeros de sector nos dejaremos perturbar.

Saben los compañeros de mi grupo, como lo sabe también la Cámara, que tengo el suficiente equilibrio de mi inteligencia y de mis sentimientos para saber ubicarme exactamente en el conjunto de los valores que atesora este grupo; y sabe la Cámara, el partido y mi bloque, que soy hoy y seré mañana discípulo de las grandes cabezas que existen en el sector socialista y que, sistemáticamente, son desconocidas por el señor ministro de Hacienda. (*¡Muy bien!*).

Paso ahora, señor presidente, sin conceder a este aspecto mayor importancia, a hacerme cargo de algunas manifestaciones hechas en primer lugar en la exposición del señor diputado Simón Padrós, quien esta tarde ensayó briosamente, como en otras oportunidades, una composición para ser presentada en los juegos florales de cualquier ciudad capital de provincia.

**Sr. Godoy.** — Y ahora en la Capital Federal.

**Sr. Ghioldi.** — También.

El señor Simón Padrós, con la imaginación propia de los hombres que habitan en las zonas próximas al trópico, ha tomado el asunto de la unificación de impuestos, ensayando una composición poética de no sé qué alcance ni de qué altura, pero que ha servido para de-

mostrar la insuficiencia de la argumentación que posteriormente ensayó en el discurso.

Tuve la intención de interrumpir al señor diputado por Tucumán — quien me reprochó en primer término no haberme ocupado mayormente del despacho — para preguntarle en qué artículo del despacho había el canto y la musicalidad de su palabra.

La exposición del señor diputado ha sido endeble como pocas.

**Sr. Simón Padrós.** — Estaba, entonces, en el mismo terreno que la suya.

**Sr. Ghioldi.** — Nos decía que la diputación socialista no debe insistir en clasificar las provincias en productoras o consumidoras, cuando la verdad de los hechos es que la clasificación política, económica y fiscal no ha sido hecha por la diputación socialista, sino por la conducta impositiva de algunas provincias que, so pretexto de gravar la producción provincial, han castigado el consumo nacional.

La clasificación no depende de los adjetivos ni de los párrafos del discurso, sino de los efectos mensurables de la política impositiva de las provincias del Norte y Oeste.

**Sr. Simón Padrós.** — ¿Si me permite?

¿Conoce el señor diputado el impuesto a la producción del trigo, del lino y del maíz que tiene la provincia de Santa Fe, y que sale de su territorio?

**Sr. Ghioldi.** — Conozco ese mal impuesto que existe en la provincia de Santa Fe y de este sector ya se han pronunciado, en más de una oportunidad, palabras contrarias al gravamen.

**Sr. Dickmann (A.).** — ¿No recuerda el señor diputado por Tucumán, que estando presente el ministro de Santa Fe fué el diputado que habla que le rogó que cuanto antes cumpliera con la promesa de abolir ese impuesto?

**Sr. Simón Padrós.** — No recordaba.

**Sr. Dickmann (A.).** — Se lo hago recordar. Está en la versión taquigráfica.

**Sr. Ghioldi.** — Utilizando sus brillantes cualidades literarias, el señor diputado se refirió al aspecto técnico de la industria tucumana, pintándonos

el silencioso drama que aquella provincia vivía desde hace largos años. Con una emoción histórica que yo admiro, compara el esfuerzo de los conquistadores del desierto, que se hizo armas al hombro, con el esfuerzo de algunos capitalistas tucumanos que, amparados por la alta barrera aduanera, hicieron pingües ganancias. Habló con emoción de aquella hora, no muy lejana, en que la industria de Tucumán y de Jujuy sustituyó la vieja caña criolla por la caña de Java. Pero silenció el hecho de que simultáneamente se vendía el azúcar argentina en la República a precios que no habían sido igualados hasta entonces.

**Sr. Simón Padrós.** — Como no venía azúcar extranjero más barato...

**Sr. Ghioldi.** — En 1920, cuando se obtuvo aquella mala ley de exportación de azúcar que combatió con documentación ilevantable el diputado Justo, hemos visto vender azúcar a cuatro pesos en la provincia de La Rioja y expendir paquetes de azúcar en las comisarias de Buenos Aires para conjurar de esa manera la gran «contribución patriótica» de los industriales azucareros, que aprovechaban la circunstancia de la guerra para aumentar sus beneficios.

Contestando mis observaciones sobre las deficiencias técnicas de la industria azucarera, el señor diputado no utilizó algunos elementos de juicio que seguramente conoce al dedillo. Yo no he hecho cargo general a la industria. Por el contrario, reconozco que ha surgido ahora a consecuencia del monopolio que estimulan la aduana, la ley reguladora y los convenios privados, ha surgido ahora una lucha, sorda en estos instantes, que puede hacerse pública, mañana, entre los industriales mejor plantados y bien dotados, y aquellos ingenios que por hallarse mal ubicados y peor dirigidos, deben necesariamente desaparecer en una industria sana.

La lucha existe ya en principio entre los azucareros de Tucumán y los de Salta y Jujuy, y si no fuera por esta situación de monopolio en la que

hay un cierto equilibrio artificial entre estas partes, habríamos visto estallar ese conflicto esta tarde, entre el señor diputado Simón Padrós y el señor diputado Arrieta, que son los exponentes de dos grados distintos del desarrollo industrial.

**Sr. Simón Padrós.** — Conocerá a sus hombres de izquierda, pero no pretenda conocer por igual a los hombres de la derecha.

**Sr. Ghioldi.** — No, señor diputado. Disculpeme, pero no he querido, en este instante, azucar, sino tan sólo tomar dos nombres para simbolizar dos grados del desarrollo de la industria azucarera.

**Sr. Simón Padrós.** — Quien empezó su discurso haciendo referencia a la cizaña, no tendría derecho a hacer esa consideración.

**Sr. Ghioldi.** — Bastaría tomar los índices del rendimiento del azúcar de las zonas de Tucumán, Salta y Jujuy para comprender que existen varios grados bien diferenciados del desarrollo industrial de este producto alimenticio.

Pero el señor diputado Simón Padrós, exagerando mis manifestaciones y dándoles un carácter absoluto que no tuvieron, hizo la defensa del esfuerzo de la industria del azúcar, que es bien relativo cuando se comparan los índices de rendimiento con los de otros países de la tierra.

Hace algunos años — y la situación ha variado relativamente poco, porque he comprobado los datos, que se refieren a la Argentina, con la documentación que me ofreció el señor diputado Simón Padrós — hace algunos años, el rendimiento de toneladas por hectárea era en la Argentina, de 2,83. Son datos del año 1929. En la misma época el rendimiento en Java era de 13,71 toneladas; en Santo Domingo y Haití, 5,26; en Puerto Rico 4,50, en Cuba 4,42, en Perú 4,50, en Australia 5,26, etcétera. Sin duda, existen otros países, como Brasil, Méjico, Mozambique, China y Filipinas, que tienen rendimiento inferior a la Argentina.

Estos datos destacan el atraso téc-

nico de nuestra industria azucarera, que debe atribuirse a la protección industrial, que sirve para dar supervivencia a los industriales peor dotados, en vez de estimular el desarrollo y el progreso técnico de la industria.

**Sr. Simón Padrós.** — Agregue a esa información, que en Cuba y Java está arruinada la industria, y que en Perú hace 2 meses que por ley de la Nación, ha quedado liberada de todo impuesto la industria, a pesar de esos enormes rendimientos.

**Sr. Ghioldi.** — Señor diputado: la conclusión a extraerse de sus manifestaciones, es que debe combatirse el progreso industrial por ser causa de miseria, desocupación y escándalo. La verdad es que el progreso técnico e industrial es indispensable para una mayor justicia social.

Lo único que habrá fracasado en Cuba y Perú es la mala distribución del régimen de la propiedad, el mal sistema de impuestos y el pésimo sistema de gobierno...

**Sr. Simón Padrós.** — Es que para un consumo de 24.000.000 hay además un stock de 13.000.000. No quiere comprender la situación económica.

**Sr. Ghioldi.** — Hay en el mundo infraconsumo.

**Sr. Simón Padrós.** — Y exceso de producción.

**Sr. Ghioldi.** — Es que hay en el mundo gente que ve destruir el azúcar y arrojar al mar la uva y el café, pero no puede tomar café ni vino, ni puede comer azúcar. No es por deficiencia industrial, sino por deficiencia de la organización social.

**Sr. Simón Padrós.** — Tucumán bate el record del minimum de desocupación en la Argentina.

**Sr. Ghioldi.** — El señor diputado está empeñado en hacer el elogio del atraso industrial. El sabrá por qué.

El escaso rendimiento de la industria azucarera argentina se traduce en el elevado precio de costo a que se refirió el señor diputado. Los informes que se utilizan para justificar la protección aduanera siempre tienden a dar un único precio de costo. Así, por

ejemplo, la Comisión Nacional del Azúcar que informó cuando el Gobierno Provisional — sin la firma del ministro de Hacienda, dato bien curioso — dió el famoso decreto elevando en 4 centavos oro el precio del azúcar, estableció el precio de costo en \$ 0,345 el kilogramo de azúcar granulada blanca de consumo y \$ 0,38 el de azúcar refinada «pilé», cuando es evidente que hay diferencias considerables en los precios de costo según los ingenios.

El señor diputado tomó una manifestación mía y la contestó de una manera muy particular, refiriéndose a condiciones accesorias de ella, y no a su parte central. Dije ayer que el despacho estaba inspirado en la defensa de intereses oligárquicos. El señor diputado, extendiendo sobre su pupitre la amplia planilla, adherida al despacho de la comisión que muestra el desarrollo de la aplicación del nuevo sistema impositivo en el transecurso de 20 años, demostró que algunas provincias, como Catamarca y Corrientes, salían altamente beneficiadas, tanto que habrían de tener tanto dinero que ni siquiera la imaginación bien fértil del señor diputado González podría encontrarle aplicación. *(Risas)*.

**Sr. Simón Padrós.** — Eso lo pone de su cosecha el señor diputado.

**Sr. Ghioldi.** — Sí, señor diputado.

Sin embargo, yo no me había referido en ese momento al beneficio que obtendrían Tucumán, Mendoza, Salta o Jujuy, sino al beneficio que obtendrán las industrias que he llamado oligárquicas, que en síntesis son aquellas que se desarrollan bajo el amparo de la protección aduanera.

Quise referirme a dos datos, para no leer íntegramente la planilla que tengo en mis manos. Los vinos están produciendo a las provincias 33.200.000 pesos. Después de la unificación de impuestos, que se haría para servir el ideal de unidad nacional de que tanto se ha hablado esta tarde, la industria del vino no pagará 33.000.000, sino 23, porque el régimen impositivo significa la disminución del gravamen que pesa sobre tal industria.

**Sr. Godoy.** — El Poder Ejecutivo calcula el rendimiento en 27.000.000.

**Sr. Ghioldi.** — Estoy leyendo cifras que ha mandado el ministro de Hacienda a la comisión. Si el ministerio envía una documentación y luego particularmente da datos que difieren de los consignados en aquélla, yo no soy responsable de ello.

La industria del azúcar, cuya contribución a los erarios provinciales es de 8.800.000 pesos según esta planilla, pagará en el futuro 7.000.000 de pesos.

He tenido, pues, base numérica suficiente para afirmar que la unificación de impuestos significará beneficiar materialmente a las industrias protegidas.

**Sr. Corominas Segura.** — El señor diputado sostiene que la industria del azúcar y la del vino gravan excepcionalmente los consumos del país, y de los datos que acaba de mencionar el señor diputado resulta que va a producirse una desgravación. Luego, el hecho no debería ser objeto de crítica, sino de elogio.

**Sr. Ghioldi.** — Por mí, la Nación y las provincias pueden obtener cuanto les sea posible gravando la industria del vino, porque es un producto cuya difusión en la masa popular no me interesa. Con respecto al azúcar un impuesto aplicado a la industria azucarera, que ha llegado al límite de carestía no es un impuesto que grave en realidad sobre el consumidor.

**Sr. Simón Padrós.** — Entonces, no era exacto aquello de que el impuesto provincial afectaba el consumo.

**Sr. Ghioldi.** — Las dos cláusulas tienen que jugar al mismo tiempo. Lo es sobre el consumo porque existe la aduana, pero con ese impuesto o sin él ustedes no podrán ir más arriba de los pesos 4,10.

**Sr. Simón Padrós.** — Entonces, es el derecho de aduana el que afecta al consumo, y no el impuesto provincial.

**Sr. Ghioldi.** — Pero el impuesto provincial significa una merma del impuesto de aduana para beneficio exclusivo de la provincia. Esto es de toda evidencia.

El señor diputado trajo a colación algunas palabras del concejal socialista Fernando Ghio, cuando en el Concejo Deliberante se discutió el comercio de carnes. El señor diputado decía: con el mismo derecho con que ustedes quieren amparar en el Concejo Deliberante al Frigorífico Municipal para proteger a los obreros del mismo, permítanos que nos defendamos de la competencia desleal que nos hacen los productores extranjeros, tratando de aplicar algunas medidas restrictivas. En primer término, señor diputado, y para ser leal, quiero decir que yo, personalmente, no he estado de acuerdo con el proyecto que defendió el concejal Ghio y, en segundo término, dígoles que, en todo caso, la diferencia entre las inspiraciones de nuestro compañero y las del señor diputado, es esencial. El concejal Ghio quería amparar al Frigorífico Municipal, no a un frigorífico privado, protegiendo también a los trabajadores; pero en cambio, el señor diputado pide la protección, no para mantener el salario mínimo de los trabajadores de Tucumán, sino para obtener la ganancia máxima de los industriales.

**Sr. Simón Padrós.** — El señor diputado está en contradicción con el ex diputado Justo, cuando reconocía que, en Tucumán, había salarios y había jornales.

**Sr. Ghioldi.** — Ruego al señor diputado me deje continuar esta exposición que deseo sea breve. La reiteración con que se cita el nombre de Juan B. Justo pone de relieve la base falsa de la exposición del señor diputado Simón Padrós. Si hay algo que ha caracterizado la actuación parlamentaria de Justo, tanto aquí como en el Senado, es haber persistido en toda su vida en denunciar los privilegios de la industria azucarera y anunciar que ella terminaría por crisis y estancamiento industrial. Es lo más característico de la personalidad parlamentaria del diputado Justo y ahora, a los seis o siete años de su fallecimiento, es traído el nombre de Justo para decir

que si viviera tendría una opinión contraria a sus discípulos actuales.

**Sr. Simón Padrós.** — No podrá negar lo que dijo.

**Sr. Ghioldi.** — Por otra parte, como sé que el señor diputado Pena se ocupará especialmente de la industria del azúcar, dejo de contestar otras manifestaciones del señor diputado Simón Padrós y paso a referirme a algunas de las consideraciones hechas por el doctor Pinedo que ha empleado, como de costumbre, su habitual ingenio o inteligencia para preparar ya el camino a la inmortalidad a esta obra histórica que sancionará la Cámara.

El señor presidente, miembro informante de la comisión, omitió hacer el elogio de práctica a los autores inmediatos de la iniciativa y ha sido necesario que ellos salieran a la palestra haciendo el elogio y defensa de la propia obra y para que pareciera más grande y resplandeciente de luz trató de disminuir todas las objeciones y restarle importancia a las consideraciones que hemos formulado ayer. No sólo ha tratado de restar importancia a nuestras críticas, sino que trató de demostrar que, en el fondo, en lo fundamental, en el 99 % del despacho la diputación socialista estaba de acuerdo con la iniciativa.

De esa manera saldría triunfante de la Cámara, por unanimidad proclamada por el ministro, una obra que, desde este instante, pasa a la posteridad. El señor ministro hoy ha hablado en tono solemne, y es hablar en tono solemne cuando se ve en el curso de los años pasados nada más que las etapas culminantes, negándose a escudriñar la trama íntima a que día tras día van formando la historia. Claro está que desde un sillón ministerial o desde una banca de diputado, cuando se trata de obtener el aplauso de los demás, es fácil en una mirada general ver las altas cumbres del movimiento histórico; pero si creyéramos con ello haber alcanzado la verdad negaríamos el método histórico que nos obliga a descubrir sin temor las fuerzas materiales, los egoísmos, los dolos y los escándalos.



los que en todas las épocas de la historia se mezclan con las virtudes y los esfuerzos creadores. Y no es, señores diputados, que nosotros tengamos un método de la historia tal que nos permita decir ahora: «todo lo pasado no es sino error, crimen, venalidad y fraude. La historia se inicia con nosotros». No, señores diputados. Tenemos un método comprensivo de la historia, sabemos que la vida de las colectividades es la común aventura de los hombres que tratan de ubicarse y adaptarse en el universo para hacer más fácil, más cómoda, más alegre y más bella la vida. Pero sabemos que el tránsito por la tierra no es un esfuerzo siempre placentero, sino una lucha constante, donde se enfrentan el egoísmo y el altruismo, la pasión noble y la pasión inferior. No sería el caso de enternecernos todos hablando de la unidad nacional, creyendo que este despacho de la comisión está preñado por el Espíritu Santo y no han intervenido para engendrarlo los intereses materiales espurios. (*Muy bien!*).

Nos ha tocado a nosotros los diputados socialistas la prosa, dejando el verso a los diputados de la mayoría. Comprendo que ése es su papel, porque ellos tienen que enaltecer su obra, porque ellos tienen que cantarla, pero es a la oposición a la que corresponde la tarea de descubrir, a veces con valor, las fuerzas materiales, los egoísmos, los intereses concretos que han actuado para dar vida al despacho.

El señor ministro de Hacienda ha querido reducir nuestra oposición al asunto del azúcar, y le era cómodo adoptar esa posición polémica. Claro; si toda nuestra argumentación ha de girar en torno al azúcar, y si luego el señor ministro se encarga de demostrar que nuestra duda no tiene razón de ser, porque quedará subsistente la ley Saavedra Lamas, el ministro se ha ganado de entrada la batalla verbal. Pero es que para ello el señor ministro ha tenido que ignorar u olvidar momentáneamente todas las objeciones que hemos concretado en la comisión y que ayer desarrollé en el recinto. No es el caso

de entrar ahora, a esta altura del debate, a reiterar nuestro punto de vista. Con toda lealtad hemos dicho que concebimos como un progreso el procedimiento que tiende a unificar los impuestos nacionales y provinciales. Creemos que es introducir el método, creemos que es introducir el orden en el caos y la anarquía impositiva. Pero no estamos de acuerdo, y creo que es ella una posición legítima, con las bases que han servido a la comisión para despachar el proyecto.

No pudiéndose tomar el consumo real por carecerse ahora de datos para establecer el reparto, hemos propuesto que se tome un índice bastante aproximado a la realidad, cual es el índice de la población. Y a esta objeción, desdénada por el señor ministro, no podrá negársele la importancia que intrínsecamente tiene. Si se ha de introducir método escojamos uno que sea por igual para todas las provincias, la Capital Federal y los territorios, el método de la población, pero no apelemos al complicado sistema de las recaudaciones actuales, corregido por las recaudaciones hipotéticas de la provincia de Tucumán, para llegar después, al término de diez o veinte años, a la distribución por población.

Yo no sé cómo el señor ministro de Hacienda no nos ha explicado esta tarde la manera en que ha de financiar la ley. En la comisión fué muy claro y preciso. Dijo: a las provincias en concepto del producido del impuesto al consumo y a la producción se les entregará la suma de 67,4 millones de pesos. Por participación en el impuesto a los réditos y a las primeras ventas se les entregará 11.000.000. Quiere decir que el presupuesto nacional tendrá una salida de 78,4 millones. ¿Cómo el señor ministro equilibraba esas salidas? De la siguiente manera: proyectó obtener 25.000.000 del vino, tanto del tabaco, tanto de la cerveza, de los fósforos, de las cubiertas, del alcohol, del azúcar; en total, 53.000.000 por modificación de las tasas de los impuestos internos. Proyectó tomar 3.000.000 por modificación del impuesto a los réditos, y 8.000.000 del impuesto global

a las herencias. Total de entradas: 64.000.000. Con estas dos cifras el señor ministro se manejaba en la comisión. «Señores diputados por provincias: El proyecto entrega a las provincias 78.000.000; la Nación sólo podrá recaudar 64.000.000. Hay un déficit para la Nación de 14.000.000. No pueden atenderse más las reclamaciones de las provincias.»

¿Cómo propondrá financiar el despacho el señor ministro? Es lo que yo no podría informar ahora a la Cámara.

A las provincias en conjunto por participación en el producido en el impuesto al consumo, a la producción, a los réditos y a las ventas, les corresponderá no ya 78.000.000, sino 91 millones.

¿Cuánto recaudará la Nación por la modificación de impuestos? Aun admitiendo los 53.000.000 de pesos por modificación de las tasas — lo que no es exacto porque se ha rebajado el impuesto al vino y a la cerveza — y agregando los 3.000.000 de los réditos, tendríamos 56.000.000. No computo todavía los 8.000.000 por impuesto a la herencia. Quiere decir que de la comisión ha salido un despacho que elevó el déficit de 14.000.000 con que venía financiado el proyecto del Poder Ejecutivo a 35,9 millones. El señor ministro de Hacienda en lugar de decirnos cómo iba a financiar la ley, prefirió dedicarse a literatura histórica.

Dijo bien el señor ministro esta tarde: «este despacho — y creo que debe haber sido una frase que se le escapó, porque ella encierra la justificación plena de nuestra actitud — tendrá carácter si se sanciona también el impuesto a las herencias.»

Tal afirmación en boca del señor ministro significa que tenemos razón los socialistas cuando decimos que se persiste en gravar el consumo y el trabajo, y cuando se insiste en no gravar el privilegio del suelo o el privilegio hereditario, que será cada vez mayor en esta República, que ya no puede ofrecer el campo de hace 50 años para el enriquecimiento fácil en una sola generación de una familia. Mas el se-

ñor ministro, que es tan contemplativo con los conservadores, en quienes públicamente no encuentra un error, una tacha o un defecto, no nos perdona nada a los socialistas: los socialistas constituimos para él una espina irritativa que se le ha colocado en la médula. Cualquier palabra que pronuncie alguno de los parlamentarios de este sector irrita extraordinariamente al señor ministro, que trata de condenar a silencio a todos, diciéndoles: «usted no sabe nada, usted no ha leído nada, usted no entiende nada.»

**Sr. Noble (R. J.).** — El señor diputado podría dejar la parte personal del señor ministro para cuando concorra.

**Sr. Ghioldi.** — No es una parte personal.

**Sr. Solari (J. A.).** — El señor ministro podría estar presente.

**Sr. Ghioldi.** — Me parece que no hago ningún cargo, ningún ataque al señor ministro; estoy contestando manifestaciones del señor ministro.

**Sr. Noble (R. J.).** — Me refiero al tono del señor diputado.

**Sr. Presidente (Ferreira).** — Ruego al señor diputado no interrumpa.

**Sr. Ghioldi.** — El señor ministro, que nos niega hasta el saber escribir, con ese método que emplea para eliminar a los adversarios, dice a menudo que tiene que hacer gran esfuerzo para entender las cláusulas que nosotros redactamos y trata de poner algún empeño en interpretarlas lealmente.

Cuando se refería al caso de la provincia de San Juan, que yo había citado en una exposición anterior, el señor ministro hizo algunas consideraciones interesantes. Cuando la provincia de San Juan, conjuntamente con la de Salta y Corrientes en la reunión de la comisión se lamentaba de no tener una mayor participación en el reparto de impuestos unificados, el señor ministro expuso vigorosamente el concepto sano en una frase: «sería absurdo que ahora nos propusiéramos indemnizar a las provincias que han tenido y tienen buenos gobernadores». Con esa frase el señor ministro dió

por terminado definitivamente, como correspondía, los reclamos de las provincias que acabo de mencionar. Pero se planteó el caso esta tarde en la Cámara y entonces el mismo señor ministro, que ha pronunciado esas palabras en la comisión, encuentra el otro argumento y dice: «Tienen razón de reclamar una mayor parte en el producido de los impuestos porque una mayor participación no las compensaría de los malos gobiernos que tuvieron en otras oportunidades». Se ve, pues, que el señor ministro maneja el pro y el contra como los filósofos sofistas, para quienes el bien y el mal están más allá de nuestros alcances personales.

No hemos negado ni negaremos jamás por comodidad o especulación política, las bondades y las virtudes de una iniciativa, y con esta iniciativa que no votaremos por las manifestaciones hechas ayer y hoy, hemos aplicado ese método, que es el método civilizador de reconocer en todo la parte de verdad, de virtud o de progreso que efectivamente encierre.

El señor ministro aprovecha y deforma una frase que yo pronunciara ayer reiterando un concepto mil veces expuesto por la diputación socialista.

Dije ayer, reiterando conceptos que han sido emitidos por Justo, por Repetto, por Dickmann y por tantos otros, que todavía ahora es fundamentalmente exacto que el régimen impositivo argentino reposa en la construcción de Rosas, que aplicó los impuestos aduaneros y en la construcción de Pellegrini, que creó los impuestos internos. Agregué a continuación, porque no soy de los que me pago de éxitos ocultando la verdad, que era de destacar en los últimos años un progreso pequeño, pero progreso al fin, en el régimen impositivo, con la aplicación del impuesto a los réditos. El señor ministro olvidó esta última parte y entonces me presentó como un repetidor sistemático de una frase que tuvo verdad hace 20 años y que yo he tenido incapacidad de ponerla al día, poniéndome yo al día con la realidad argentina.

Trazó el cuadro histórico aprovechando el párrafo: Rosas, para quien desde luego, no tuvo palabras de elogio; Pellegrini, a quien exaltó en la defensa de la oligarquía. No sé si porque el ministro de Hacienda esté cada vez más enamorado de su tradición familiar pero es el caso que cada vez hace con más calor y pasión la defensa de esta oligarquía que hasta hace poco tiempo combatía él desde estas mismas bancas. Y yo le reconozco al señor ministro de Hacienda, prácticamente incorporado ahora al núcleo conservador del país, el derecho que le da su propia euforia de aspirar a una posición más alta y de pertenecer, por lo tanto, a la oligarquía tradicional; pero no tiene el derecho de presentarnos a nosotros como incomprensibles de la realidad actual como negadores de la solidaridad nacional, como queriendo regatear a las provincias el agua y el pan. No tiene derecho a construir a priori la serie histórica de los prohombres: Rosas, Pellegrini, Uriburu y Pinedo.

Somos una fuerza de civilización y de progreso. Por eso hemos reconocido las virtudes del método de la unificación, y no hemos regateado el reconocimiento en un párrafo mezquino, ya que hemos hecho una exposición amplia a este respecto, cayendo sobre mojado, pues insistimos después de la amplia exposición del señor diputado Martínez. Es que no nos mueve el repudio sistemático del pasado, ni nos pagamos de nuestros sueños sobre el futuro para disculparnos de la incapacidad para apreciar el presente.

Porque nosotros tenemos el concepto de la relatividad que aconseja saber apreciar el papel que juegan los presentes como los ausentes de esta Cámara, es que nosotros también tenemos derecho a decir que el señor ministro, que habló de la unidad nacional, no estuvo oportuno al repudiar en la forma que lo hizo el sector de la opinión pública que no tiene representación política en virtud de las causas conocidas. No puede hablarse al propio tiempo de solidaridad y unión na-

cional y decir con jactancia autoritaria que «aquéllos» no volverán, que se han ido definitivamente». Yo supongo, porque conozco al doctor Pinedo, que esto no significa dar apoyo a esa frase que algunos elementos políticos han hecho circular a pesar de nuestro régimen democrático: quedarse en el poder con votos o sin votos.

Termino esta breve réplica, señor presidente, en la que la Cámara habrá podido apreciar que, no obstante el apasionamiento que brota naturalmente de una contestación que es improvisada, he tenido el suficiente equilibrio de espíritu para saber apreciar en todo momento los valores relativos que existen también en otras filas.

Nada más. (*Muy bien! Muy bien! Aplausos*).

**Sr. Arce.** — Pido la palabra.

He de votar, señor presidente, el despacho de la Comisión de Presupuesto en lo que se refiere a la unificación de los impuestos internos, reservándome hacer algunas observaciones de forma cuando se discuta en particular, en el deseo de colaborar en la tarea realizada por la misma. Pero advierto — no sé cuál será la finalidad y me parece difícil que pueda demostrarse la conveniencia de esa actitud — que en este despacho se mezclan dos leyes que han debido redactarse por separado, y hasta se hace alusión a una tercera que es muy discutida por la opinión pública en general. Eso ha permitido que en este debate se hable un poco de todo, inclusive hasta del impuesto global a las herencias, que no tiene despacho y sobre el cual el señor ministro de Hacienda nos ha pronosticado hoy que, a pesar de que se lo crea un muerto, ha de revivir, como el fénix, de sus cenizas.

Planteo, pues, desde ahora, señor presidente, la necesidad de que se divida esta ley. Lo que hay más allá del artículo 28, nada absolutamente tiene que hacer con los impuestos internos de la Nación y de las provincias ni con la unificación.

Y al referirme a los impuestos de la

Nación y de las provincias, aprovecho la oportunidad para sugerir, desde luego, una corrección en el texto de la ley, que de aquí en adelante, si fuese sancionada, no requiere más la palabra «nacional» o «nacionales», puesto que solamente habrá impuestos internos.

Es necesario separar todo lo que se refiere al impuesto a los réditos y mucho más lo relativo al impuesto a las ventas, si queremos ordenar el debate y si queremos facilitar la sanción sobre cuestiones absolutamente distintas, con respecto a las cuales hay, según es público y notorio, opiniones diametralmente opuestas.

En cuanto a la unificación de los impuestos internos no estará de más que haga notar — el punto ya ha sido considerado especialmente por el señor miembro informante de la mayoría de la comisión y ha sido tocado en las exposiciones del representante de la minoría y del señor ministro de Hacienda — la relación que existe entre la posibilidad de unificar los impuestos internos y el federalismo económico en la Argentina.

Es evidente — y la afirmación ha sido hecha antes de ahora — que si las provincias pueden convenir con la Nación en renunciar a sus propias facultades de establecer impuestos al consumo, tienen ese derecho y que, si a la vez, lo tiene la Nación, es evidente, decía, que si antes de ahora no fué violado el federalismo argentino porque la Nación y las provincias establecieran impuestos sobre la misma materia, no lo estaría en el futuro una vez establecida la unificación.

Lo grave de la unificación no está allí: lo grave consistirá en que la máquina burocrática y la influencia política de la Nación, que es ya enorme en el territorio de las provincias y que, aun cuando con propósitos de bien público, ha avanzado, unas veces dentro y otras al margen de la Constitución, en jurisdicción de las mismas, hará que en un momento dado las provincias, que desde un punto de vista práctico, en los hechos, van caminando hacia el unitarismo polí-

tico, afirmen ese unitarismo en base a un unitarismo económico, que si es posible, desde que la Constitución autoriza a las provincias a celebrar convenios entre sí y con la Nación, en definitiva suprimirá, dejándolo solamente en el nombre, el federalismo argentino.

Pero los beneficios de la unificación de los impuestos internos son tan grandes, y en cambio — sobre todo por lo que se refiere a la administración pública y a la política — el unitarismo ha avanzado tanto, que no vale la pena argüir, no vale la pena combatir a este unitarismo político de una manera teórica cuando ya es tarde, cuando sería difícil convencer a la Nación misma, de que el federalismo de nuestras instituciones bien cumplido, es superior al híbrido sistema que vivimos. Votaremos, pues, la unificación.

Con relación a la ley es evidente, y desde mi punto de vista individual no tengo inconveniente en declararlo, que el único índice legítimo y razonable para la distribución deberá estar basado en la población. Pero así como las instituciones argentinas reposan sobre el equilibrio de esta Cámara, en que está representado el pueblo, según sea el número de habitantes de cada provincia, enfriado por aquel plato, donde se puede derramar el café, del Senado de la Nación, para recordar el célebre gesto con que el gran americano explicaba la necesidad de la creación de la alta Cámara, bueno será dejar establecido que no era posible adoptar desde el primer momento ese índice como base para la distribución del impuesto. Desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista estrictamente científico, y al decir científico me refiero al concepto políticoeconómico más general, los señores diputados que acaban de exponer sus ideas al respecto, por boca del señor diputado por la Capital, tienen razón. Pero es evidente que, por defectos del régimen de la superposición y por imperio de hechos existentes, en los gravámenes aplicados hasta este día por la Nación y por las provincias, no era posible ir directa-

mente a encarar la repartición de los impuestos internos unificados con arreglo a la población. Los señores diputados del sector socialista, que estiman siempre la doctrina, pero que por encima de la doctrina estiman los hechos, para adoptar las soluciones prácticas que se han de dar en lo político y en lo económico, no podrán negar que hay muchos hechos que impiden aceptar de entrada, como base para la distribución de los impuestos internos unificados, la población de las distintas provincias.

La transacción, la coordinación de los intereses, cuando está basada en hechos explicables, justificables y confesables, es de buena política; por decirlo así, es el eje sobre el cual debe girar la política, que en definitiva no es sino la coordinación de los intereses de una colectividad, expresados en una asamblea como ésta, por los distintos sectores de la opinión.

La transacción, pues, es el mejor criterio que han podido tener el Poder Ejecutivo y la Comisión de Presupuestos, y la evolución entre el régimen inicial de los hechos existentes para pasar en definitiva a una distribución más apropiada con relación a la población de cada una de las provincias es, en mi sentir, lo que corresponde.

—Ocupa la Presidencia de la Honorable Cámara, el señor vicepresidente 2º, doctor Roberto J. Noble.

Son estos los motivos, brevemente expuestos — estamos en la discusión en general —, que me decidirán a votar la unificación de los impuestos internos en la forma propuesta por la comisión.

Me he referido a la existencia de dos leyes en el despacho, y para probarlo me bastaría recordar que en el artículo 31 se habla de «la parte que corresponde a la Municipalidad de la Capital Federal y a las provincias»; pero en el artículo 32 se habla de que «para participar en la recaudación de los impuestos a los réditos y a las ventas las provincias deberán cumplir con las obligaciones que como agentes de re-

tención les fijan las leyes 11.628 y 11.683», apartado en el cual no figura la Capital, lo cual podría aparecer como una omisión o un olvido de la comisión, y en el artículo 33 se habla de que «el Poder Ejecutivo liquidará trimestralmente a las provincias y a la Municipalidad de la Capital las sumas que les correspondan por aplicación de los artículos 2º y 3º», que nada tienen que hacer con esa parte de la ley y que revelan a las claras que estos artículos pertenecen a dos leyes que originariamente estaban redactadas por separado.

**Sr. Dickmann (A.).** — En ausencia del presidente de la comisión, le daré la clave del asunto. Eran dos despachos separados y que a última hora fueron refundidos.

**Sr. Arce.** — Me he dado cuenta de que debía ser así y esa refundición es lo que critico. Planteo la disidencia desde ahora, en razón de que oportunamente he de pedir que las dos leyes se sancionen por separado.

A renglón seguido se habla de que «dentro del plazo de cinco días a partir del primero de cada trimestre, el gobierno nacional depositará esa suma a la orden de los gobiernos respectivos, en el Banco de la Nación Argentina». Es evidente que lo que se ordena, por lo que se refiere al impuesto a los réditos y a las transacciones, es que la parte que corresponda a la Capital Federal, que no figura en el apartado del artículo 33 a que me estoy refiriendo, se entregue, no al gobierno que corresponde, que es el de la Nación, sino al municipio de la Capital.

Advertidas estas incongruencias, en las que me baso para solicitar desde ahora la separación de ambas leyes, vengamos a este aspecto de la cuestión, desde que él ha sido abordado en el debate en general de las dos leyes refundidas.

Se ha dicho ya que el concepto de los diputados del sector socialista en lo que se refiere al índice más exacto y justo para la distribución del impuesto, es el de la población. Y si me

he referido a las grandes ventajas de la unificación de los impuestos internos, sin entrar en detalles, porque no desee ponerme en disidencia, desde que en definitiva he de acompañar a los diputados que pertenecen a mi sector y que representan a las provincias que producen azúcar y vino, no puedo acompañar, en cambio, a la comisión, cuando ha cedido a la influencia de esa «nueva provincia» que por imperio de esta ley surge en el preciso momento en que tratamos de alcanzar el unitarismo económico, renunciando al federalismo. Esa nueva provincia que no está en la Constitución y que se trata de crear en esta ley, no ha de contar tampoco con mi voto. Ya ven los señores diputados del sector socialista cómo de la misma manera que ellos son capaces de dar la razón al adversario cuando la tiene, yo que les doy la razón en dos de los puntos considerados en este debate, no puedo acompañarlos para que la Municipalidad de la Capital Federal, asuma el papel de provincia y participe en el porcentaje al impuesto a los réditos y a las ventas.

En la economía de esta ley se habla de la Nación y de las provincias. Hasta este momento, no obstante que el Congreso puede, de acuerdo al artículo 67 de la Constitución, crear nuevas provincias, existen las mismas que cuando se organizó la Nación el año 1853, es decir, catorce. Por lo que se refiere a la Nación no existe naturalmente, ello es evidente, sino una: la Nación Argentina. Es cierto que después de muchas dificultades, después de haber fracasado muchas iniciativas, un buen día la Nación consiguió — permítaseme que repita una vez más un hecho que no podrá ser negado — gracias a la formación de un congreso ad hoc y de una legislatura ad hoc darse su Capital definitiva. Y ese acontecimiento político que podría lastimar el espíritu localista de algunos de los argentinos, hoy día, después de más de 50 años de acaecido, es aplaudido por todos los argentinos de la Capital y de las catorce provincias; ¿pero cuál es la situación creada después de ese acontecimiento? Que

existe un distrito federal de la Capital, que no es una provincia, sino la parte del territorio desmembrado de una de las antiguas provincias para formar la Capital Federal. Ella no puede reclamar la situación de provincia, y es por eso que me alarmaba hoy — y pido al señor diputado por la Capital a quien me voy a referir que no vaya a encontrar en estas expresiones nada que tienda a molestarlo porque sabe el alto concepto que tengo de su capacidad, de su hombría de bien y de su dedicación al interés colectivo: me refiero al señor diputado doctor Adolfo Dickmann — me alarmaba, hoy cuando decía, como cualquier diputado del viejo régimen de alguna de las provincias históricamente consagradas: «no se trata de una cuestión constitucional; ¡se trata de una cuestión de plata!». Y aparecía él en defensa de la Capital, como cualquier diputado por Mendoza, Salta, San Juan o Corrientes, reclamando parte en el botín que se distribuía en el momento de votarse la unificación de los impuestos internos.

Yo no sé si será criticable la actitud de los señores diputados de las provincias a que me he referido, cuando han defendido los intereses de los Estados cuyo pueblo ellos representan; en todo caso, la tradición no solamente les permite sino que les obliga a ensayar esa defensa, pero lo que no es posible es que los diputados por la Capital y toda esta Honorable Cámara, olviden que este distrito no forma una provincia, que no pertenece a nadie; que es falsa, institucional, social y parlamentariamente, la expresión «ustedes», referida, por ejemplo, a quienes representan a Corrientes, por oposición a los que representan a la Capital. No; no puede haber «ustedes» para los de la Capital. La Capital está representada por todos nosotros; la Capital de la República es la Nación misma. En ella gobiernan un Ejecutivo que es el de la Nación y una Legislatura que es la de la Nación. No es posible, pues, legítimamente, que se olvide que los recursos de la Capital son de la Nación y que es con los recursos de esta última que debe hacerse cuanto corresponda hacer en la Capital.

El gobierno de la Nación en la Capital es perfectamente comparable con los gobiernos de provincia en las provincias, del mismo modo que el conjunto de las municipalidades de las provincias, es comparable con la Municipalidad de la Capital. Ello es absolutamente innegable. De otra manera, la provincia de Buenos Aires, cuyo pueblo tengo el alto honor de representar aquí, podría decir a los señores diputados de la comisión: se han olvidado de las municipalidades de los 110 partidos en que se divide la provincia y para los intereses edilicios de esas 110 municipalidades reclamo la parte que proporcionalmente a su población corresponda, del mismo modo que se entrega la que ustedes entienden corresponder a la persona jurídica, Municipalidad de la Capital.

El gobierno general provee en la Capital de la República a todo aquello que no es comunal, como en las provincias, los gobiernos de provincia proveen en sus respectivos territorios a todo aquello que no proveen las municipalidades en que esos territorios se encuentran divididos.

**Sr. Dickmann (A.).** — ¿Me permite el señor diputado una interrupción?

**Sr. Arce.** — Voy a terminar mi pensamiento, y la permitiré en seguida al señor diputado.

Es cierto que la Nación, además, concurre en obsequio de las provincias realizando obras de fomento que correspondería fueran costeadas por los tesoros provinciales, pero no hay que olvidar que la formación de la Nación ha disminuído, cuando no arruinado, a muchas provincias del interior, y que de la misma manera que en las provincias el tesoro de la Nación costea gastos que corresponderían a los gobiernos de esas provincias, el tesoro de la Nación puede hacer y hace lo mismo en el territorio de la Capital. Y sería muy interesante que la Comisión de Presupuesto, llegado el caso, nos formulase una planilla en que estuviesen perfectamente discriminadas las sumas que por concepto de gobierno local y de gobierno general de la Nación invierte la Nación Argentina en el territorio de la Capital.

Y ahora que he terminado la expresión del concepto que quería presentar ante la Honorable Cámara, con mucho gusto le concedo la interrupción al señor diputado.

**Sr. Dickmann (A.).** — El señor diputado anticipa el debate respecto a un asunto que, a mi juicio, debe discutirse en particular y que yo, por mi parte, lo haré entonces. Pero debo señalarle hechos que seguramente ignora por no haber estado en la comisión.

Tiene el señor diputado a su izquierda a su colega por la provincia de Buenos Aires, que es el que más ha bregado en el seno de la comisión para salvaguardar algunos de los derechos de las municipalidades, lesionados por esta ley, a punto tal que consiguió, con nuestro apoyo, que la municipalidad que él representa no fuera perjudicada en la percepción de algunos impuestos que podrían ser afectados por la unificación.

En la doctrina que he sostenido en la comisión y que sostendré en el recinto, me hallo en muy buena compañía. El señor intendente de la Capital, reconocida autoridad en el derecho constitucional, — el doctor Mariano de Vedia y Mitre, que mereció el honor de ser convencional recientemente en la provincia de Buenos Aires —, se dirigió al Poder Ejecutivo en mensaje muy bien fundado, sosteniendo no sólo la conveniencia, sino los derechos de la Capital para participar en el impuesto a los réditos y a las transacciones.

Me reservo contestar al señor ministro y al señor diputado cuando proponga como artículo 6º el que propuse en la comisión, que fué largamente discutido y que aún no sé qué suerte correrá en el recinto.

**Sr. Arce.** — Tomo nota de las manifestaciones del señor diputado y de las opiniones del señor intendente municipal, que es un jurista distinguido, que como el señor diputado dijo, fué también miembro de la Convención Reformadora de la Constitución de la provincia de Buenos Aires; que es, además, como es público y notorio, hombre de letras, que traduce a Shakespeare y a

Oscar Wilde, y que por su magnífica obra literaria acaba de ser incorporado a la academia respectiva.

Pero si alguna vez me he permitido el sacrilegio de disentir con Alberdi, con Mitre, con Rawson, en base a una convicción, el señor diputado debe permitirme que pueda discutir con el señor profesor de derecho político, doctor Mariano de Vedia y Mitre.

**Sr. Dickmann (A.).** — Yo no me atrevo a tanto.

**Sr. Arce.** — Dicho esto, retomo el principio de mi exposición para terminar.

He dado las razones que me deciden a votar la unificación de los impuestos internos. Sugiero desde ahora, y espero que la Comisión de Presupuesto aceptará esta sugestión con benevolencia, la necesidad de suprimir la palabra «nacionales» en donde se habla de los impuestos internos, y propongo para su oportunidad la separación de las dos leyes que comprende el despacho: la primera, que abarca hasta el artículo 28, y la segunda, que abarca los artículos restantes. En esa oportunidad volveremos a debatir muy cordialmente con el señor diputado por la Capital, a propósito de la situación de la Capital con respecto a la situación que aquí se le ha querido dar de provincia argentina.

Nada más. (*Muy bien!*).

**Sr. Ahumada.** — Pido la palabra

A esta altura del debate, me voy a concretar a dar someramente los motivos que tiene el bloque que presido para votar este proyecto de ley. Así como las observaciones esenciales que me sugieren algunas de sus disposiciones.

Entendemos que con esta ley se resolverá de una vez por todas el viejo problema de la superposición impositiva, que tanto malestar ha ocasionado al comercio y a la producción del país, así como el no menos grave problema de la guerra aduanera interprovincial que se ha agudizado notoriamente en los últimos años. El propósito esencial de la ley es ése y creo que lo obtendrá ampliamente.



Antes de entrar a fundar las observaciones que he de formular, deseo hacer notar una circunstancia hasta cierto punto curiosa.

El señor diputado por Buenos Aires, doctor Arce, acaba de destacar un hecho que es evidente. En este despacho vienen, puede decirse, unidos arbitrariamente dos proyectos, cuya vinculación entre sí es difícil de establecer. Cuando yo voté en la Comisión de Presupuesto el despacho de la unificación de los impuestos internos, entendí lógicamente que ese despacho se traería a la consideración de la Cámara aislado, con personalidad propia. En ese entender firmé, en el apuro del momento, el despacho que se me llevó por empleados de Secretaría, pero me encuentro ahora en la Cámara con la novedad inesperada de que de los dos despachos sobre unificación de los impuestos internos y de prórroga del impuesto a los réditos y distribución de estos impuestos y del de las ventas, se ha hecho uno solo.

Formulo esta aclaración, porque no deseo que se me haga el cargo de aparecer en la Cámara rectificando un modo de proceder adoptado en el seno de la comisión.

Entiendo que la Cámara debe votar, en primer término, la ley de unificación de los impuestos internos. Una vez sancionada dicha ley, debe a su vez pronunciarse aisladamente sobre el otro despacho sobre prórroga del impuesto a los réditos y participación de las provincias en los impuestos a los réditos y a las ventas. Resultaría absurdo unir este último despacho al de unificación de impuestos internos, porque esta viene a ser una ley contrato entre las provincias y la Nación y de ninguna manera se explicaría en una ley de esta índole la inclusión de artículos que nada tienen que ver con ese punto esencial. Por estos motivos voy a votar, desde luego, la proposición que el señor diputado Arce anuncia que formulará oportunamente.

Una de mis disensiones en el seno de la comisión, con la mayoría, fué el criterio adoptado para determinar la

participación que correspondería del producido total de los impuestos internos nacionales a las llamadas provincias productoras. Observé que la situación de estas provincias, cuyos presupuestos en más del 90 por ciento se cubren con esos impuestos llamados a la producción, era, en realidad, de un punto de vista legal, criticable y arbitrario, pero no se podía negar que era una situación de hecho mantenida desde hace muchos años. Es evidente que frente a situaciones de esa índole, el legislador debe considerarlas, tratando en lo posible de enmendarlas o ajustarlas gradualmente a los buenos principios.

De ahí que yo acepté el criterio que informaba el proyecto del Poder Ejecutivo, de tomar como cifra básica para esas provincias, el promedio de las recaudaciones de los últimos cinco años. Pero al tratarse el caso de determinadas provincias, como Salta y Corrientes, se hizo la observación, que ya conoce la Cámara, de que estas dos provincias resultarían perjudicadas por el hecho de no haber atinado oportunamente a establecer impuestos a la producción, similares a los que rigen en las provincias de Tucumán, San Juan, Mendoza y Jujuy. Realmente era una situación digna de contemplarse, y, de contemplarse, debió hacérselo con un criterio amplio y general. Lamento decir que en el caso particular de la provincia de Salta, la mayoría de la Comisión de Presupuesto, contra mi voto desde luego, adoptó un criterio totalmente arbitrario. La suma básica que correspondería a dicha provincia de acuerdo a datos oficiales, fué aumentada notoriamente por la mayoría de la comisión y creo que el presidente de la misma ha anunciado que dicha suma nuevamente deberá ser aumentada.

Repito que si se hubiera adoptado un temperamento general de justicia, de equidad para todas las provincias que están en igualdad de condiciones, yo no hubiera trepidado en contemplar dicha situación y tratar en lo posible de llegar a una situación equitativa, ló-

gica y justiciera; pero soluciones así, arbitrarias y caprichosas, no contarán con mi voto.

Uno de los peligros que se han señalado contra este despacho de la Comisión de Presupuesto es el de la posibilidad de que sea un instrumento que facilite la centralización excesiva en este país federal, que marcha a pasos precipitados a un verdadero sistema unitario. Se me ha informado que un senador de la Nación llegó a decir, exagerando un poco las cosas, que los diputados de provincia que votáramos este despacho incurriríamos en un delito de lesa patria chica, de leso localismo, porque entregaríamos maniatadas las provincias a la acción preponderante de un ministro de Hacienda de la Nación o de un presidente de la República.

Declaro, señor presidente, que no he sido el único diputado que en la comisión se ha preocupado intensamente de este aspecto del problema. Realmente reviste suma trascendencia y de ahí la forma minuciosa en que la comisión se preocupó de encararlo para traer a la Cámara la mejor solución posible.

El señor ministro de Hacienda llevó al seno de la comisión, en una de sus últimas reuniones, la iniciativa de constituir un consejo federal en el que tuvieran representación las provincias, consejo federal que ejercería una especie de control moral sobre el Banco de la Nación en todo lo relativo al cumplimiento de la ley de unificación de impuestos. La llevó, pero sin mayor entusiasmo. El propio ministro reconoció que ese consejo federal carecería de atribuciones ejecutivas y que prácticamente resultaba así un agregado innecesario. La comisión, con ese criterio, resolvió no incorporar ese consejo al mecanismo de esta ley.

Y realmente resulta inobjetable ese criterio: la forma en que la comisión ha organizado la percepción y distribución de los impuestos que se unifican, no puede ser más previsora ni defender más celosamente los intereses de las provincias. El Banco de la Nación exclusivamente percibe los im-

puestos, los liquida y los entrega a las respectivas provincias, de tal manera que ningún funcionario administrativo de la Nación tendrá injerencia en esos dos actos que son esenciales en materia de impuestos: el cobro y la distribución de los mismos.

Así las cosas, el consejo federal carecería en absoluto de funciones prácticas y apenas ejercería, repito, una especie de control moral, francamente, sin mayor trascendencia. Tanto es ese el criterio de la comisión, que no se ha preocupado, como notarán los señores diputados, de prever la acción civil que las provincias podrían tener para reclamar la entrega de la parte que les corresponda en los impuestos internos, y se ha limitado a establecer en el despacho que cualquiera omisión o incumplimiento de las disposiciones de la ley por parte de los funcionarios y de las autoridades del Banco de la Nación, constituirá *de jure*, puede decirse, un delito, y establece a renglón seguido las penas correspondientes y da facultad a las provincias para iniciar y proseguir las querellas criminales respectivas.

Se habla de las acciones criminales y civiles, pero al referirse a la acción civil se alude exclusivamente a la responsabilidad civil que emerge de todo delito.

Otro problema que me ha preocupado es el de la situación en que quedarán las provincias una vez que esta ley de contrato llegue a sancionarse. Si bien es cierto que las provincias resultan beneficiadas por la participación que tendrán en lo sucesivo sobre el monto de lo que se perciba por impuestos internos, quedan también paralelamente sujetas a una serie de restricciones y limitaciones en sus derechos de Estados federales, que plantean interrogantes de evidente seriedad. No es posible que las provincias por acogerse a los beneficios de esta ley lleguen sin darse cuenta, puede decirse, a quedar prácticamente maniatadas y en condiciones de no poder en lo sucesivo dictar las leyes de carácter fiscal imprescindibles para su desenvolvimiento

económico y para su labor administrativa.

Yo he defendido este punto de vista y lo voy a defender al discutirse en particular: que la ley debe resolver exclusivamente los problemas de momento, el verdadero estado de guerra interprovincial y de superposición impositiva que ofrece hoy el país. Hay que dar a ese problema las soluciones inmediatas que las circunstancias aconsejan.

Otros colegas de comisión — y creo que en eso los ha acompañado en gran medida el señor ministro de Hacienda —, han creído necesario no solamente buscar solución a los problemas actuales, sino prever la posibilidad de que los hechos de hoy se reproduzcan mañana con distintos aspectos, vale decir, con el nacimiento de otros impuestos. De ahí la serie de medidas de previsión que aparecen en el despacho de la comisión y que coartan notoriamente el derecho fiscal, impositivo de las provincias. Razón para que los diputados de provincia estudien serenamente el alcance de las disposiciones del proyecto, y para que la comisión deba dejar claramente establecido el alcance del texto de los artículos para evitar interpretaciones caprichosas que originarían conflictos a granel.

A mi modo de ver, las provincias conservan, en materia de derechos fiscales, todos los derechos que no enajenen o renuncien expresamente en virtud de la ley contrato. Al tratarse en la comisión el derecho de las provincias para imponer patentes, se llevó un anteproyecto que preveía exclusivamente el caso de las provincias consumidoras, pero el artículo relativo a las provincias productoras les desconocía el derecho de establecer patentes, específicas o no, a los comercios ni a las empresas que produjeran los artículos que son materia de los impuestos internos; observé que la situación resultaba intolerable e injusta, y el señor ministro, encontrando lógica la observación, la recogió de inmediato y cumplió al día siguiente la promesa hecha a la comisión, presentando

un nuevo texto del artículo pertinente, que figura ahora en el despacho y que no consagra esa prohibición. Traigo a colación el antecedente para dar base al punto de vista que sostengo, de que las provincias conservan incólume su derecho de Estados federales para dictar en materia impositiva todas las medidas que sean necesarias, salvo pura y exclusivamente aquellas que en forma expresa y terminante renuncien a ejercer por esta ley contrato. Este punto de vista tiene notoria trascendencia a los efectos de dejar establecido el alcance de esta ley, y repito que al estudiarse en particular, especialmente el artículo 19, inciso c), que firmo en disidencia, volveré sobre este asunto para demostrar los peligros de esta serie de limitaciones excesivas al derecho de las provincias.

Observé asimismo en la comisión, la necesidad de que la ley estableciera en forma expresa y categórica cuáles son los impuestos internos que se unifican. La mayoría de la comisión no creyó necesario hacer la enumeración taxativa, lo que creo es un error. El artículo 18 habla de «los impuestos internos que por esta ley se unifican», y releendo el texto del despacho en ninguna parte se encuentra la expresión cabal de cuáles son los impuestos internos motivo de la unificación. Esta es una laguna que la comisión debe apresurarse a salvar.

No tengo otras observaciones de importancia, y expreso que vamos a votar complacidos esta ley, con las excepciones anotadas, porque entendemos que con ella se resuelve uno de los problemas de mayor trascendencia en el actual momento económico y político del país.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*).

**Sr. Godoy.** — Pido la palabra.

Anticipo, señor presidente, que voy a ser breve, no sólo por la hora en que me toca hacer uso de la palabra, sino porque el debate en general está virtualmente agotado. Pero necesito referirme a dos o tres puntos, porque juzgo conveniente, dada la trascendencia del asunto, que se deslinde perfecta-

mente el alcance de las disposiciones del proyecto y el espíritu que ha presidido su redacción.

Un diputado del sector socialista preguntaba con cierto asombro si ésta es una ley contrato. Esta no es sólo una ley contrato, sino que no podría dictarse con otro concepto. ¿Por qué? Porque se trata de solucionar un problema candente para el porvenir de la República, en la única forma en que lo autoriza nuestra Constitución. Realizada la unidad política, tendemos con esta ley a afianzar en el hecho la unidad económica y por ello — lo que no es una novedad porque está contenido en la mayoría de los proyectos presentados — ha sido menester recurrir al arbitrio de una ley contrato. Las provincias renuncian a derechos que les reconoce indiscutiblemente la Constitución, para ponerse así al servicio de un concepto superior. Ya en los debates memorables de los años 1891 y 1894, cuando se discutió la creación de los impuestos internos, se estudió a fondo cada una de las cláusulas constitucionales que acuerdan a la Nación y a las provincias el derecho de imponer contribuciones directas o indirectas. Desde dos puntos de vista diametralmente opuestos se sostuvieron brillantemente tesis que por fin han venido a ser hermanadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declarando que la facultad de imponer esa suerte de gravámenes, es concurrente, tanto para la Nación como para las provincias. Resulta, así, que el problema que en su hora apasionó a los espíritus y que dió lugar a debates brillantes, como aquel en que la tesis netamente provincialista fué sostenida por el entonces diputado Mantilla con un calor y con un brío que fluye de sus palabras, aun cuando se las lea después de treinta años, fué replicada con una exposición no menos substancial, aunque quizá menos brillante, por el entonces ministro de Hacienda, doctor Terry. Allí se analizó el origen histórico de las disposiciones constitucionales, especialmente los artículos 4º y 67, inciso 2º, que confieren las atribuciones impositivas a que me estaba refiriendo. Y aunque

triunfó la tesis del ministro Terry se cumplió en el hecho la predicción que entonces hiciera Mantilla. Sus palabras sirvieron para que a través del tiempo perdurara o por lo menos no se extinguiera, el verdadero espíritu que animó su actuación en el debate, cual era el de defender lo inherente a la facultad que deben tener todos los Estados autónomos para poder existir, es decir, a la facultad de poder hacerse de los recursos indispensables para atender los servicios públicos.

Pero una vez que la Suprema Corte de la Nación ha resuelto el problema con fallos reiterados, en que ha establecido que para que pueda resultar incompatible el ejercicio de los dos poderes, el nacional y el provincial, no es bastante que el uno sea el de crear y proteger y el otro el de imponer o destruir, según sus propias palabras, de acuerdo a la terminología jurídica de los tratadistas norteamericanos, sino que es menester que haya «repugnancia efectiva» entre esas facultades al ejercitarse, en cuyo caso siempre que la atribución se haya ejercido por la autoridad nacional dentro de la Constitución, prevalecerá el concepto federal. Mientras el impuesto local — agrega el fallo que sienta la doctrina central — no afecte por su cuantía u otras causas a la protección aduanera y, viceversa, siempre que ésta no implique por cualquier motivo la anulación de aquél, nada obsta a la convivencia legal y material de los principios rigiendo sus respectivos campos de acción sin roce ni conflictos irreparables, que no los hay posibles dentro de la Constitución, como quiera que no se han instituido por ella, poderes discrepantes, sino, al contrario, entidades legales armonizadas en la afinidad suprema de la organización social y del bien público, principio y fin de las instituciones políticas que nos rigen. Elocuentes palabras que no sólo sientan admirablemente la doctrina jurídica que ha venido a armonizar tesis, al parecer totalmente contrapuestas, sino que han permitido después otra hermenéutica para casos concretos en que se encontraban en pleito facultades im-

positivas de una provincia con respecto a otra y que un fallo reciente ha venido a aclarar también, estableciendo que las facultades impositivas de las provincias están delimitadas por el artículo 10 de la Constitución, es decir, que esas facultades provinciales de poder crear gravámenes como fuentes de sus recursos naturales cesa o debe detenerse, cuando puede ser una traba efectiva para el libre comercio de los productos de una provincia al entrar en otra. Si es exacto, entonces, que las provincias han poseído y poseen la facultad constitucional de crear gravámenes como los impuestos internos al consumo, a la manera de recursos naturales, con qué nutrir su tesoro para atender las necesidades públicas, no puede decirse que hayan estado cometiendo abusos cuando han ejercitado, dentro de la órbita constitucional, esa facultad que les es inherente y que proviene de la reserva expresa, que ellas mismas hicieron cuando firmaron la Carta de 1853.

No es entonces aceptable la imputación que se quiere hacer a las provincias que han recurrido en especial, al impuesto sobre su producción, como fuente de recursos para su tesoro. Han ejercitado una facultad legítima y no se les puede exigir que cesen en el ejercicio de esa facultad, sino por un renunciamiento voluntario.

El ambiente público de esas provincias, que hemos traducido en el seno de la comisión y que estamos reflejando en este recinto los representantes de las provincias que han hecho uso preponderante de esas fuentes de recursos, dice que están dispuestas a renunciar a esas facultades porque comprenden que el interés de la Nación está por encima del de las provincias y que hermanando el interés de éstas con el interés del todo, se realiza la obra de engrandecimiento, que fué la inspiración que presidió la labor constitucional de 1853.

Convertido en ley este proyecto, será una ley contrato entre la Nación y las provincias. Lógico es, entonces, que se especifiquen las obligaciones y los derechos que las partes contratantes ad-

quieran por este instrumento legal que se crea. Es exactísima la afirmación del señor ministro de Hacienda cuando decía que era ajeno a la economía de la ley, el derecho que se pretende alegar en favor de la Municipalidad de la Capital. La Capital no es parte en esta ley, no renuncia a ninguna facultad, mal puede extraer, entonces, beneficio directo de un contrato que para ella es, en cierto modo, *res inter alios acta*.

De paso, deseo aclarar una observación que hizo el señor diputado Dickmann hace poco, cuando se refirió a la actitud del señor diputado por Buenos Aires, doctor Groppo, que había defendido los derechos de las municipalidades. El señor diputado Groppo y otros miembros de la comisión, entre los que me cuento, hemos defendido los derechos de los municipios de las provincias afectadas por esta ley contrato, pero con este concepto esencial: que los municipios provinciales son parte integrante de la entidad que viene a contratar con la Nación. La Capital no es parte integrante de esta ley contrato.

Lógico es, entonces, que tratáramos de resguardar los derechos de los municipios, a la vez que les imponemos obligaciones por el articulado de la ley; hay renunciaciones que deben poner en práctica esos municipios.

Alguien ha hecho la objeción de que no es concebible este acto por el cual aparecen contratando las provincias con la Nación. Sin embargo, nuestro derecho público nos ofrece múltiples casos de leyes que son verdaderas leyes contratos. Nuestra tradición histórica proviene de tratados entre las provincias, y expresas prescripciones de nuestra Carta Fundamental autorizan esta suerte de leyes. Así, el artículo 107 se refiere a la facultad que poseen las provincias para celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, de intereses económicos, y trabajos de utilidad común con conocimiento del Congreso federal. También pueden celebrar pactos que tiendan a promover su industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras, etcétera.

De manera que nuestra Constitución autoriza en forma indubitable esta clase de pactos.

Por otra parte, el artículo 13 se refiere a la celebración de pactos de índole más delicada que la del que estamos tratando. Ese artículo establece que no podrá erigirse una provincia en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una sola sin el consentimiento de las Legislaturas de las provincias interesadas y del Congreso.

Y si la Constitución autoriza expresamente que dos provincias puedan renunciar a su soberanía para reunirse en una sola, ¿cómo no van a poder celebrar esta suerte de leyes-contratos que tienden a satisfacer intereses económicos de ellas o intereses económicos de las provincias y de la Nación?

He tocado así, aunque no tan ampliamente como el tema lo merece, un aspecto esencial, porque es el aspecto constitucional. Y me preocupa esta fase del asunto porque en las funciones de legislador entiendo que lo primero que debemos observar cada vez que intentamos sancionar una ley, es si ella estará o no encuadrada dentro de los cánones constitucionales.

No es este mismo concepto el que parecen observar los señores diputados del sector socialista, cuando en múltiples ocasiones los hemos visto preocuparse de la fase material, o la financiera, económica o política, pero relegando siempre a segundo término el aspecto constitucional con la excusa de que ellos no tienen un concepto excesivamente legalista. Y así en las objeciones que se le han hecho a este proyecto de parte de ese sector, no ha habido una sola que se refiera al aspecto legal o constitucional.

Para cumplir con mi promesa de brevedad, voy a referirme a continuación muy rápidamente a un punto que debo recoger de la exposición del señor diputado Ghioldi, porque concierne especialmente a la provincia que represento. Entre las varias observaciones que en el curso de su exposición formuló al proyecto, relacionadas con la provincia de Mendoza, expresó algo que significa una imputación y que dijo con el tono

suficientemente expresivo para que no pudiera traducirse sino como tal, es decir, como una imputación de carácter grave. Dijo que la provincia de Mendoza realiza dumping.

No hay tal cosa. La ley provincial 1.068, de reciente creación, pues no tiene más de un año de vigor, a la que indudablemente ha querido referirse el señor diputado, ha tenido en vista contemplar la posibilidad de intensificar el consumo del producto mendocino en las diferentes plazas que pueden absorberlo dentro y fuera del país. Para ello ha creado primas a su mayor colocación en el interior de la República y a la exportación al extranjero y a los vinos superiores embotellados; esas primas no importan ni pueden importar el dumping. El dumping consiste en tratar de colocar el producto vendiéndolo a menor precio del de costo para hacer imposible la colocación en forma normal del producto rival, mientras que estas primas sólo tienden a compensar en parte los gastos de flete para que puedan ir los productos a las plazas a las que difícilmente pueden llegar por la distancia y por el recargo que importa en el precio de venta el flete ferroviario.

No quiero extenderme más en esta explicación para no ocupar por mayor tiempo la atención de la Honorable Cámara; pero antes de terminar voy a recoger otras dos observaciones contenidas en la exposición del señor diputado Ghioldi.

Dijo el señor diputado, al referirse a este proyecto, que ese dumping se realizaba con la concurrencia del ferrocarril. Tal afirmación es completamente inexacta porque, por desgracia, subsiste todavía para Mendoza una situación totalmente opuesta. El Ferrocarril Pacífico mantiene una tarifa diferencial que llama parabólica, por medio de la cual el vino de San Juan a Retiro paga menos flete que el vino de Mendoza a Retiro; de manera que el dumping para Mendoza sería precisamente contra ella y no a su favor. El vino de Mendoza paga por flete hasta Retiro 49 pesos, y el de San Juan 42 pesos, siendo, como es notorio, la distancia de San Juan a Retiro mayor en 180 kilómetros.

Dijo también el señor diputado Ghioldi que este proyecto de ley había sido impulsado por intereses espurios y yo para contestar a esto voy a valerme, para ser más breve, de las palabras con que el senador Sánchez Sorondo fundaba, con su elocuencia habitual, el proyecto que presentó en el Senado sobre esta misma materia. «Los que hemos creído ver con alguna claridad la magnitud y la posición de los nuevos fenómenos económicos, los que apreciamos este momento excepcional en la vida de relación de los pueblos y trascendental para el futuro de nuestro país; los que sentimos la emoción de estas horas; los que oímos el grito que clama acción desde la entraña de nuestra tierra, estamos obligados a ponernos a la tarea, por dura y por pesada que ella sea. Así, y sólo así, justificaremos nuestra presencia en las Cámaras legislativas, porque, ante los ataques que se llevan a nuestra cultura institucional, nosotros no podemos responder sino de una manera: trabajando por el bien del país.»

Los que hemos impulsado este proyecto de ley desde el remoto origen de esa cláusula de la ley de presupuesto sancionada el año pasado; los que bregamos por que esa cláusula fuera incluida en la ley de presupuesto; los que después hemos instado al ministro de Hacienda para que le diera forma al proyecto; los que hemos colaborado con él antes de que el mensaje llegara a esta Cámara y los que después hemos colaborado tanto en la subcomisión especial como en la Comisión de Presupuesto, hemos entendido que en este asunto tal vez más que en ningún otro de los que hemos tenido a nuestra consideración durante estos últimos tres años, era menester poner al servicio del país nuestra mayor capacidad y nuestra mayor energía y dedicación.

Con ese concepto hemos impulsado esta ley. No ha habido, por suerte, intereses espurios que hayan propulsado su confección ni que se hayan infiltrado subrepticamente.

Por último, debo decir que es totalmente injusta la afirmación de que las

provincias llamadas productoras o que han gravado su producción, hayan estado esquilmando a la población de la República. Esas provincias han ejercitado, como ya lo demostré, un derecho legítimo, incuestionable y constitucional; han levantado recursos para atender a sus necesidades de subsistencia y para labrar su engrandecimiento y con esto el de la Nación, cumpliendo, de esta suerte, fielmente, el mandato básico de los constituyentes: proteger las industrias, amparar el trabajo y promover el bienestar general. Esas mismas provincias, a la par de todas las demás, estuvieron dispuestas a salvar a la Nación en los momentos angustiosos de principios del año 1932 y sus representantes en este Congreso votaron, con plena conciencia de la obra que realizaban, todas las medidas de carácter financiero, todas las leyes de carácter impositivo que permitieron al erario nacional salir de su angustiosa situación y a la República desarraigarse poco a poco del pantano en que parecía iba a sumergirse.

No se concibe tanta falta de equidad para juzgar actitudes; y, en cambio, puedo decir con orgullo que no es Mendoza la provincia que en el pasado, en el presente o en el futuro, vaya a afirmar que la Nación trató de esquilmarla, o que la esquilmo, cuando San Martín fué a formar allá, en aquel humilde rincón serrano, el ejército que transpuso los Andes y dió la libertad a medio continente, sacando de ese pueblo reducido, minúsculo, de escasísimos recursos, todos los elementos indispensables, en material, en hombres y en patriotismo, para llevar a cabo su genial ensueño libertador. (*¡Muy bien!*).

**Sr. Pena.** — Pido la palabra.

Advierto, por mi propia fatiga, la fatiga de los colegas. Pero me veo obligado, a esta hora de la madrugada, a considerar un asunto de tanta complejidad, que exige un estado intelectual lúcido, que se lo tiene a la mañana después de dormir, pero que es difícil conservarlo después de largas exposiciones que nos han impuesto una atención constante de muchas horas. De acuerdo

con lo resuelto por la mayoría, debo hacerme cargo de la situación imponiéndome el sacrificio, e imponiéndolo a los señores diputados, de seguir adelante con esta obra, a pesar de la hora avanzada.

Desde nuestro punto de vista la Cámara debería estar considerando el presupuesto de gastos. Eso es lo previo y lo que corresponde en todo proceso ordenado en esta materia. Pero la mayoría ha resuelto también empezar por donde le ha parecido mejor, dejando de lado el principio universalmente reconocido de que debe empezarse el estudio de las leyes financieras de un país por la ley de gastos.

El asunto que consideramos tiene aspectos complejos, pero no es para tanto como resulta de la exposición del señor ministro de Hacienda. Es una hipertrofia de la cuestión la que ha presentado el ministro de Hacienda, con el propósito de exaltar su propia personalidad. Hay muchos cuadros, muchos números, pero no es una tarea tan extraordinaria ni una cuestión tan sin antecedentes. Es una cosa relativamente sencilla en su concepción y fácilmente aplicable en su desarrollo y que en buena parte se debe a la obra de funcionarios que la han preparado y elaborado, funcionarios a los cuales conocemos en la comisión por su competencia en la materia son los que han hecho la obra, y el ministro aparece ahora jactándose como si él fuera el que ha inventado el asunto del principio hasta el fin. No estamos, a esta hora de la madrugada, tan dormidos como para olvidar lo que ha pasado en el seno de la comisión. (*Risas*). Es demasiado: no se puede admitir todo esto.

Se nos ha hecho el cargo de que nosotros no podemos nunca tener un elogio para la obra magna de este ministro de Hacienda, y nos ha dicho de que a pesar de que él es muy pródigo en elogios, no ha encontrado nunca elogios para su obra. Desde nuestro punto de vista — ya lo dije esta tarde — es difícil un elogio a la obra del señor ministro, porque si nosotros decimos ahora lo que el ministro decía como diputado, cuando

estaba con nosotros, se enoja. En verdad es para nosotros difícil el elogio porque nos encontramos, frente al ministro de Hacienda, frente a un desertor sin amnistía.

Este proyecto, repito, no es una cosa del otro mundo. No ha sido elaborado sobre un estudio que haya hecho perder el sueño al ministro de Hacienda.

Basta saber que esto empezó de una manera y ha terminado de otra. Si era un plan tan ajustado y matemático, no habría podido salir de la comisión sino de acuerdo con la seguridad dada por el ministro de que el plan era perfecto; pero ha sido modificado en su financiación.

No sé si los señores diputados se han dado el trabajo de saber que el desarrollo del plan en los años de su vigor, importa nada menos que 1.815.118.000 pesos... es tan grande la suma que la ponen en miles, despreciando los centenares como unidades de menor importancia.

Se habla mucho de los impuestos al consumo y se presenta este plan como una obra fantástica. En realidad se trata tan sólo de los impuestos a los malos consumos, a los alcoholes, vinos, cervezas, naipes, tabacos, cigarrillos. A nosotros nos interesa principalmente la parte en que este plan incide por primera vez, con carácter nacional, sobre el azúcar; en lo demás nuestro entusiasmo no es delirante, no creemos que sea cosa del otro mundo en cuanto se trata de gravámenes a los malos consumos, a las cosas superfluas como las alhajas y las pieles y a los objetos de vicio.

No crea el país que mañana costarán menos la carne o el pan, ni que habrá restaurantes económicos con tarifas 50 por ciento más bajas de las que rigen hoy; no va a pasar nada de eso: hay que desvanecer esa ilusión.

Me he tomado el trabajo de hacer una planilla, tabulando los datos que hay en el desarrollo de este proceso a través de su financiación, tomándolos por provincias y por años en su total. Desde luego, encontramos que las matemáticas han cambiado, como digo. No tenía a mano los elementos para establecer el



desarrollo total de la financiación del plan del Poder Ejecutivo; pero es seguro que con las modificaciones introducidas, que importan 37.000.000 más en los primeros 5 años, la diferencia al final de los 20 años entre el despacho de la comisión y el proyecto del Poder Ejecutivo, debe llegar a una cifra considerable. ¡Pero el proyecto del señor ministro estaba tan admirablemente calculado que puede seguir adelante sin inconvenientes!

Por este proyecto las provincias van a recibir en total estas sumas: Buenos Aires, pesos 470.569.000; Santa Fe, 219.440.000; Córdoba, 179.477.000; Entre Ríos, 96.502.000; Tucumán, 176.712.000 — debe ser muy poco, señor diputado Padrós —; Salta, 39.773.000; Santiago del Estero, 55.170.000; Mendoza, 293.259.000. San Martín ha sido invocado recién para establecer el carácter de la contribución a favor del gobierno de Mendoza —; Jujuy, 42.131.000; Corrientes, 63.891.000; San Luis, 25.070.000; San Juan, 130.776.000; La Rioja, 16.183.000; Catamarca, 20.131.000. Las sumas que corresponden año por año, son para 1935, de 72.800.000; para 1936, de 74.900.000; para 1937, de 77.000.000; y así para 1940, son 82.000.000; para 1945, son 91.000.000; para 1950, son 100.000.000 y así sucesivamente. Pero ya el señor diputado Simón Padrós dió las cifras relativas para no impresionar a la Cámara con cifras absolutas, porque él quería probar que Tucumán tenía una ventaja de 0,5 % de aumento con relación a algunas provincias que tienen una ventaja de 12 %. Pero las cifras absolutas tienen alguna importancia. Por ejemplo: Catamarca empieza a cobrar 184.000 pesos y va a terminar recibiendo 1.562.000; Corrientes empezará por recibir 687.000 pesos en 1935 y terminará recibiendo 5.401.000 en el año 1954.

Yo pregunto si hay alguna razón para que estas cosas tengan una duración tan larga y si la situación será tan irremediable, tan inconvenciente, que fuera necesario buscar dinero en el extranjero para llevar adelante un plan cuyos resultados pudieran no ser los previstos. ¿Quiénes

son los que intervienen en este asunto? La Nación y las provincias. ¿Y qué es la Nación? La reunión de las provincias. ¿Y cómo hay tanto desacuerdo entre estos dos elementos? Si la Nación es la síntesis de las provincias, ¿a qué vienen tantas dificultades, tanto contrato, tanto tratado, tantas cosas raras, como si estuviéramos en una reunión de diplomáticos que representan a países distintos? Evidentemente, hay en esto un poco de fantasía.

Estoy de acuerdo en la unificación, pero para ello no es necesario hacer un contrato como si se tratara de partes que se recelan y que dudan de la buena fe con que actúan. Esto parece tan de sentido común que está de más cualquier argumentación de carácter constitucional para oponer reparos a esta sanción por vía de ensayo. La unificación es muy buena en doctrina. ¿Cómo no lo vamos a comprender? Habría que unificar miles de cosas en el orden nacional, sobre todo la legislación del trabajo, de que tan celosas se muestran las provincias para imponer condiciones en provecho de los capitalistas locales. Cuando se trata de llevar más allá de la jurisdicción de la Capital Federal y de los territorios, una ley benefactora del trabajo humano, inmediatamente se levanta la Constitución como si fuera una valla infranqueable para cualquiera tentativa de bien público.

Entendemos todas las ventajas de la unificación y ya el señor diputado Ghioldi ha expresado nuestro punto de vista con toda elocuencia. No es un problema de ahora, y la pretendida solución no ha salido de la cabeza del señor ministro de Hacienda. Es una cosa vieja.

Se trataba de mandar hacer cuadros por los empleados y, en definitiva, se consultaba más que todo las simpatías del que hacía las tablas.

El ministro se ha encargado de decirnos hoy que las provincias han obtenido sus exigencias más ambiciosas. Pero lo malo de esta unificación está en que ella da un estado de obligación pública a ciertas situaciones de hecho que hacen que la unificación en buena

parte aparezca, más que como se lo pretende — tratados y convenios entre la Nación y las provincias — como la organización de cierto tipo de legislación con vistas a resolver intereses particulares de gremios determinados.

Se trata de resolver un viejo problema que afecta principalmente a tres provincias, Mendoza, San Juan y Tucumán, que tienen industrias que han aprovechado del sacrificio de la Nación que se ha impuesto la carestía de los productos que ellas elaboran, para desarrollar un sistema hipertrofiado de finanzas locales, utilizando la diferencia marginal entre el derecho de aduana y todo cuanto ellas podían sacar sin peligro de que entrara el producto extranjero. De manera que, haciendo traición a la Nación que se imponía el sacrificio de consumir caros los artículos, ellas, en lugar de bajar el precio de los productos para desarrollar el consumo, se encargaban de encarecer el precio y aprovechar en lo posible el margen del derecho de aduana.

Pero llegó un momento en que se hizo imposible seguir adelante, porque el mal ejemplo es lo que más cunde, y entonces, lo de Mendoza, Tucumán y San Juan ha generado, por otra parte, un proceso de represalias y el desarrollo de una lucha económica entre las provincias argentinas. La ley viene a poner orden; pero, ¿para qué la ley va a poner un orden? ¿Para resolver el problema en favor del consumidor? ¿Mañana será más barato el azúcar, señor diputado Simón Padrós? ¡No! Va a ser más caro, si no se aclara la ley. Esta ley no persigue, entonces, el favorecer los consumos ni la baja de los precios de los productos necesarios para la vida del pueblo. Al contrario.

El señor ministro de Hacienda ha dicho muchas palabras, pero luego resulta que los actos de gobierno no han respondido a esas palabras, no porque él no quisiera hacer; yo admito que, en buena parte, el ministro desearía hacer muchas cosas, pero él no está para hacer lo que quiere, sino lo que los intereses que allí lo tienen desean que haga.

**Sr. Corominas Segura.** — No es posible referirse a un ministro de Esta-

do en estos términos. El señor diputado puede hacerlo en forma más respetuosa. No son intereses que puedan mencionarse de un modo tan deleznable los que tienen a un alto funcionario desempeñando las tareas que todo el país ve con aplauso.

**Sr. Pena.** — Tan alto como el señor ministro es el señor diputado. No se achique.

**Sr. Corominas Segura.** — No estoy en juego yo, sino los términos parlamentarios en que se debe hablar de un ministro.

**Sr. Presidente (Noble R. J.).** — Formulada la cuestión, la Presidencia entiende y espera que el señor diputado ha de tomar en cuenta la observación.

**Sr. Corominas Segura.** — No deben quedar en el Diario de Sesiones esas expresiones.

**Sr. Pena.** — ¿Qué presidente habla?

**Sr. Corominas Segura.** — Ahora estoy hablando yo.

**Sr. Pena.** — ¡Hable!

**Sr. Presidente (Noble R. J.).** — Continúa el señor diputado por la Capital.

**Sr. Pena.** — Está hablando el presidente del bloque demócrata nacional.

**Sr. Corominas Segura.** — Pido que se testen del Diario de Sesiones esas palabras.

**Sr. Presidente (Noble R. J.).** — La Presidencia revisará la versión y tomará las medidas pertinentes.

**Sr. Noble (J. A.).** — Se ha interpretado mal. El señor diputado se ha referido a intereses que el señor ministro contempla desde el ministerio.

**Sr. Presidente (Noble R. J.).** — Continúa con la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Pena.** — No quiero que se haga respecto de mis palabras ninguna interpretación con fines de deformación. He dicho una cosa muy clara. Conozco las ideas del ministro de Hacienda. Admito su buena voluntad de querer hacer algunas cosas mejor de lo que resultan, pero admito y admitirá el señor diputado que el ministro de Hacienda está sometido a la gravitación de intereses contrarios a sus ideas, y que pueden más que sus ideas. Si eso les parece que no es parlamentario...

**Sr. Briuolo.** — Perfectamente parlamentario.

**Sr. Godoy.** — Ya está el fallo del tribunal supremo.

**Sr. Briuolo.** — ¿Cómo no voy a fallar? ¿Acaso sólo el señor diputado tiene la lucidez necesaria para fallar? ¿Necesitamos de usted para que nos interprete? ¿Cree que usted sólo puede hacerlo?

**Sr. Godoy.** — El señor diputado parece que tuviera la exclusividad...

**Sr. Briuolo.** — ¡Haga el favor!

—Suenan la campana de orden.

**Sr. Godoy.** — La ridiculez del gesto está en consonancia con la del fallo.

**Sr. Presidente (Noble R. J.).** — No interrumpa el señor diputado.

**Sr. Pena.** — En este proyecto aparecen en danza fantástica millones de pesos y la gente que tiene la idea de sacarse el millón, cuando ve una cifra de seis ceros, aunque no se saque el millón, tiene una impresión tan fuerte que cuando se habla de muchos millones supone que los que los manejan son personas dotadas de ingenio e inteligencia superior, extraordinaria. Pero los mismos ceros se ponen a la izquierda y reducen totalmente el valor de las personas y de esas inteligencias.

Se habla de muchos millones, pero lo que no hay aquí son propósitos tan altos, tan nobles, tan elevados, como los que se ha pretendido lanzar en la discusión, apelando de manera reiterada a invocaciones patrióticas como si estuviéramos aquí reunidos representantes no de una nación solidaria y de provincias que hacen un pacto entre ellas, sino con un ente extraño. La Nación está aquí como enemigo de todos estos pobres hombres que son los diputados de las provincias y tienen un miedo bárbaro a la Nación, que son ellos.

Es algo fantástico. Parecería que algún día la Nación fuera a trasladarse más allá de la costanera.

Es sencillamente algo que choca al sentimiento más elemental de solidaridad nacional estas actitudes y expresiones, respecto de cosas tan fundamentales.

Las provincias sin derecho, aunque se hace la cuestión de que son poderes concurrentes, han gravado al azúcar, como Tucumán, Salta y Jujuy, para enriquecer sus arcas fiscales a expensas del consumo nacional. Ahora se trata de consolidar la situación por diez años. Y esto con una característica un tanto rara. El proyecto tan perfecto del ministro, que ha sufrido tantas modificaciones, en un artículo final, decía...

—Suenan el timbre que indica que ha transcurrido el tiempo reglamentario.

**Sr. Presidente (Noble R. J.).** — Ha vencido el término reglamentario de media hora.

**Sr. Pena.** — Está equivocado. Conveniría que leyera el reglamento mientras sigo hablando.

**Sr. Presidente (Noble R. J.).** — El señor diputado no puede hablar en nombre de su sector, porque ya lo ha hecho el señor diputado Ghioldi.

**Sr. Pena.** — El señor diputado Ghioldi ha hablado en nombre de la Comisión de Presupuesto. Yo hablo en nombre del sector.

**Sr. Presidente (Noble R. J.).** — En la orden del día de la Comisión de Presupuesto no hay constancia de ningún despacho en disidencia de la representación socialista. La Secretaría leerá las palabras del señor diputado Ghioldi.

**Sr. Pena.** — ¿Puedo o no hablar?

**Sr. Presidente (Noble R. J.).** — Antes la Secretaría leerá las expresiones del señor diputado Ghioldi.

**Sr. Secretario (Zavalla Carbó).** — (*Leyendo*): «Sr. Ghioldi. — Tengo la tarea de informar los puntos de vista de la representación socialista en este despacho sobre unificación de impuestos internos.»

**Sr. Presidente (Noble R. J.).** — La Cámara decidirá por una votación si se le concede prórroga.

**Sr. Ghioldi.** — Que se levante la sesión.

**Sr. Pena.** — Es un abuso intolerable de la Presidencia que en este momento está resolviendo arbitrariamente.

te una cuestión que la Cámara ha resuelto con anterioridad.

**Sr. Presidente** (Noble R. J.). — No le permito al señor diputado por la Capital que le falte a la Presidencia el respeto debido. El señor diputado tiene recursos reglamentarios para promoverle las cuestiones que desee. La

Presidencia tiene la obligación de velar porque se cumpla el reglamento.

No habiendo número en el recinto ni en la casa para votar la moción formulada, queda levantada la sesión.

—Era la hora 1 y 10 minutos del día 30.